

HUMAN
RIGHTS
WATCH

INFORME MUNDIAL | 2015

EVENTOS DE 2014



Informe Mundial 2015

Eventos de 2014

HUMAN
RIGHTS
WATCH

Extraits en español

El falso consuelo de la tiranía 1

por qué los derechos humanos no deben faltar aún en tiempos difíciles

por Kenneth Roth

Internet en la encrucijada.....13

Cómo la vigilancia del gobierno amenaza nuestra forma de comunicarnos

Por Cynthia M. Wong

ARGENTINA..... 25

BOLIVIA..... 30

BRASIL 35

CHILE.....41

COLOMBIA.....46

CUBA 52

ECUADOR 57

ESTADOS UNIDOS..... 63

GUATEMALA 73

GUINEA ECUATORIAL 77

HAITÍ82

HONDURAS86

IRÁN.....90

MARRUECOS..... 95

MÉXICO	101
QATAR	112
UNIÓN EUROPEA.....	122
REINO UNIDO.....	135
VENEZUELA	139

El falso consuelo de la tiranía

Por qué los derechos humanos no deben faltar aún en tiempos difíciles

Por Kenneth Roth

El mundo no había sido testigo de tanto revuelo en toda una generación. En casi todas partes, la proclamada primavera árabe ha dado paso a más conflictos y represión. Los extremistas islamistas cometen atrocidades en masa y amenazan a los civiles en todo Medio Oriente y otras partes de Asia y África. En Ucrania han resucitado tensiones reminiscentes de la Guerra Fría, que incluso provocaron el derribo de un avión. A veces parece como si el mundo se estuviera desmoronando.

La reacción de muchos gobiernos ante las turbulencias ha sido restarle importancia a los derechos humanos e incluso ignorarlos. Gobiernos directamente afectados por la agitación están a menudo ansiosos por una excusa para reprimir la presión popular que busca un cambio democrático. Otros gobiernos influyentes prefieren volver a las relaciones familiares con los autócratas que lidiar con la incertidumbre de un gobierno popular. Algunos de estos gobiernos siguen denunciando problemas de derechos humanos, pero muchos parecen haber llegado a la conclusión de que las graves amenazas a la seguridad de hoy en día deben tener prioridad sobre los derechos humanos. Parecen argumentar que, en este momento tan difícil, los derechos humanos deben estar en un segundo plano, como si fuesen un lujo para tiempos menos complicados.

Esa subordinación de los derechos humanos no solo es errónea, sino también imprudente y contraproducente. Las violaciones de derechos humanos jugaron un papel importante en el surgimiento o agravamiento de la mayoría de los conflictos actuales. La protección de los derechos humanos y permitir que la gente tenga voz a la hora de decidir cómo sus gobiernos abordan las crisis será clave para su resolución. Especialmente en períodos de desafíos y decisiones difíciles, los derechos humanos constituyen una brújula esencial para la acción política.

El auge de ISIS

Ningún desafío en el último año se ha extendido de una manera tan dramática como la aparición del autoproclamado Estado Islámico, el grupo extremista también conocido como ISIS. Uno solo puede horrorizarse ante sus ejecuciones en masa de combatientes capturados y civiles. Este grupo armado sunita ha atacado a yazidis, turcomanos, kurdos, chiitas e incluso a otros sunitas que cuestionan su

interpretación extrema de la ley islámica. Sus militantes han esclavizado, forzado a casarse y violado a mujeres y niñas yazidi. También han decapitado a periodistas y trabajadores humanitarios en grotescos espectáculos grabados en video. Pocas veces una fuerza armada ha despertado una repulsión y oposición tan generalizada.

Sin embargo, ISIS no surgió de la nada. En parte es una consecuencia de la guerra y ocupación militar liderada por Estados Unidos en Irak que comenzó en 2003. Esta ocupación creó, entre otras cosas, un vacío de seguridad y provocó los abusos de los detenidos en la prisión de Abu Ghraib y otros centros de detención administrados por EE.UU. La financiación de grupos extremistas de los Estados del Golfo y sus ciudadanos también desempeñó su papel. Más recientemente, las políticas sectarias de los gobiernos de Irak y Siria, así como la indiferencia internacional ante graves violaciones de los derechos cometidas por esos gobiernos, han sido factores importantes. Si las circunstancias que llevaron a la formación de ISIS se quedan sin resolver, el grupo podría arraigar su control en los dos países y expandirse al Líbano, Jordania, Libia y otros lugares.

Irak

En Irak, ISIS debe gran parte de su levantamiento al abusivo y sectario mando del ex primer ministro Nouri al-Maliki y a la resultante radicalización de la comunidad sunita. Con el respaldo de Irán, Maliki se hizo con el control personal de las fuerzas de seguridad iraquíes y apoyó la formación de las milicias chiitas, muchas de las cuales persiguieron brutalmente a la población minoritaria sunita. Los sunitas se vieron excluidos de determinados empleos gubernamentales, capturados y detenidos arbitrariamente bajo nuevas leyes excesivamente amplias, otros fueron ejecutados de forma sumaria y bombardeados indiscriminadamente.

La gravedad de la persecución puede medirse por sus efectos. El predecesor de ISIS, Al-Qaeda en Irak (AQI), fue derrotado con la ayuda de una coalición militar de tribus sunitas en el oeste de Irak conocida como los Consejos del Despertar. Pero muchas de las tribus que, casi sin ayuda, derrotaron a AQI se volvieron tan temerosas de la masacre y las represalias de las fuerzas de seguridad progubernamentales que, cuando estalló el conflicto en 2014, se sintieron más seguras combatiendo contra las fuerzas que contra ISIS.

Grupos de derechos humanos denunciaron persistentemente el mando abusivo de Maliki, pero EE.UU., el Reino Unido y otros países, deseosos de dejar atrás su propia participación militar en Irak, en gran medida cerraron los ojos a este reinado sectario e incluso le proporcionaron armas.

Hoy en día, hay un mayor reconocimiento de que esta indiferencia ante las atrocidades de Maliki fue un error. Finalmente, fue forzado a dejar el cargo y fue reemplazado por Haider al-Abadi, que ha prometido una forma de gobernanza más inclusiva. Pero conforme la ayuda militar occidental sigue fluyendo hacia Irak, el sectarismo abusivo no ha terminado. Maliki continúa sirviendo como uno de los tres vicepresidentes de Irak, y el débil gobierno ha aumentado considerablemente su dependencia de las milicias chiitas, lo que ha permitido la movilización de casi un millón de combatientes

chiitas, sin supervisión ni regulación gubernamental. De hecho, a causa de la desorganización del ejército iraquí, las milicias son las fuerzas terrestres que lideran la lucha contra ISIS, a pesar del continuo asesinato y limpieza étnica de sunitas como ostensibles simpatizantes de ISIS. Hasta que estas atrocidades no sean erradicadas, es probable que las milicias chiitas sean más propensas a contribuir al reclutamiento de ISIS que a derrotarlo en el campo de batalla.

Mientras tanto, el gobierno iraquí no ha puesto fin a los ataques militares indiscriminados en áreas civiles ni ha puesto en libertad a un importante número de personas detenidas sin orden judicial o que ya han cumplido sus condenas. El poder judicial corrupto y abusivo tampoco ha sido reformado, y las órdenes de Abadi para que se ponga fin al mando abusivo y excluyente siguen sin cumplirse. A largo plazo, completar estas reformas será al menos tan importante como la acción militar para proteger a los civiles de las atrocidades de ISIS.

Siria

En Siria, ISIS debe su auge a diversos factores, incluyendo las porosas fronteras con Turquía, que han permitido la entrada de combatientes armados y financiados por gobiernos extranjeros. Una vez dentro del país, muchos se han unido al grupo extremista. ISIS también ha logrado una gran cantidad de fondos mediante la exigencia de exorbitantes rescates y la aplicación de “impuestos” sobre las personas en los territorios que controla, así como a través de la venta de petróleo y antigüedades de Siria.

Con estos fundamentos, ISIS llegó a perfilarse como la fuerza más capacitada para hacer frente a la extraordinaria brutalidad del presidente Bashar al-Assad y sus tropas. Las fuerzas de Assad han estado atacando viciosa y deliberadamente a civiles que viven en zonas controladas por la oposición, con el objetivo de despoblar estas áreas y castigar a los presuntos simpatizantes de los rebeldes.

Desde que el gobierno sirio hiciera entrega de sus armas químicas, su herramienta más notoria ha sido la bomba de barril, un contenedor de petróleo o envase similar lleno de explosivos de gran potencia y fragmentos de acero. También usada por la fuerza aérea iraquí, la bomba de barril ha ganado notoriedad en Siria, donde la fuerza aérea suele lanzarla desde un helicóptero a gran altura para evitar ser blanco de la artillería antiaérea. Lanzada desde esa altura, es imposible que la bomba de barril apunte con ningún tipo de precisión. Simplemente cae a la tierra, con su temido sonido silbante provocado por el desplazamiento del contenido en el interior del contenedor, hasta que impacta contra el suelo y detona.

Las bombas de barril son tan imprecisas que el ejército sirio no se atreve a utilizarlas cerca del frente de batalla por miedo a herir a sus propias tropas. En su lugar, las lanza sobre territorios controlados por grupos rebeldes, a sabiendas de que destruirán bloques de apartamentos, hospitales, escuelas y otras instituciones de la vida civil. Estas armas indiscriminadas les ha hecho la vida tan imposible a muchos civiles que algunos de los que no han huido ya del país han decidido mudarse con sus familias

cerca del frente de combate, prefiriendo desafiar a francotiradores y la artillería que el horror de las bombas de barril.

Cuando el gobierno sirio atacó a la población civil con armas químicas, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas presionó a Assad para que cesara los ataques y entregara sus armas. Pero a pesar de que el gobierno sirio ha seguido matando a incontables civiles en operaciones indiscriminadas con armas convencionales, como las bombas de barril, así como con municiones en racimo, armas incendiarias y cohetes no guiados, el Consejo de Seguridad se ha mantenido en gran medida al margen. Varios Estados han condenado la masacre, pero no han hecho mucho más para generar presión y acabar con ella.

Rusia ha utilizado su poder de veto en el Consejo de Seguridad para detener los esfuerzos unificados de poner fin a la matanza. Rusia, al igual que Irán, también se ha negado a usar su enorme influencia en Damasco para presionar por el fin de los ataques indiscriminados, a pesar de las demandas del Consejo de Seguridad. Rusia incluida, de que cesen estos ataques. Referir a Siria a la Corte Penal Internacional (CPI) para abordar los graves crímenes internacionales cometidos por todas las partes implicadas, una medida avalada por más de 65 países, sigue siendo una medida reprobatoria para Moscú.

La coalición liderada por Estados Unidos se ha hecho cargo de ISIS, pero ningún país —ya sea un adversario como EE.UU., o partidarios como Rusia e Irán— ha aumentado la presión sobre Assad para que acabe con la masacre de civiles. Las dos cosas no pueden, ni deberían, ser separadas tan fácilmente.

Esta preocupación selectiva es una bendición para los reclutadores de ISIS, que se presentan a sí mismos como los únicos dispuestos y capaces de enfrentarse a las atrocidades de Assad. Está claro que limitarse a atacar a ISIS no va a acabar con su atractivo. Es imprescindible una voluntad más amplia de proteger a los civiles sirios.

Una mayor represión en Egipto

En Egipto, el brutal reinado del ex general convertido en presidente, Abdel Fattah al-Sisi, ha tratado de aplastar las aspiraciones democráticas de la plaza Tahrir. El levantamiento que derrocó el gobierno autoritario del presidente Hosni Mubarak dio a Egipto sus primeras elecciones presidenciales libres y justas, que fueron ganadas por Mohamed Morsy de la Hermandad Musulmana. El gobierno de Morsy gobernó de una manera que hizo que muchos egipcios temieran (legítimamente o no) el surgimiento gradual de un estricto régimen islámico, si bien sus abusos nunca llegaron al nivel de los que sufre hoy el pueblo de Egipto a manos del gobierno militar que derrocó a Morsy el 30 de junio de 2013.

El golpe militar encabezado por Sisi aniquiló la Hermandad y sus partidarios. En apenas 12 horas el 14 de agosto de 2013, las fuerzas de seguridad supervisadas por Sisi y el ministro del Interior, Mohamed Ibrahim, dispararon y mataron sistemáticamente al menos a 817 manifestantes, en su mayoría pacíficos, en la plaza de

Rab'a en El Cairo, donde desde hacía semanas se llevaba a cabo una concentración masiva para protestar por la retirada de Morsy.

Las fuerzas de seguridad alegaron defensa propia, pero su número de víctimas palidecían en comparación con el número de manifestantes asesinados por francotiradores y otros hombres armados, muchos de ellos cuando iban en busca de ayuda médica. Las autoridades egipcias habían planeado la dispersión violenta de la concentración con semanas de antelación, y tenían totalmente prevista una gran cantidad de muertes. Se trata de la mayor masacre de manifestantes en la historia y la más mortífera, al menos desde la represión de China del movimiento por la democracia en la Plaza de Tiananmen en 1989.

Desde el golpe, las fuerzas de seguridad de Sisi han encarcelado a decenas de miles de presuntos miembros de la Hermandad Musulmana, a menudo sin cargos ni juicio, así como a muchos activistas seculares. Los tribunales egipcios han dictado centenares de sentencias de muerte después de juicios masivos que no hacen ninguna pretensión de individualizar las evidencias ni de conceder una oportunidad auténtica para una defensa.

La respuesta de la comunidad internacional a esta represión sin precedentes ha sido vergonzosamente decepcionante. En el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, 27 países presionaron a Egipto para que investigase la masacre de la plaza Rab'a pero no lograron una mayoría en el Consejo. Hay poco interés en EE.UU., el Reino Unido y otros gobiernos europeos clave por investigar los abusos del gobierno militar. De hecho, aunque Washington impondrá sanciones selectivas contra funcionarios venezolanos (una iniciativa que apoyamos) por la brutal respuesta de sus fuerzas de seguridad a las protestas —en las que murieron no más de unas decenas de manifestantes (si bien hubo muchas otras víctimas de otro tipo)—, se ha opuesto a las sanciones para Egipto, a pesar de la muerte de cerca de 1.000 manifestantes a manos del gobierno en la plaza de Rab'a.

El Congreso de EE.UU. redujo parte de su ayuda militar a Egipto a pesar de que el gobierno de Obama se resistió a referirse a la toma de poder como un “golpe de Estado” por temor a nuevas ramificaciones bajo la legislación estadounidense. El secretario de Estado, John Kerry, habló repetidamente de una transición a la democracia que supuestamente estaba en marcha en Egipto, a pesar de la falta de elementos que lo evidenciaran. Ahora que el Congreso ha añadido una nueva excepción de seguridad nacional a las condiciones vigentes para la ayuda militar, parece probable que el gobierno de EE.UU. restaure casi todo, si no todo, su apoyo militar a El Cairo, pese a no producirse ni una tregua en su represión. Esta urgencia por volver a abrir el grifo de la ayuda está motivada por el hecho de que les resulta prioritario contar con el apoyo de los militares egipcios para reducir la insurgencia en el Sinaí, respaldar la lucha de Israel contra Hamas en Gaza y apoyar la guerra contra ISIS en Siria e Irak, por encima de proteger los derechos del pueblo egipcio. El Reino Unido, Francia y otros gobiernos europeos tampoco han hecho mucho para revertir la ofensiva sin precedentes de Sisi.

Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos (EAU) se mostraron muy dispuestos a ayudar a Egipto a derrotar a la Hermandad Musulmana. Como monarquías que invocan el Islam para su propia legitimidad, parecen estar aterrados ante un movimiento religioso que gobierna en nombre del Islam pero que aún defiende unas elecciones democráticas. Han invertido miles de millones de dólares en el proyecto de supresión de Sisi y han clasificado a la Hermandad como una organización terrorista. Emiratos Árabes Unidos ha perseguido en el país a aquellas personas consideradas como representantes de los puntos de vista de la Hermandad.

El apoyo internacional al gobierno represivo de Sisi no es solo un desastre para las esperanzas de Egipto de un futuro democrático, sino que además envía un terrible mensaje a la región. ISIS ahora puede argumentar de manera creíble que la violencia es el único camino hacia el poder para los islamistas porque cuando lo buscaron a través de elecciones justas y ganaron, fueron expulsados con escasas protestas internacionales. Una vez más, las prioridades a corto plazo de algunas potencias influyentes —acabar con la Hermandad Musulmana— podrían causar una debacle a largo plazo para el futuro político de la región.

El conflicto entre Israel y Palestina

El año pasado presenciamos la construcción de más asentamientos por parte de Israel, más violencia suscitada por el lema “ojo por ojo” en Cisjordania y otro episodio del sangriento conflicto armado en Gaza. Hamas y otros grupos armados palestinos en Gaza lanzaron indiscriminadamente miles de cohetes y morteros hacia centros de población israelíes. En algunos casos, Hamas y sus aliados pusieron innecesariamente en peligro a los civiles palestinos al luchar desde zonas pobladas y ejecutaron sumariamente a presuntos traidores palestinos.

Decenas de miles de cohetes, bombas y ataques de artillería israelíes, así como una definición cada vez más amplia de lo que constituían objetivos militares legítimos, ataques sin ningún objetivo militar evidente y una preocupación muy débil por las víctimas civiles, se tradujeron en unos 1.500 civiles muertos en Gaza y causaron una destrucción sin precedentes en viviendas e infraestructuras civiles. En la Cisjordania ocupada, además de la expansión de los asentamientos, Israel continuó sus demoliciones discriminatorias y punitivas de viviendas palestinas, y siguió haciendo un uso innecesario de fuerza letal contra los palestinos, matando a decenas de ellos, niños incluidos.

Israel tiene un pobre historial a la hora de hacer que sus propias fuerzas rindan cuentas por graves violaciones de las leyes de guerra; Hamas ni siquiera ha pretendido investigar las violaciones cometidas por los combatientes palestinos. La intervención de la Corte Penal Internacional (CPI) podría ayudar a disuadir a ambas partes de cometer crímenes de guerra, mientras ofrece a las víctimas un mínimo de justicia. En su condición de Estado observador de la ONU, Palestina cumple los criterios para poder unirse a la CPI y precisamente marcó el Año Nuevo solicitando su ingreso. La CPI tendrá jurisdicción sobre los crímenes de guerra cometidos en o desde territorio palestino; es decir, su mandato se aplicará a las dos partes en conflicto.

Sin embargo, EE.UU. y los principales países de la UE trataron de impedirlo, ejerciendo una presión equivocada sobre Palestina para que no se sumase al tribunal con sede en La Haya. Su argumento era que el involucramiento de la CPI sería poco útil para el proceso de paz prácticamente estancado. Sin embargo, suelen adoptar la posición opuesta en prácticamente todas las otras situaciones de crímenes de guerra a gran escala, en cuyos casos reconocen que frenar estos crímenes es a menudo un requisito previo para la construcción de la confianza necesaria para unas conversaciones de paz productivas. Nadie ha explicado de manera creíble por qué el conflicto palestino-israelí debe ser una excepción a esta regla.

El verdadero motivo de los gobiernos occidentales es proteger a los israelíes de un posible juicio. Ese tipo de adopción selectiva socava el poder y la legitimidad de la justicia internacional en todo el mundo. Fortalece a los críticos que sostienen que la justicia internacional está reservada para los países débiles que no son aliados cercanos de los poderosos.

Las atrocidades de Boko Haram en Nigeria

Los casos en los que las disturbios desencadenaron un abuso de los derechos no se limitan a Medio Oriente. Las preocupaciones por los derechos humanos son fundamentales en el conflicto en Nigeria, donde el grupo militante islamista Boko Haram ataca tanto a civiles como a las fuerzas de seguridad del país. El grupo armado se ha hecho famoso por su crueldad, colocando bombas en mercados, mezquitas y escuelas, acabando con la vida de miles de civiles. El año pasado, Boko Haram secuestró a cientos de niñas y jóvenes estudiantes en el noreste del país. Algunas fueron obligadas a casarse con militantes y fueron víctimas de violencia sexual. Un secuestro masivo en abril provocó la campaña global en medios sociales “#BringBackOurGirls”, pero esas y muchas otras víctimas permanecen secuestradas.

Nigeria, un país rico en petróleo, debería ser capaz de alinear un ejército profesional, que respetara los derechos y fuera capaz de proteger a los nigerianos de este violento grupo. Sin embargo, el liderazgo del país ha dejado a sus militares mal equipados y poco motivados para combatir los ataques de Boko Haram.

Cuando el ejército ha actuado, a menudo lo ha hecho de manera abusiva, reuniendo a cientos de hombres y niños sospechosos de apoyar a Boko Haram, deteniéndolos en condiciones inhumanas, abusando físicamente de ellos o incluso matándolos. Muchos otros miembros de la comunidad han sido víctimas de desapariciones forzadas, presuntamente a manos de las fuerzas de seguridad. Cuando algunos sospechosos de Boko Haram escaparon en marzo de un famoso y abusivo centro de detención, Giwa Barracks, las fuerzas de seguridad nigerianas, según los informes, volvieron a capturarlos y cientos de ellos fueron sumariamente ejecutados.

La persistente falta de rendición de cuentas ante estas atrocidades ha hecho que sea difícil para los aliados de Nigeria proporcionar asistencia de seguridad por temor a convertirse ellos mismos en cómplices de los abusos. El fracaso del liderazgo de Nigeria en controlar a las fuerzas de seguridad también les ha alejado de las comunidades locales que, de otra forma, habrían aportado voluntariamente información a las

autoridades. Será necesario que el gobierno investigue de forma transparente los presuntos abusos del ejército y castigue a los delincuentes para ganarse “los corazones y las mentes” de la población civil.

La abusiva respuesta de Kenia a Al-Shabaab

Al igual que Nigeria, Kenia ha registrado un alarmante incremento en los ataques extremistas contra la población civil, impulsados, al menos en parte, por una respuesta abusiva de las fuerzas de seguridad. Al-Shabaab, el grupo insurgente islamista somalí, llevó a cabo sus ataques de mayor perfil en un centro comercial de Nairobi, en Mpeketoni y en aldeas cercanas a lo largo de la costa de Kenia, y en Mandera, en el noreste del país.

La respuesta de Kenia ha estado plagada de abusos. En lugar de fortalecer la confianza pública en la capacidad de las fuerzas de seguridad para combatir este tipo de ataques, las operaciones de las fuerzas de seguridad han generado la ira pública y la desconfianza. En abril, después de una serie de ataques con bombas y granadas en Nairobi, los militares y la policía llevaron a cabo la Operación Usalama Watch en el barrio Eastleigh de la ciudad, una ambiciosa campaña que supuso violaciones de los derechos de solicitantes de asilo registrados y refugiados, somalíes indocumentados y otros extranjeros, y keniatas de etnia somalí. Al igual que en operaciones anteriores similares, la policía de Kenia detuvo arbitrariamente a varios miles de personas e hizo un uso excesivo de la fuerza, asaltando casas, extorsionando a residentes y abusando físicamente de los somalíes étnicos.

Mientras tanto, empezaron a acumularse las evidencias que demostraban que unidades antiterroristas de Kenia estaban haciendo desaparecer por la fuerza y ejecutando extrajudicialmente a sospechosos de terrorismo en lugar de llevarlos ante los tribunales. En vez de responder a la protesta pública, el gobierno ha tratado de hacer callar al mensajero con el empoderamiento de más fuerzas de seguridad y el fortalecimiento de los controles legislativos sobre los medios de comunicación, la sociedad civil y otras fuentes de disidencia independiente. Los países donantes, en particular EE.UU. y el Reino Unido, que proporcionan un apoyo importante a los servicios de seguridad keniatas para la lucha contra el terrorismo, han tardado en responder a la creciente evidencia de este comportamiento abusivo.

Rusia y la crisis en Ucrania

La ocupación rusa de la Crimea ucraniana y su asistencia militar a los rebeldes en el este de Ucrania han supuesto grandes desafíos políticos y de seguridad para los gobiernos occidentales. La esencia de la controversia afecta a cuestiones de soberanía en las que Human Rights Watch no toma parte. Sin embargo, la modesta reacción occidental a la intensificación de las violaciones de derechos humanos que se habían estado gestando en Rusia durante los dos años anteriores podría haber agravado la crisis ucraniana.

Los gobiernos occidentales pusieron a Rusia bajo una intensa presión política, incluso mediante la imposición de sanciones selectivas, para alentar a que se retirase

de Crimea y dejase de apoyar a los rebeldes. Sin embargo, estos gobiernos, en gran medida, o subestimaron el régimen cada vez más autoritario de Rusia desde el regreso de Putin al Kremlin, o tuvieron problemas para responder a él.

Ante el temor de una posible “revolución de color”, el Kremlin puso en marcha en 2012 lo que se ha convertido en la ola más intensa de represión de la disidencia desde la era soviética. Al centrarse en grupos de derechos humanos, disidentes, periodistas independientes, manifestantes pacíficos y detractores en Internet, el gobierno ruso redujo radicalmente la posibilidad de que las voces críticas pudiesen llegar a un gran número de personas. El sistema cerrado de información resultante permitió al Kremlin reprimir la mayor parte de la crítica pública sobre sus acciones en Ucrania. La salud de los derechos políticos en Rusia debería ser una parte central de cualquier esfuerzo para resolver el conflicto de Ucrania, pero no lo ha sido.

De la misma manera, Occidente, atrapado en lo que a veces parece una nueva Guerra Fría con Rusia sobre Ucrania, también parece haber vuelto a caer en la vieja mentalidad del bien contra el mal. El deseo de presentar a Ucrania como la víctima inocente de la agresión rusa ha hecho que Occidente se muestre reacio a cuestionar los aspectos preocupantes de la conducta de Ucrania, como su recurso a los llamados “batallones de voluntarios” que abusan sistemáticamente de los detenidos, o el lanzamiento indiscriminado de cohetes contra zonas pobladas. Mientras tanto, las fuerzas pro-Rusia en el este de Ucrania también han cometido graves abusos contra los detenidos y han puesto en peligro a la población civil con el lanzamiento de cohetes desde sus filas. La renuencia occidental a abordar los abusos de Ucrania ha politizado lo que debería ser una apelación por principio a ambas partes de respetar el derecho internacional humanitario, una apelación que, de tener éxito, calmaría la situación y aumentaría la posibilidad de una solución política más amplia.

La represión china contra los uigures en Xinjiang

La reacción del gobierno chino en Xinjiang, la provincia del noroeste del país habitada por la minoría musulmana uigur, ha consistido en responder a las quejas sobre violaciones de los derechos humanos con más abusos y restricciones. Beijing afirma que su represión es necesaria para luchar contra el separatismo y el terrorismo, pero su táctica consiste en imponer algunas de las políticas más draconianas y discriminatorias contra los uigures, incluyendo prohibiciones a lucir barba y velos, restricciones al ayuno y discriminación abierta con respecto a la educación religiosa.

Los crecientes ataques mortales contra civiles y fuerzas de seguridad en Xinjiang son una gran preocupación para el gobierno. Pero la rapidez con la que atribuye la violencia a “terroristas uigures”, a la vez que solo en raras ocasiones presenta pruebas y les niega sistemáticamente a los sospechosos el derecho a un juicio justo, crea un círculo vicioso en el que los uigures, ya reprimidos, se sienten bajo el constante asedio del Estado. De la poca información disponible al público es imposible evaluar con certeza si los condenados y a menudo sentenciados a muerte han cometido actos de violencia y si las severas medidas antiterroristas del gobierno están dirigidas hacia las personas adecuadas.

Tal como ilustra la sentencia extremadamente dura de cadena perpetua dictada en septiembre contra Ilham Tohti, un economista moderado uigur, el Estado sigue sin estar dispuesto a distinguir entre la crítica pacífica y aquellos que recurren a la violencia. Penalizar viciosamente la disidencia pacífica, sin dejar prácticamente ningún espacio para la libertad religiosa o cultural y la ampliación de una estrategia económica en la que los uigures no pueden competir en igualdad con los inmigrantes chinos Han es una receta para más violencia.

La guerra de México contra las drogas está plagada de abusos

A principios de 2007, el gobierno del entonces presidente Felipe Calderón entabló una “guerra contra las drogas” en México, desplegando fuerzas de seguridad en masa para combatir a los violentos carteles de drogas del país. El resultado fue una epidemia de ejecuciones sumarias, desapariciones forzadas y torturas por parte de militares y policías, una espiral de violencia entre organizaciones criminales rivales y una catástrofe de seguridad pública que se ha cobrado la vida de más de 90.000 mexicanos. En sus dos años en el cargo, el actual presidente de México, Enrique Peña Nieto, ha disminuido la retórica pero no ha hecho avances significativos en la reducción de la corrupción y la impunidad que permiten que estas atrocidades sigan ocurriendo.

Washington ha respaldado las políticas de “guerra contra las drogas” de México, prestando asistencia a las fuerzas de seguridad del país y alabando en repetidas ocasiones sus esfuerzos para combatir a estos carteles. Lo que no ha hecho es hablar de los terribles abusos que estas fuerzas cometen, ni velar por el cumplimiento de las condiciones de derechos humanos que el Congreso de EE.UU. impuso sobre una parte de la ayuda que le concede a México. En lugar de avergonzar a un aliado importante y poner en peligro la cooperación bilateral en la lucha contra el narcotráfico y otras prioridades de la política, el gobierno de Obama ha preferido guardar silencio, lo que facilita los esfuerzos de México para restar importancia a sus graves problemas de derechos humanos.

Algunos estados de EE.UU. han hecho más mediante la legalización de la marihuana, al socavar el mercado ilícito de esta droga. El gobierno de Obama ha consentido estas iniciativas, pero apenas las ha secundado. Debería hacerlo. No solo es lo correcto desde la perspectiva del derecho a la intimidad, sino también un paso importante para quebrantar los beneficios que hacen prosperar a los narcotraficantes.

Estados Unidos: la CIA tortura con impunidad

El año concluyó con la publicación por el Comité Selecto del Senado de EE.UU. sobre Inteligencia de un resumen editado de su informe sobre el uso de la tortura por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) contra presuntos terroristas bajo la administración del ex presidente George W. Bush.

Durante su presidencia, Obama ha adoptado una postura firme contra la tortura, dedicando su segundo día en el cargo a prohibir las “técnicas mejoradas de interrogatorio” del gobierno de Bush –un eufemismo para la tortura– y a cerrar los centros secretos de detención de la CIA, donde se llevaban a cabo gran parte de estos

abusos. Sin embargo, Obama se ha negado a investigar, y mucho menos a juzgar, las torturas cometidas por la CIA de Bush, a pesar de tratarse de un requisito de la Convención contra la Tortura, que EE.UU. ratificó en 1994.

Hay varias razones que pueden explicar la negativa de Obama a permitir los procesamientos. Puede que su temor fuera que creasen divisiones políticas, ya que socavarían el apoyo de los partidarios de Bush en el Congreso de Estados Unidos a su agenda legislativa, a pesar de que esa cooperación ha sido prácticamente inexistente. Puede que pensase que serían injustos después de que la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia hubiese dictaminado que las “técnicas mejoradas de interrogatorio” eran legales, a pesar de que el informe del Senado muestra que la CIA sabía que se trataba de tortura y salió en busca de asesoría politizada del gobierno que justificase lo injustificable. Puede que creyese que la grave amenaza de seguridad que supusieron los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 hiciera que recurrir a formas extremas de interrogación fuera algo comprensible, a pesar de que el informe del Senado muestra que dichas prácticas no solo no produjeron apenas ningún tipo de información útil, sino que además socavaron la posición de EE.UU. en el mundo y obstaculizaron los esfuerzos de la lucha contra el terrorismo.

La negativa de Obama a permitir los procesamientos significa que la prohibición penal básica de la tortura sigue sin aplicarse en EE.UU. Esto abre la puerta a que futuros presidentes del país, que inevitablemente afrontarán serias amenazas de seguridad, contemplen la tortura como una opción política. También debilita en gran medida la capacidad del gobierno de EE.UU. para presionar a otros países a que enjuicien a sus propios torturadores, debilitando así una voz importante de los derechos humanos en un momento en que el apoyo por principio es una necesidad urgente.

Las revelaciones en el informe del Senado también requieren que Europa tome medidas, especialmente en los países que acogieron centros de detención de la CIA o fueron cómplices de las entregas extraordinarias y las torturas resultantes. Hasta la fecha, Italia es el único país europeo que ha procesado a personas por su participación en los abusos de la CIA. Finalmente Polonia ha admitido que acogió uno de estos centros clandestinos de detención, pero la investigación penal sobre el caso está estancada. Rumania y Lituania siguen negando su participación.

En el Reino Unido hay investigaciones penales en curso, pero su gobierno no ha cumplido con su promesa de llevar a cabo una investigación judicial independiente sobre la participación británica en las entregas extraordinarias y la tortura. Una responsabilidad significativa sobre cuál fue el papel de Europa en estos abusos es fundamental para que los responsables rindan cuentas y para evitar que se repitan en el futuro.

Conclusión: el papel central de los derechos humanos

En todos estos casos, los encargados de formular políticas son inevitablemente expertos a la hora de citar razones aparentemente buenas para restarles importancia a los derechos humanos. Los derechos humanos requieren una moderación que podría parecer la antítesis del enfoque “hacer lo que sea necesario” que a menudo prevalece

en caso de graves desafíos de seguridad. Pero el último año pone en evidencia lo imprudente que puede ser este acto reflejo. En muchas ocasiones, fueron precisamente las violaciones de derechos humanos las que desencadenaron los desafíos de seguridad, y su continua violación con frecuencia los agrava.

Los derechos humanos no son restricciones arbitrarias a los gobiernos. También reflejan valores fundamentales, ampliamente compartidos y profundamente arraigados, e imponen límites al poder de los gobiernos y brindan salvaguardias esenciales para la dignidad y la autonomía humana. Traicionar esos valores rara vez resulta en algo positivo. Enfrentarse a los desafíos de seguridad exige no solo reprimir a ciertos individuos peligrosos, sino también reconstruir un tejido moral que sustente el orden social y político.

Los beneficios a corto plazo de socavar esos valores básicos y la sabiduría fundamental que reflejan casi nunca valen, a largo plazo, el precio que, inevitablemente, se debe pagar. En lugar de concebir los derechos humanos como una restricción desgastadora a su capacidad de actuación, los encargados de formular políticas deberían reconocerlos como guías morales o como obligaciones legales. Eso sería lo más correcto y efectivo para todos.

Kenneth Roth es el director ejecutivo de Human Rights Watch.

Internet en la encrucijada

Cómo la vigilancia del gobierno amenaza nuestra forma de comunicarnos

Por Cynthia M. Wong

Hemos llegado a un punto de inflexión en el futuro de Internet. A fin de preservar Internet como una plataforma abierta y global para los derechos, el desarrollo y el comercio, necesitamos normas y principios que rijan la vigilancia digital, protejan la privacidad y se apliquen a todos los gobiernos.

Hasta mediados de 2013, el movimiento global por la libertad en Internet iba ganando impulso. Una amplia diversidad de gobiernos habían formado la Coalición de la Libertad de Expresión en Internet y se habían comprometido públicamente a promover que Internet sea libre, abierto y global mediante esfuerzos diplomáticos coordinados, dirigidos por Estados Unidos, el Reino Unido y sus aliados. En el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas hubo un amplio reconocimiento de que los mismos derechos que disfrutamos fuera de línea (offline) también debían ejercerse en línea (online).

Sin embargo, la confianza global en el liderazgo de Estados Unidos y el Reino Unido en cuestiones de libertad en Internet se ha quebrado desde que el ex contratista de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés) Edward Snowden comenzara a revelar pruebas de los masivos programas de vigilancia de comunicaciones por parte de la NSA y su homólogo británico, el Cuartel General de Comunicaciones del Gobierno (GCHQ, por sus siglas en inglés). En una encendida crítica ante la ONU en septiembre de 2013, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, condenó estas prácticas: “En ausencia del derecho a la privacidad, no puede existir una verdadera libertad de expresión y opinión y, por lo tanto, no es posible una democracia efectiva”, declaró Rousseff. “El derecho a la seguridad de los ciudadanos de un país nunca se podrá garantizar mediante la violación de los derechos de los ciudadanos de otro país”.

Las revelaciones de Snowden dejaron al descubierto la brecha existente entre los valores declarados por EE.UU. y el Reino Unido y su comportamiento. Incluso cuando defendían una Internet abierta y libre, estos gobiernos estaban recopilando datos de cientos de millones de personas en todo el mundo todos los días, incluso, en el caso de EE.UU., sobre la propia Dilma Rousseff. Para facilitar sus labores de espionaje de la comunidad en línea y descubrir amenazas a la seguridad nacional, también debilitaron sigilosamente la seguridad en Internet, paradójicamente convirtiendo a todos los usuarios de la red en un blanco más fácil y más vulnerable para los piratas informáticos (hackers) y los ladrones de identidad.

Aunque muchos gobiernos expresaron públicamente su indignación por el espionaje de la NSA y el GCHQ, en privado también podrían haber reaccionado con envidia. Aunque pocos pueden igualar los recursos de la NSA o el GCHQ, los gobiernos de todo el mundo están expandiendo su propia capacidad de vigilancia masiva y es probable que estén emulando a EE.UU. y el Reino Unido.

De no controlarse, esta dinámica pronto podría dar lugar a un mundo en el que cualquier búsqueda en Internet, contacto, correo electrónico o transacción sea almacenada en una o varias bases de datos del gobierno. Sin un gobierno capaz de garantizar la privacidad de sus propios ciudadanos frente al espionaje extranjero y una alianza entre las agencias de inteligencia para compartir datos sobre los ciudadanos de otros países, podría generar un escenario verdaderamente orwelliano. Si bien EE.UU. afirma que no utilizará la recopilación de información para anular la disidencia ni discriminar, los gobiernos han recurrido repetidamente a la vigilancia para estos fines.

El presidente Obama ha acogido con satisfacción la apertura de un debate sobre la vigilancia moderna, pero las conversaciones sobre protección y reformas en EE.UU. no se han traducido en un cambio perceptible para los usuarios globales de Internet. El gobierno de Obama se ha comprometido a adoptar más medidas de protección de los datos personales que ha recogido, pero ha hecho poco para reducir la magnitud de la vigilancia que lleva a cabo la NSA, especialmente en el extranjero. El Reino Unido, por su parte, se ha negado a responder a las preguntas más básicas sobre sus prácticas de recopilación de información y, en un acto de asombrosa arrogancia y flagrante desprecio de los derechos, adoptó precipitadamente en julio de 2014 una ley que amplía sus poderes de vigilancia. A la hora de defender sus programas, ninguno de los gobiernos se ha mostrado completamente dispuesto a reconocer los intereses de privacidad de las personas fuera de sus fronteras.

Sin embargo, el panorama no es totalmente sombrío. En 2014, varios actores importantes intervinieron y ocuparon el vacío de liderazgo dejado por EE.UU. y el Reino Unido. Destacadas instituciones de derechos humanos de la ONU han comenzado a articular lo que significa proteger la privacidad cuando la tecnología hace que la vigilancia se vuelva potencialmente generalizada. Y una nueva coalición de estados, encabezados por Alemania y Brasil, ha asumido el liderazgo en la lucha por la libertad en Internet, mientras que la Coalición de la Libertad de Expresión en Internet se esfuerza por recuperar su credibilidad.

Es fundamental seguir presionando a EE.UU. y el Reino Unido para que adopten reformas reales, pero el resto del mundo no debe esperar a que actúen. El temor al terrorismo y la ventaja comparativa que EE.UU. y el Reino Unido tienen en el campo de la vigilancia los ennegrecen ante los daños que plantean estas prácticas, no solo para sus alianzas, sino también para sus propias instituciones democráticas. Estos daños incluyen el enfriamiento de libertades fundamentales como la de expresión y de asociación, el debilitamiento de la prensa y la libertad de información y la degradación del acceso al asesoramiento jurídico y la defensa legal. De hecho, es posible que estos países no cambien de rumbo hasta que sus propios ciudadanos no se enfrenten a niveles comparables de vigilancia por parte de potencias extranjeras.

Mientras tanto, los demás países deben asegurarse de que la vigilancia y la privacidad sigan formando parte de la agenda de derechos humanos en la ONU y en otros lugares. Estas cuestiones también deben ser planteadas con regularidad en las reuniones bilaterales, de manera que EE.UU. y el Reino Unido no salgan indemnes. La experiencia ha demostrado que si bien EE.UU. y el Reino Unido son a menudo reacios a liderar en el desarrollo de normas internacionales, al final adecuan sus prácticas a normas que los demás países aceptan cumplir.

“Recopilarlo todo”

Ahora vivimos en la era de los Big Data (datos masivos), en la que nuestras comunicaciones y actividades generan de manera rutinaria huellas digitales detalladas que pueden ser recogidas, analizadas y almacenadas a bajo costo. Paralelamente, los intereses comerciales llevan a una serie de empresas a acumular grandes reservas de información acerca de nuestras redes sociales, salud, finanzas y hábitos de compra. La precipitación del costo del almacenamiento de datos y la computación significa que estos datos pueden conservarse durante más tiempo y minarse en el futuro para fines imprevistos.

Estos expedientes digitales son atractivos para los gobiernos en una gran variedad de propósitos, tanto legítimos como ilegítimos. Los gobiernos pueden descubrir fácilmente patrones de comportamiento y asociaciones, tanto offline como online, accediendo a los datos en manos de empresas del sector privado, ya sea para frustrar amenazas de seguridad o para identificar una voz particularmente crítica contra la política gubernamental.

Los organismos de seguridad en EE.UU. y el Reino Unido han respondido mediante la construcción de enormes instalaciones de almacenamiento y recogiendo vorazmente la mayor cantidad posible de datos. En una visita al Reino Unido en 2008, el general estadounidense Keith Alexander, entonces director de la NSA, preguntó: “¿Por qué no podemos recoger todas las señales, todo el tiempo?” El Reino Unido se dispuso a hacer realidad ese objetivo con su programa Tempora, consistente en la interceptación masiva de datos que circulan por más de 200 cables submarinos que conectan a Europa con las Américas, África y otros territorios. Diversos medios de comunicación indicaron también que, el año pasado, el GCHQ podría haber estado capturando y almacenando imágenes procedentes de webcams de millones de usuarios de Internet.

En EE.UU., la NSA adoptó sin reservas la recopilación masiva de metadatos de los operadores de telecomunicaciones privados (y quizás otras entidades desconocidas), así como la intervención en masa del cable de fibra óptica. En 2014, informes basados en los documentos de Snowden mostraron que EE.UU. podría estar acumulando a diario millones de mensajes de texto en todo el mundo, recopilando todos los metadatos de telefonía móvil en cinco países e interceptando todas las llamadas telefónicas en dos de estos países.

En nombre de la seguridad, EE.UU. y el Reino Unido han pasado por alto cualquier noción de proporcionalidad: supuestamente, solo las personas de las que se tenga motivos para creer que pudieran presentar una amenaza real pueden ser vigiladas.

Solo una pequeña parte de los usuarios de Internet o teléfonos móviles que actualmente están siendo vigilados podría llegar a ser sospechosa de cometer un delito, y mucho menos de mantener vínculos con el terrorismo.

En gran medida, los gobiernos han hecho la mayor parte de esto en secreto, con la excepción de las contadas ocasiones a lo largo de los años en que informantes de seguridad nacional han proporcionado algo de información y ahora las revelaciones de Snowden.

Decepcionante liderazgo

¿Qué es lo que han hecho EE.UU. y el Reino Unido para frenar la vigilancia masiva en respuesta a la indignación pública? Para los miles de millones de usuarios de Internet de todo el mundo fuera de estos países, la respuesta es: casi nada.

El 17 de enero de 2014, el presidente Obama anunció medidas para restringir el uso, la retención y la divulgación de datos personales recogidos por las agencias de inteligencia en la Directiva de Política Presidencial 28. Estas nuevas medidas pretenden adaptar las normas sobre los datos recopilados de las personas no estadounidenses (extranjeros en el extranjero) para que se parezcan más a las normas que rigen los datos recogidos de personas de Estados Unidos. Si bien la directiva representa un mayor nivel de transparencia (sobre todo en comparación con la mayoría de los gobiernos), las reglas en sí son imprecisas, no van lo suficientemente lejos para evitar el abuso y no generan derechos que las personas no estadounidenses puedan hacer valer ante los tribunales. Tampoco están consolidadas, dado que no están incorporadas en la legislación y, por lo tanto, podrían ser modificadas por cualquier gobierno estadounidense posterior. Lo que es aún más importante es que las nuevas medidas no impiden la recopilación a gran escala de datos y comunicaciones de individuos no vinculados a un delito, lo que permite que los enormes bancos de datos de información interceptados sigan creciendo cada vez más, los cuales a su vez podrían ser explotados por futuras administraciones.

La Ley Libertad de EE.UU., el principal vehículo para la reforma legislativa en el país, tenía el propósito de acabar con la colección masiva de metadatos y otros registros en EE.UU. Pero en noviembre de 2014 el proyecto de ley no logró avanzar en el Congreso. Sin embargo, aunque hubiera sido aprobada y a pesar de la importancia de su adopción, la ley habría abordado solo uno de los programas revelados por los documentos de Snowden, pero no habría hecho casi nada para abordar las preocupaciones sobre la privacidad de los miles de millones de usuarios de Internet a nivel mundial fuera de EE.UU., cuya información personal podría estar almacenada en las bases de datos de la NSA. En el momento de redactarse este artículo, parece que un Congreso dominado por los republicanos podría ser aún menos receptivo a los esfuerzos por controlar la recopilación masiva de datos.

En el Reino Unido, las autoridades siguen “sin confirmar ni negar” que el GCHQ intercepta las comunicaciones de millones de individuos. El gobierno se ha negado a responder a las preguntas más básicas sobre sus prácticas, así que es muy difícil evaluar sus afirmaciones de que estos programas son legales y necesarios para

proteger la seguridad. Sin embargo, en una respuesta a una demanda judicial, el gobierno del Reino Unido reconoció que interpreta la ley para permitir que las agencias reúnan potencialmente millones de comunicaciones a través de servicios populares como Twitter, Gmail y Facebook sin una orden judicial, simplemente porque los servidores de estas empresas suelen estar ubicados en el extranjero. Esta revelación plantea serias dudas sobre las afirmaciones del GCHQ de que estos poderes son necesarios para proteger la seguridad pública.

Un aspecto más preocupante es que EE.UU. y el Reino Unido siguen argumentando que no tienen la obligación legal de proteger la privacidad de nadie fuera de sus respectivos territorios. En otras áreas del derecho de los derechos humanos, EE.UU. también ha argumentado que no tiene obligaciones ante las personas fuera de su territorio y tan solo este año ha admitido que puede tener algunos deberes conforme a la Convención contra la Tortura hacia los extranjeros que captura físicamente, pero solo en los territorios donde ejerce “autoridad gubernamental”. En contraste con su resistencia a asumir obligaciones extraterritoriales con respecto a la vigilancia, EE.UU. afirma su autoridad para obligar a las compañías con sede en EE.UU. a entregar información sobre cualquier usuario en cualquier parte del mundo, independientemente de dónde estén almacenados esos datos, prácticamente sin ningún tipo de protección para la privacidad de los no estadounidenses en el extranjero. El Reino Unido también ha reconocido obligaciones extraterritoriales de derechos humanos en circunstancias como la detención de extranjeros en el extranjero. Pero en el ámbito de la privacidad y la vigilancia, el Reino Unido clasifica las comunicaciones que salen de las Islas Británicas como “externa” y la ley del Reino Unido ofrece escasas protecciones para la privacidad de las comunicaciones “externas”.

Es casi seguro que estos enfoques con escasa visión de futuro de EE.UU. y el Reino Unido acaben perjudicando a sus propios ciudadanos, conforme otros gobiernos sigan su ejemplo. A medida que las redes de Internet siguen globalizándose, una cantidad cada vez mayor de datos sobre residentes estadounidenses y británicos saldrán de los territorios de EE.UU. y el Reino Unido, y otros países se sentirán libres de recopilar y almacenar sin límite esos datos.

EE.UU. y el Reino Unido han proporcionado una hoja de ruta para que los gobiernos de todas las tendencias políticas construyan sus propios sistemas de vigilancia masiva. Aunque actualmente pocos puedan igualar los recursos o capacidad de la NSA y el GCHQ, muchos otros gobiernos adoptan un enfoque igualmente opaco y codicioso hacia la recopilación de datos digitales.

Detractores de la codificación

Los documentos de Snowden revelan que la NSA también debilitó los estándares de encriptación y retuvo información sobre brechas de seguridad en productos comerciales para poder explotarlos antes de que las empresas pudieran solucionarlos. Además, los medios de comunicación sugieren que el GCHQ está desarrollando maneras de descifrar la codificación, especialmente para el tráfico de Internet que intercepte. Estas tácticas pueden facilitar la vigilancia y recopilación sigilosa de datos

de dispositivos y redes, no solo por EE.UU. y el Reino Unido, sino potencialmente también por otros actores. Si bien desenscriptar códigos siempre ha sido parte esencial de la misión de la NSA, cualquier técnica que socave la seguridad general de las aplicaciones y redes de Internet ponen a todos los usuarios de la web en riesgo.

En 2014, las principales compañías tecnológicas estadounidenses redoblaron sus esfuerzos para fortalecer la seguridad de sus dispositivos y servicios contra el espionaje. Estas medidas se han convertido en un imperativo comercial a medida que la pérdida de la confianza empuja a los usuarios a empresas no estadounidenses. En septiembre de 2014, Google y Apple anunciaron que los datos almacenados en sus teléfonos móviles serían codificados por defecto, y ninguna de ellas podría desenscriptar los datos almacenados en caso de una solicitud del gobierno. Google, Microsoft, Yahoo, Facebook y otros servicios han tomado medidas adicionales para proteger los correos electrónicos y mensajes conforme se adaptan a los cambios en Internet que los expertos en seguridad y los activistas de derechos humanos han impulsado durante años. A medida que los periodistas y grupos de defensa de los derechos recurren cada vez más a las herramientas globales en línea para su trabajo, muchos ven estas mejoras de seguridad como un resultado fundamental del caso Snowden. Para los grupos vulnerables o aquellos que viven bajo regímenes autoritarios, proteger la comunicación y las asociaciones del espionaje abusivo puede ser una cuestión de vida o muerte.

Sin embargo, funcionarios del gobierno de EE.UU. y el Reino Unido han respondido a estas nuevas medidas de seguridad acusando a las empresas de tecnología de facilitar el asesinato, el terrorismo y los abusos a menores. En su primera semana en el cargo, en noviembre de 2014, Robert Hannigan, director del GCHQ, escribió un editorial en el que se refería a las empresas tecnológicas de EE.UU. como “la red de mando y control preferida de los terroristas y criminales” y aseguraba que la mayor codificación es una práctica especialmente útil para el grupo extremista Estado Islámico, también conocido como ISIS, y otras organizaciones terroristas. Del mismo modo, en un discurso en septiembre de 2014, James Comey, director del FBI, sostuvo que “la codificación amenaza con conducirnos a todos a un lugar muy oscuro” y sitúa a los criminales por encima de la ley. Por su parte, los gobiernos buscan una cooperación todavía mayor por parte de las principales empresas de tecnología, incluso a través de “puertas traseras” integradas en los dispositivos y servicios que les permitan un mayor acceso a la comunicación del usuario.

Las fuerzas del orden y los funcionarios de seguridad sostienen que las puertas traseras en los sistemas de codificación son necesarias para proteger la seguridad pública. Sin embargo, irónicamente estas acciones dejan a los usuarios de Internet y telefonía móvil –a todos nosotros– en una posición menos segura. Los expertos en seguridad afirman que este tipo de puertas traseras, una vez instaladas, crean nuevas vulnerabilidades, ya que pueden ser manipuladas por los piratas informáticos, ladrones de identidad y otros agentes maliciosos. Desde un punto de vista técnico, es casi imposible crear una puerta trasera que solo pueda ser utilizada por actores designados como “buenos”.

Los detractores de la codificación en los gobiernos de EE.UU. y el Reino Unido también se olvidan de que no son los únicos que exigirán tener acceso a las puertas traseras. Si Google, Apple y otras empresas acatan sus demandas, será difícil denegar el mismo acceso a otros gobiernos. Incorporar la privacidad y la seguridad en la tecnología por diseño es la forma más eficaz de proteger la seguridad de los usuarios de una serie de agentes nocivos. Si el GCHQ no puede obligar a Apple a desbloquear un iPhone ya que Apple no tiene la llave, entonces tampoco pueden hacerlo las agencias de inteligencia en China o Rusia.

El verdadero costo de la vigilancia

Como comunidad global, ni siquiera hemos empezado a lidiar con los verdaderos costos de la vigilancia, no solo para la privacidad, sino también para otros derechos y valores muy definidos.

Un informe conjunto publicado por Human Rights Watch y la Unión Americana para las Libertades Civiles, en julio de 2014, documentó los efectos insidiosos de la vigilancia a gran escala sobre el ejercicio del periodismo y el derecho en EE.UU. Entrevistas con decenas de periodistas mostraron que el incremento de la vigilancia, combinado con medidas más estrictas para prevenir las filtraciones y el contacto del gobierno con los medios de comunicación, está intimidando a las fuentes de información, cada vez más reacias a hablar con los periodistas (incluso sobre temas de interés público no clasificados) por temor a represalias, a perder sus autorizaciones de seguridad o puestos de trabajo o incluso a ser demandados. En última instancia, esto está teniendo un impacto negativo en la cantidad y la calidad de la cobertura de las noticias, sobre todo en temas relacionados con la seguridad nacional, la inteligencia y la aplicación de la ley. Este efecto socava el papel del cuarto poder a la hora de garantizar que el gobierno rinda cuentas.

Steve Coll, redactor de la revista New Yorker y decano de la Escuela de Posgrado de Periodismo de la Universidad de Columbia, explicó: “Todos los reporteros de seguridad nacional que conozco dirían que el ambiente en el que los periodistas profesionales tratan de descubrir fallas en las políticas [y] malas decisiones militares es mucho más complicado y mucho más frío”. Que el público comprenda las políticas de seguridad nacional que se llevan a cabo en su nombre es esencial para el funcionamiento de democracias saludables y sociedades abiertas.

Otro reportero especializado en temas de seguridad nacional describió el impacto que las revelaciones de Snowden han tenido sobre la capacidad de los periodistas para proteger a sus fuentes: “Yo solía pensar que las personas más cautelosas no estaban en riesgo, [que] podían proteger a sus fuentes y evitar que su identidad fuera revelada. Ahora sabemos que este no es el caso. Eso es lo que significó Snowden para mí. Hay un registro de todos los lugares a los que he ido, todos los lugares en los que he estado”.

Muchos periodistas están tomando medidas extraordinarias para resguardar a sus fuentes y protegerlas de represalias, incluso mediante el uso de teléfonos de prepago desechables o fuertes sistemas de codificación, o evitando completamente

el uso de móviles e Internet. En palabras de un periodista, se están viendo obligados a adoptar tácticas de traficantes de drogas y delincuentes solo para hacer su trabajo. Abogados –y en particular los abogados defensores– que hablaron con Human Rights Watch describieron cómo habían adoptado tácticas similares para proteger la confidencialidad de las comunicaciones con sus clientes, un elemento esencial del derecho a la asistencia legal.

En el Reino Unido, documentos publicados en noviembre de 2014 como resultado de un recurso judicial muestran que los servicios de seguridad y de inteligencia del país disponen de políticas que permiten la interceptación de las comunicaciones confidenciales entre abogado y cliente por razones de seguridad nacional, posiblemente incluso en los casos en que los organismos gubernamentales eran los demandados. El grupo de derechos humanos Reprieve presentó el caso en nombre de familias libias que alegaron haber sido sometidas a entregas extraordinarias y torturas. El director de asesoría jurídica de Reprieve, Cori Crider, declaró que estas políticas plantean “implicaciones preocupantes para todo el sistema británico de justicia” y cuestionó la frecuencia con la que el gobierno ha “amañado el juego a su favor en el proceso judicial en curso sobre la tortura”.

Esta investigación inicial solo roza la superficie. Por ejemplo, una encuesta en abril de 2014 a 2.000 estadounidenses sobre el impacto de las revelaciones de la NSA reveló que casi la mitad –47 por ciento– había cambiado su perspectiva de cara a la actividad en línea como consecuencia de la información sobre el programa de vigilancia de la NSA. Los encuestados respondieron que ahora piensan más detenidamente acerca de a dónde van, lo que dicen y lo que hacen en línea, y alrededor de un 25 por ciento son menos propensos a utilizar el correo electrónico. Otros estudios han documentado los costos económicos reales y proyectados que la vigilancia de la NSA ha supuesto para la industria de Internet estadounidense (hasta US\$180 millones en ventas perdidas para la industria de la computación en la nube), conforme la pérdida de confianza en las tecnologías y servicios de origen estadounidense empuja los negocios hacia el extranjero. Un informe del Open Technology Institute publicado en julio de 2014 empieza a catalogar algunos de estos costos, así como los daños a la apertura de Internet, los intereses estadounidenses de política exterior y la seguridad cibernética.

Quizás una de las mayores víctimas de las revelaciones de Snowden fuera la autoridad moral de EE.UU. y el Reino Unido para criticar los abusos de vigilancia de otros gobiernos y predicar con el ejemplo.

Un informe de marzo de Human Rights Watch documentó cómo el gobierno de Etiopía utiliza la vigilancia de datos para monitorear a los grupos de la oposición y los periodistas, y para silenciar a las voces de la disidencia. Con un acceso prácticamente sin restricciones a las redes móviles, las agencias de seguridad interceptan regularmente las llamadas y tienen acceso a los registros telefónicos, que luego son reproducidas durante interrogatorios abusivos, sin ningún tipo de proceso o supervisión.

Un ex miembro del partido de la oposición en Etiopía dijo a Human Rights Watch: “Un día me arrestaron y me lo enseñaron todo. Me mostraron una lista con todas mis llamadas telefónicas y me pusieron una conversación que tuve con mi hermano. Me

detuvieron porque hablamos de política por teléfono. Era el primer teléfono que había tenido jamás y pensé que por fin podía hablar con libertad”.

A principios del año, el gobierno de Etiopía detuvo a un grupo de blogueros que escribía sobre temas de actualidad bajo el nombre colectivo de Zona 9. Ahora los blogueros de Zona 9 enfrentan cargos por motivos políticos en virtud de la defectuosa ley antiterrorista de Etiopía. Los cargos citan como evidencia el hecho de que los periodistas viajaron fuera del país para recibir capacitación sobre cómo codificar sus comunicaciones.

El Estado etíope no es EE.UU. ni el Reino Unido, pero las declaraciones y acciones de EE.UU. y el Reino Unido sentaron un preocupante precedente que socava su credibilidad en cuestiones de derechos y que será citado por muchos otros gobiernos. Si EE.UU., el Reino Unido y sus aliados continúan argumentando, por ejemplo, que los metadatos no merecen muchas medidas de protección de la privacidad, entonces, ¿cómo pueden impugnar de manera efectiva a Etiopía cuando el gobierno adopte el mismo argumento legal? Y si las autoridades estadounidenses y británicas continúan denigrando y debilitando el uso generalizado de la codificación para proteger a los usuarios ordinarios de Internet, ¿cómo podrán sus gobiernos condenar de manera creíble a otros gobiernos que prohíben y castigan el uso de la codificación en nombre de la seguridad nacional?

Normas internacionales para la era digital

Las revelaciones de Snowden han desatado un debate global sobre la vigilancia moderna, la seguridad nacional y los derechos humanos. Ahora la privacidad forma parte por primera vez de la agenda de una serie de estados e instituciones internacionales.

Varias grandes instituciones de derechos humanos de la ONU han comenzado a examinar las prácticas modernas de vigilancia. En marzo de 2014, el Comité de Derechos Humanos, un órgano internacional de expertos e intérprete autorizado del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) —un tratado mundial del que EE.UU. es miembro— hizo un llamamiento a EE.UU. para que se asegure de que toda la vigilancia sea necesaria y proporcionada para alcanzar objetivos legítimos, independientemente de la nacionalidad o la ubicación de las personas afectadas.

En julio de 2014, la principal funcionaria de derechos humanos de la ONU, la entonces Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Navi Pillay, difundió un informe pionero sobre la privacidad en la era digital que desafiaba directamente los argumentos de EE.UU. y el Reino Unido para sus programas secretos de vigilancia masiva.

Pillay concluyó que la vigilancia masiva “se está convirtiendo en un hábito peligroso en lugar de una medida excepcional”. La Alta Comisionada dijo que el espionaje sin control podría perjudicar diversos derechos humanos, incluidas las libertades de expresión y asociación. La responsabilidad de los gobiernos, señaló, es demostrar que sus prácticas eran necesarias y proporcionales a sus objetivos de seguridad. En otras palabras, espiar a todo el mundo porque se puede no significa que se deba hacer.

El informe de la Alta Comisionada fue publicado después de una insistente campaña por parte de defensores de la privacidad y un grupo de países, encabezados por Alemania y Brasil, para presionar a EE.UU. y el Reino Unido a poner fin a la vigilancia masiva y salvaguardar la privacidad de las personas en todo el mundo. Llenando el vacío de liderazgo, Alemania y Brasil, junto con Austria, Liechtenstein, México, Noruega y Suiza, dirigieron la aprobación de la resolución de la Asamblea General de la ONU de diciembre de 2013 que solicitaba la elaboración del informe de la Alta Comisionada.

Ante la inacción de EE.UU., el Reino Unido y sus aliados más cercanos, estas instituciones de la ONU han comenzado a esbozar un enfoque de principios para la vigilancia y los derechos humanos en la era digital, basándose en normas ampliamente aceptadas del derecho internacional de los derechos humanos.

Varios temas críticos que surgen de este trabajo ponen directamente en duda las justificaciones de la vigilancia masiva:

- » La vigilancia daña una serie de derechos más allá de la vida privada, incluidas las libertades de expresión, asociación y movimiento, así como el derecho a un abogado. Si las personas no pueden acceder a Internet sin temor a la vigilancia excesiva, el poder de las tecnologías digitales para promover el ejercicio de los derechos quedará notablemente mermado. Los periodistas no podrán proteger a sus fuentes, los abogados no podrán garantizar la confidencialidad de las comunicaciones con sus clientes y los defensores de derechos humanos no podrán hacer su trabajo con seguridad.
- » Los Estados tienen la obligación de proteger los derechos de privacidad de los usuarios fuera de sus fronteras. En nuestra era en que todo el mundo está interconectado, es insostenible argumentar que el derecho a la privacidad termina en la frontera mientras que la vigilancia carece de ellas.
- » La vigilancia masiva es por naturaleza indiscriminada y es presuntamente ilegal. El artículo 17 del PIDCP establece que cualquier injerencia en la vida privada debe ser proporcionada y ajustarse estrictamente a un propósito. El hecho de que la vigilancia masiva y la recopilación de datos puedan arrojar algo de información que algún día podría resultar útil no puede justificar la invasión de la privacidad de todos.
- » Los Estados deben reconocer que cuando recogen datos privados están perjudicando la privacidad y otros derechos, independientemente de si luego esos datos son utilizados o no. Saber que el gobierno puede adquirir datos acerca de las comunicaciones y actividades en línea de cualquiera puede socavar la libertad de expresión y de asociación, incluso si esos datos nunca son objeto de abusos. Los Estados deben imponer límites significativos sobre cuándo pueden recogerse estos datos, además de cómo pueden ser utilizados y durante cuánto tiempo pueden ser conservados.
- » Los Estados deben aumentar la transparencia y la supervisión sobre los poderes de vigilancia y recopilación de información. Hay razones legítimas de secretismo al abordar amenazas de seguridad nacional. Pero esos poderes

deben estar sujetos a la supervisión para evitar las extralimitaciones y el abuso, incluso mediante órganos judiciales y parlamentarios.

- » El sector privado tiene la responsabilidad de respetar los derechos cuando se le pide que facilite la vigilancia o la recopilación de datos. Cuando las empresas de Internet o de telecomunicaciones entregan datos de los usuarios o ayudan con la vigilancia sin las protecciones adecuadas, corren el riesgo de ser cómplices en las violaciones resultantes.

El camino por recorrer

Si bien la controversia Snowden se ha centrado en EE.UU. y el Reino Unido, tal como se ha señalado anteriormente, no hay ninguna razón para suponer que las leyes o prácticas de otros gobiernos son mejores. La mayoría de las normativas de privacidad fueron implementadas durante la infancia de Internet, antes de que existieran las redes sociales o los teléfonos inteligentes. Ahora se están quedando cortas a la hora de brindar una protección adecuada de los derechos. Y, por supuesto, también están los gobiernos como Etiopía, China y Rusia, que se dedican de manera rutinaria a la vigilancia abusiva como una cuestión de política y diseño.

Gracias a Brasil y Alemania, hay un impulso internacional para desarrollar normas y directrices y establecer instituciones para asegurar que la privacidad siga teniendo sentido en la era digital. Como parte de este esfuerzo en los próximos meses, Human Rights Watch respaldará la creación de una nueva relatoría especial sobre el derecho a la privacidad en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ocupada por un experto independiente encargado de examinar las prácticas de vigilancia por parte del Estado de una manera continua y sistemática.

Sin embargo, en el momento de redactarse este artículo, todavía impera un deseo de asegurar una participación comprometida por parte de EE.UU. y el Reino Unido, conforme se van materializando los debates sobre la vigilancia de masas en estos escenarios internacionales. El instinto de tratar a EE.UU. y el Reino Unido con guantes de seda diplomáticos no es sorprendente, dada su capacidad tecnológica y poder político. Pero en última instancia, este enfoque puede ser contraproducente. En el corto plazo, son más propensos a jugar el papel de los saboteadores en lugar de los promotores de normas basadas en principios. Esto fue especialmente evidente durante el debate que condujo a la resolución de la Asamblea General de la ONU en diciembre de 2013 sobre la privacidad en la era digital, cuando EE.UU. y el Reino Unido presionaron tras bambalinas, con cierto éxito, para que se diluyera el texto, y nuevamente en noviembre de 2014, con respecto a la resolución de seguimiento sobre el mismo tema.

Por supuesto, es necesario seguir presionando para que EE.UU. y el Reino Unido adopten reformas e instar a estos gobiernos a que extiendan las protecciones de privacidad a los que se encuentran más allá de sus fronteras. Pero no debemos permitir que la parálisis política en EE.UU. y el Reino Unido obstaculice el desarrollo de normas internacionales de privacidad. Un proceso de amplia participación internacional, incluso con aliados estratégicos, puede facilitar que con el tiempo EE.UU. y el

Reino Unido acaben aceptando y asimilando fuertes normas internacionales. Cuando otras naciones e instituciones internacionales prediquen con el ejemplo y establezcan fuertes normas de derechos humanos, harán que EE.UU. y el Reino Unido también se sumen.

Sin embargo, el desarrollo de una normativa global es solo un primer paso. Las revelaciones de Snowden han demostrado hasta dónde están dispuestas a llegar las agencias de seguridad cuando pueden operar sin una supervisión adecuada ni un sistema de rendición de cuentas. A medida que se desarrollan nuevas capacidades de vigilancia y los Estados abordan nuevas amenazas —ya sea el terrorismo y el extremismo violento como los ataques cibernéticos— son imprescindibles el continuo escrutinio público y la implementación nacional de normas globales. El informe de Pillay ha aportado unas directrices muy necesarias. Ahora la responsabilidad recae sobre los parlamentos y los legisladores de todo el mundo para que examinen las prácticas de vigilancia y evalúen sus costos y beneficios tangibles con más atención y de manera pública dentro de un marco de derechos humanos.

La vigilancia debe permanecer en la agenda de los derechos humanos, tanto nacional como mundial. De lo contrario, corremos el riesgo de que Internet se convierta en el panóptico que ve todo de los gobiernos.

Cynthia Wong es investigadora principal de Internet y los derechos humanos de Human Rights Watch

Argentina

La situación de los derechos humanos en Argentina sigue siendo mixta. Si bien numerosas libertades fundamentales están protegidas, subsisten problemas, como amenazas a la libertad de expresión, ausencia de legislación exhaustiva sobre libertad de información, abusos policiales, deficientes condiciones carcelarias, obstáculos para acceder a productos y servicios de salud reproductiva, y la falta de protección de derechos indígenas.

Argentina continúa logrando avances significativos en materia de derechos de personas LGBT y en el juzgamiento de abusos cometidos durante el “terrorismo de estado” (1976-1983), si bien hubo demoras en algunos de los procesos.

Libertad de expresión

Elevadas multas y procesos penales en casos específicos han atentado contra el derecho a publicar libremente información de interés público. En 2011, la Secretaría de Comercio impuso una multa de 500.000 pesos (aproximadamente US\$ 125.000) a 11 economistas y consultoras por publicar estadísticas extraoficiales de inflación que cuestionaban los datos oficiales. Graciela Bevacqua, una de las economistas, recibió dos multas y fue además investigada penalmente a pedido del ex secretario de comercio por presuntos “fraudes al comercio y a la industria”. Hasta noviembre de 2014, se encontraban pendientes la causa penal y una de las multas contra Bevacqua.

En mayo, el periodista Juan Pablo Suárez fue procesado por “incitación a la violencia colectiva” con la finalidad de “aterrorizar a la población”. Fue la primera vez que fiscales se basaron en una ley de 2011 que prevé penas agravadas para ciertos delitos de “terrorismo”. Suárez, quien trabaja para un medio de noticias en línea, había publicado información sobre huelgas policiales en la provincia de Santiago del Estero. Suárez fue sobreseído por el delito agravado luego de una fuerte reacción pública, pero la causa en su contra continuaba al momento de preparación de este informe.

En 2011, al periodista Juan Alberto Gaspari se le impuso una multa de 50.000 pesos (aproximadamente US\$ 12.500) por criticar a un funcionario público en Mendoza. Según Gaspari, el padre del funcionario, que fue víctima de desaparición durante la dictadura militar argentina, no era el titular legítimo de unas tierras. En noviembre de 2014, se encontraba pendiente una apelación ante la Corte Suprema de Justicia.

La falta de criterios transparentes en la asignación de fondos gubernamentales en el ámbito federal y en algunas provincias para comprar espacios de publicidad en los medios genera un riesgo de discriminación contra aquellos medios que critican a funcionarios gubernamentales. En dos sentencias de 2007 y 2011, la Corte Suprema

determinó que si bien las empresas de medios no tienen un derecho a recibir pauta oficial, los funcionarios no pueden aplicar criterios discriminatorios al decidir en qué medios pautar publicidad.

Argentina no cuenta con una ley nacional que asegure el acceso público a la información en poder de organismos gubernamentales. Un decreto presidencial existente se aplica exclusivamente al poder ejecutivo federal, y algunos gobiernos provinciales han adoptado reglamentaciones para sus jurisdicciones.

En 2009, el Congreso promulgó una ley de regulación de los servicios audiovisuales que contiene disposiciones para ampliar la pluralidad en los medios. En 2013, la Corte Suprema fijó parámetros claros con respecto a cómo debería implementarse la ley para proteger la libertad de expresión. Sin embargo, la autoridad federal a cargo de implementar la ley no ha asegurado que exista un amplio espectro de perspectivas en la programación de medios gestionados por el Estado. En 2014, adoptó unilateralmente un plan para obligar al mayor grupo de medios de Argentina, el Grupo Clarín, a adecuarse a los límites estipulados en la ley sobre titularidad de medios de radio y televisión, tras rechazar el plan de adecuación propuesto por la empresa.

Justicia transnacional

Al momento de la redacción del presente, no había condenados en relación con el atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) de Buenos Aires ocurrido en 1994, en el cual perdieron la vida 85 personas y más de 300 resultaron heridas. Desde su inicio, las investigaciones y persecuciones penales se han visto entorpecidas como resultado de corrupción judicial y obstáculos políticos.

En enero de 2013, Argentina e Irán, que estaba sospechado de haber ordenado el ataque, suscribieron un “Memorándum de Entendimiento” para crear una comisión internacional de juristas encargada de examinar las evidencias e interrogar a sospechosos iraníes identificados por Argentina. En mayo de 2014, un tribunal federal argentino declaró inconstitucional el Memorándum de Entendimiento. A la fecha de preparación del presente documento, el pronunciamiento había sido apelado y el Memorándum de Entendimiento no estaba siendo implementado.

Juicios por abusos del pasado

En 2003 se reabrieron varias causas por violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura militar de Argentina (1976-1983), luego de que el Congreso anulara las leyes de amnistía. La Corte Suprema, posteriormente, declaró la inconstitucionalidad de las leyes de amnistía, y en la justicia federal se anularon indultos concedidos a ex oficiales, que habían sido condenados o estaban siendo juzgados por violaciones de derechos humanos.

Hasta agosto de 2014, se habían realizado 121 juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, que tuvieron como resultado 503 condenas. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) ha informado que 42 personas han sido

absueltas durante los juicios, y que otros 1.611 presuntos implicados están siendo investigados.

Ante la gran cantidad de víctimas, sospechosos y causas, los jueces y fiscales enfrentan el desafío de llevar ante la justicia a los responsables y, al mismo tiempo, respetar las garantías de debido proceso de los acusados. Otras preocupaciones incluyen las considerables demoras en los juicios, que no se haya concretado la captura de dos militares que están prófugos desde 2013, y la falta de esclarecimiento sobre el paradero de Jorge Julio López, quien había sido víctima de torturas y desapareció en 2006, un día antes de la fecha en que debía asistir a una de las audiencias en el juicio contra uno de sus torturadores.

Argentina ha conseguido avances significativos en la identificación de los hijos de personas desaparecidas que fueron apropiados ilegalmente durante la dictadura, y en poner en contacto a estas personas con sus familias biológicas. En julio de 2014, el Banco Nacional de Datos Genéticos identificó al nieto de Estela de Carlotto, la fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo. Hasta agosto, 115 nietos habían sido encontrados. A la fecha de redacción del presente, la Corte Suprema de Justicia aún no había resuelto un recurso contra una ley de 2009 que limitaría la obtención de muestras de ADN a casos del período de la dictadura.

En diciembre de 2013, César Milani, jefe de las Fuerzas Armadas, fue ascendido a teniente general, a pesar de que estaba siendo investigado penalmente por la desaparición de un soldado en la provincia de Tucumán en 1976, y la tortura a un civil en 1977 en la provincia de La Rioja.

Abusos policiales

Los abusos policiales siguen siendo un problema grave, a pesar de que en 2011 las autoridades de al menos 19 provincias se comprometieron a no recurrir a un uso excesivo de la fuerza al intervenir en manifestaciones públicas. En mayo de 2014, 22 personas resultaron heridas cuando fuerzas locales de seguridad dispersaron una manifestación de trabajadores en la provincia de Tucumán, utilizando balas de goma y bastones policiales con fuerza excesiva, según el CELS. En junio, policías de la provincia de Chaco dispararon balas de goma y golpearon y detuvieron a manifestantes, dejando un saldo de más de 100 personas heridas.

Condiciones en centros de detención

Aún subsisten en las prisiones graves problemas de sobrepoblación, maltrato por parte de guardias penitenciarios, condiciones edilicias inadecuadas y violencia entre internos. Según la Procuración Penitenciaria de la Nación, un organismo oficial creado por el Congreso, entre enero de 2013 y octubre de 2014 se produjeron 88 muertes, incluidas 41 muertes violentas, en las cárceles federales. Este organismo también documentó 724 casos de tortura o maltrato en cárceles federales durante 2013, y 520 en los primeros 10 meses de 2014.

Derechos indígenas

La población indígena en Argentina enfrenta obstáculos en el acceso a la justicia, tierras, educación, atención médica y otros servicios básicos.

La legislación vigente requiere que el gobierno realice un censo de las tierras ocupadas por comunidades indígenas antes de noviembre de 2017, y antes de esa fecha prohíbe desalojar a las comunidades. En junio de 2014, ocho organizaciones de derechos humanos presentaron un escrito de amicus curiae ante la Corte Suprema, en el cual sostuvieron que un relevamiento de tierras en la provincia de Formosa no había garantizado los derechos de miembros de la comunidad indígena Potae Napocna Navogoh.

Derechos reproductivos

En Argentina el aborto es ilegal, salvo en escasas excepciones, y las mujeres y jóvenes enfrentan numerosos obstáculos para acceder a productos y servicios de salud reproductiva, como anticoncepción, procedimientos voluntarios de esterilización y aborto después de una violación o cuando esté en peligro la salud o la vida de la mujer (los pocos casos en los cuales el aborto no está penalizado). Como resultado de estos obstáculos, las mujeres y jóvenes pueden afrontar embarazos no deseados o peligrosos, riesgos para su salud o su vida, y pueden ser perseguidas penalmente si buscan abortar.

En junio de 2014, tras solicitar atención médica debido a dolores en el abdomen, una mujer en la provincia de Jujuy fue detenida e imputada por homicidio, debido a sospechas de que se había sometido a un aborto. La mujer, que posteriormente confesó bajo coacción haberse sometido a un aborto tras haber sido violada, permaneció encarcelada a la fecha de preparación de este documento, junto con dos compañeras de trabajo que también fueron imputadas por homicidio por su presunta participación en el procedimiento.

En una decisión emblemática, en marzo de 2012 la Corte Suprema de Justicia determinó que no era necesario contar con autorización judicial previa para someterse a un aborto luego de una violación, y exhortó a los gobiernos provinciales a asegurar el acceso a abortos legales. Hasta marzo de 2014, más de la mitad de las 23 provincias argentinas aún no habían adoptado protocolos que cumplieran con los requisitos establecidos por la Corte, según organizaciones locales.

Orientación sexual e identidad de género

En 2010, Argentina se convirtió en el primer país de América Latina en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. La Ley de Matrimonio Civil extiende a parejas del mismo sexo la posibilidad de contraer matrimonio y prevé idénticos derechos y garantías legales que los reconocidos a las parejas heterosexuales, incluidos, entre otros, los derechos de adopción y beneficios jubilatorios. Desde entonces, casi 10.000 parejas del mismo sexo han contraído matrimonio en el país.

En 2012, la emblemática Ley de Identidad de Género reconoció el derecho de los mayores de 18 años a elegir su identidad de género, someterse a intervenciones de reasignación de género y a que se modifiquen los documentos oficiales sin necesidad de aprobación judicial o médica. Los seguros de salud públicos y privados contemplan procedimientos de reasignación de género quirúrgicos u hormonales.

Actores internacionales clave

Un informe de diciembre de 2013 del Comité contra la Desaparición Forzada, el organismo que supervisa el cumplimiento de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, reconoció que la legislación argentina sobre esta materia es en gran medida consistente con las obligaciones jurídicas internacionales asumidas por país, pero señaló con preocupación que no existen suficientes datos estadísticos para evaluar si se cumplen las normas internacionales.

En abril, el Comité de las Naciones Unidas de los Derechos de las Personas con Discapacidad determinó que las autoridades argentinas no habían asegurado que un preso con discapacidad tuviera acceso equitativo a los servicios e instalaciones penitenciarias, y destacó la obligación del Estado de adoptar medidas para rectificar esta situación y prevenir violaciones similares en otros casos.

Motivada por la situación de su deuda externa, Argentina impulsó una resolución internacional sobre restructuración de deudas soberanas, sosteniendo que era necesario que los gobiernos cumplieran determinadas obligaciones en materia de derechos. En septiembre, la Asamblea General de la ONU adoptó una resolución en la cual estableció un marco multilateral para asistir a los países que enfrentaran este tipo de restructuraciones. Como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Argentina apoyó acciones de la ONU orientadas a que se llevara a cabo un fuerte escrutinio sobre violaciones de derechos humanos ocurridas en Corea del Norte, Sri Lanka, Bielorrusia, Irán, los territorios ocupados de Palestina y Siria. Argentina ha sido uno de los países que apoyaron más activamente acciones internacionales para reforzar la protección de escuelas, a través del proceso de formulación e implementación de las Directrices de Lucens para Prevenir el Uso Militar de Escuelas y Universidades durante Conflictos Armados.

En septiembre de 2014, Argentina fue uno de los promotores de una importante resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género. La resolución instó al Alto Comisionado para los Derechos Humanos a que actualizara un informe de 2012 sobre violencia y discriminación con el objeto de dar a conocer buenas prácticas que permitan poner fin a estos abusos.

Bolivia

En octubre de 2014, Evo Morales fue reelegido presidente de Bolivia con el 61 por ciento de los votos, y el partido gobernante obtuvo dos tercios de las bancas en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Las amenazas a la independencia judicial y la impunidad de delitos violentos y de violaciones de derechos humanos siguen siendo problemas serios en Bolivia. El uso extendido y arbitrario de la prisión preventiva y las demoras en los juicios atentan contra los derechos de los acusados y agravan la sobrepoblación carcelaria.

El gobierno del Presidente Morales continuó acosando a defensores de derechos humanos y periodistas críticos durante 2014, y no respetó plenamente el derecho de los grupos indígenas a su consentimiento libre, previo e informado. La violencia contra mujeres y el trabajo infantil continúan siendo graves preocupaciones.

Independencia judicial y acceso a justicia

Durante años, la corrupción, las demoras y la interferencia política han caracterizado al sistema judicial boliviano. La constitución de 2009 previó elecciones judiciales con el fin de reformar los altos tribunales de Bolivia, pero la Asamblea Legislativa Plurinacional seleccionó a los candidatos a través de un proceso que careció de transparencia y no consideró adecuadamente sus aptitudes.

En julio de 2014, la Asamblea Legislativa Plurinacional había iniciado un proceso de destitución contra tres magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, conforme a una ley de 2010 que habilita a la legislatura a destituir jueces y aplicarles sanciones penales, lo cual socava la independencia judicial. Hasta noviembre, los tres magistrados habían sido suspendidos y al menos uno más estaba siendo investigado.

Impunidad de abusos y delitos violentos

Bolivia ha logrado escasos avances en el juzgamiento de violaciones de derechos humanos cometidas durante gobiernos autoritarios entre 1964 y 1982, y no ha resarcido adecuadamente a las víctimas de violencia política. Una de las causas ha sido la negativa de las Fuerzas Armadas a brindar información sobre el destino de personas asesinadas o desaparecidas durante ese período. La propuesta de crear una comisión de la verdad —integrada por siete miembros, incluidos cuatro designados por el gobierno— que investigue estos delitos se encontraba pendiente en la Asamblea Legislativa Plurinacional a la fecha de preparación de este informe.

Los esfuerzos para juzgar a los presuntos responsables de muertes ocurridas en 2008 durante enfrentamientos violentos entre defensores y detractores del Presidente Morales han logrado avances escasos. En septiembre de 2014, un tribunal de La Paz aún estaba examinando la prueba en un caso vinculado con Leopoldo Fernández, ex prefecto de Policía del departamento de Pando, y cinco funcionarios locales, acusados en 2008 por su rol en el asesinato de 13 personas. La ineficacia fiscal ha socavado el derecho de las víctimas a la justicia y el derecho de los acusados al debido proceso.

El gobierno no ha reabierto la investigación sobre el asesinato de dos ciudadanos húngaros (uno de ellos nacido en Bolivia) y un irlandés en abril del 2009, a quienes el gobierno señaló como mercenarios involucrados en una conspiración separatista. Fueron abatidos y asesinados por la policía, luego de que esta irrumpiera a la fuerza en sus habitaciones de un hotel en Santa Cruz. Informes creíbles sugieren que al menos dos de los tres hombres habrían sido ejecutados extrajudicialmente. En octubre, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria determinó que un ciudadano croata-boliviano implicado en el caso había sido detenido arbitrariamente, y pidió a Bolivia que ordene su inmediata libertad.

El gobierno aún no ha investigado exhaustivamente el uso excesivo de la fuerza empleado por la Policía en 2011 para dispersar una manifestación mayormente pacífica contra la propuesta de construir una carretera en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Secure (conocido como “TIPNIS”). Miembros de la Policía amordazaron y golpearon a los manifestantes y los despojaron de sus ropas, según la Defensoría del Pueblo.

La falta de acceso a la justicia ha causado linchamientos contra ciudadanos o policías creídos responsables de delitos. Diez personas habrían muerto en linchamientos en 2013, y al menos otras once en 2014. La impunidad de los linchamientos continúa siendo la regla.

Jurisdicción y abusos militares

Las violaciones de derechos humanos contra soldados siguen siendo un problema. En mayo, un soldado que lideró una manifestación que exigía mejores condiciones laborales para oficiales de bajo rango fue acusado de sedición y rebelión. En julio, cinco soldados fueron presuntamente desnudados, golpeados y sometidos a descargas eléctricas por sus superiores debido a la pérdida de un fusil.

El Tribunal Constitucional Plurinacional determinó en diciembre de 2012 que la justicia penal ordinaria tenía competencia para juzgar la causa sobre la muerte de un conscripto ocurrida en 2011 tras un ejercicio de entrenamiento, a causa de que los instructores presuntamente lo golpearon en la cabeza y el tórax. El tribunal exhortó a los legisladores a que reformaran el Código Penal Militar de Bolivia para asegurar que las violaciones de derechos humanos sean juzgadas en la justicia ordinaria. En noviembre, el código aún no había sido reformado.

Debido proceso y condiciones carcelarias

La amplia discrecionalidad de los jueces para disponer la prisión preventiva y la falta de acceso a defensores de oficio han socavado el derecho al debido proceso de los acusados, en particular entre los sectores de bajos recursos de Bolivia.

Bolivia presenta uno de los mayores índices de presos no condenados en la región (más del 80 por ciento, hasta diciembre de 2013). El uso extendido de la prisión preventiva y las demoras en los juicios han aumentado la sobrepoblación y las condiciones deficientes en las cárceles, donde la alimentación y la atención médica son inadecuadas y el control interno a menudo queda en manos de los presos. Hasta febrero de 2014, había 14.700 presos en cárceles con una capacidad máxima para 4.884 personas, según la Defensoría del Pueblo.

En septiembre, cuatro personas murieron y 11 resultaron heridas durante enfrentamientos entre detenidos en una cárcel de máxima seguridad en Cochabamba. Según la Defensoría del Pueblo, los guardias penitenciarios no controlaron una fiesta organizada por los internos, ni asistieron a las víctimas tras los sucesos violentos.

Varios decretos adoptados desde 2012 habilitan al presidente a reducir la pena a quienes hayan sido condenados a menos de ocho años de prisión, y a indultar a quienes se encuentren en prisión preventiva por delitos para los cuales se prevean penas de hasta cuatro años de prisión. En agosto de 2014, el director del sistema penitenciario habría indicado que 957 presos habían sido liberados.

Defensores de derechos humanos

Los defensores de derechos humanos continúan desempeñándose en un entorno hostil que limita su trabajo independiente.

En 2013, el Presidente Morales dictó un decreto que otorgó al gobierno amplias facultades para disolver organizaciones de la sociedad civil. El decreto permite que cualquier dependencia gubernamental solicite al Ministerio de Autonomías que revoque la personalidad jurídica de una organización si esta lleva a cabo actividades distintas de las enumeradas en su estatuto, o si cualquiera de los representantes de la organización recibe sanciones penales por realizar actividades que “atenten en contra [de] la seguridad o el orden público”. La Asamblea Legislativa Plurinacional también podría solicitar que se revoque la personalidad jurídica en casos de “necesidad o interés público”.

En diciembre de 2013, el gobierno expulsó a la organización no gubernamental danesa IBIS, que había trabajado con poblaciones indígenas en Bolivia y aportado fondos para estas desde 1984. El ministro de la presidencia declaró que el gobierno no toleraría la “injerencia política” de IBIS en Bolivia, y señaló que las “organizaci[ones] no gubernamenta[les] que opere[n] políticamente va[n] a ser expulsada[s]”.

Libertad de expresión

Si bien el debate público es robusto, el gobierno de Morales ha acusado reiteradamente a periodistas de mentir y de distorsionar la realidad con intereses políticos. En abril, el Procurador General denunció penalmente a dos periodistas del periódico La Razón, a quienes acusó de “espionaje” y de “revelar secretos” por haber publicado un artículo sobre la estrategia del gobierno en una controversia internacional por la frontera marítima con Chile. En agosto, la causa se remitió a un Tribunal de Imprenta especializado, con facultades para aplicar multas en lugar de sanciones penales.

Al momento de redacción de este informe, se encuentra pendiente en la Asamblea Legislativa Plurinacional un proyecto de ley sobre acceso a información pública impulsado por el gobierno.

Derechos indígenas

La Constitución de Bolivia de 2009 incluye amplias garantías para proteger los derechos de los grupos indígenas, incluidas la titulación colectiva de tierras y territorios, la educación intercultural, la consulta previa para proyectos de desarrollo y la preservación de sistemas de justicia indígenas. Aún no ha sido plenamente implementada una ley de 2011 que establece límites jurisdiccionales entre el sistema de justicia indígena y el ordinario.

Sigue pendiente la implementación del derecho al consentimiento previo, libre e informado, en particular con respecto a los proyectos de la industria extractiva. Según el Comité de Derechos Humanos de la ONU, la formulación de un proyecto de ley sobre este tema ha estado acompañada por consultas, pero no por un consentimiento adecuado de las comunidades indígenas.

Violencia de género y derechos reproductivos

Las mujeres y jóvenes de Bolivia siguen expuestas a un alto riesgo de sufrir violencia de género, a pesar de una ley de 2013 que contempló medidas exhaustivas para prevenir y sancionar la violencia contra la mujer. La implementación de la ley, que tipificó el “feminicidio” y exigió la creación de fiscales y tribunales especiales para delitos de género, y de casas de acogida para mujeres, ha avanzado muy lentamente.

En marzo, la Oficina de la ONU en Bolivia informó que 154 casos de violencia política contra mujeres ocurridos en 2013 estaban impunes. La ley define “violencia política” como acciones o “agresiones físicas, psicológicas [o] sexuales” contra mujeres que son candidatas u ocupan funciones públicas, o contra familiares de estas, orientadas a menoscabar su labor.

En noviembre, la Policía Boliviana informó que se habían producido 95 “feminicidios” en el país en 2014, creó una línea telefónica gratuita para la denuncia de estos casos y conformó un “grupo de reacción inmediata” para atender denuncias de violencia.

Las mujeres y jóvenes enfrentan numerosos obstáculos para acceder a productos y servicios de salud reproductiva, como anticoncepción y abortos después de una violación (una de las pocas circunstancias en las cuales el aborto no es punible). Según Ipas, entre 2008 y 2013, 775 mujeres fueron perseguidas penalmente por someterse a abortos, y miles solicitaron atención médica debido a abortos incompletos. En febrero, el Tribunal Constitucional Plurinacional determinó que no era necesario obtener autorización judicial previa ni iniciar una acción penal formal para obtener acceso al aborto legal luego de una violación.

Trabajo infantil

En julio de 2014, la Asamblea Plurinacional aprobó una ley, que fue promulgada por el vicepresidente, que permite el trabajo de menores desde los 10 años, lo cual vulnera estándares internacionales y convierte a Bolivia en el primer país del mundo en legalizar el empleo desde tan temprana edad. Según las estadísticas oficiales más recientes disponibles, correspondientes a 2008, al menos 746.000 menores trabajan en Bolivia.

Orientación sexual e identidad de género

Persiste la impunidad por actos de violencia y discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género. En 2014, la Defensoría del Pueblo informó que no habían sido condenados los responsables de la muerte de 55 personas LGBT desde 2004.

La constitución de 2009 define al matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. Varias propuestas para reformar la constitución o legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo o las uniones legales se encontraban pendientes al momento de redacción de este informe.

Actores internacionales clave

Bolivia ha apoyado una campaña de Ecuador destinada a debilitar la independencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y limitar el financiamiento y la efectividad de su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. El Presidente Morales anunció en 2013 que estaba “pensando seriamente” retirarse de la comisión, pero Bolivia participó en las audiencias de octubre de 2014.

La Organización Internacional del Trabajo, que analiza actualmente la nueva legislación boliviana sobre trabajo infantil, señaló en julio de 2014 que esta norma podría violar varios tratados internacionales ratificados por Bolivia.

Brasil

Brasil es una de las democracias más influyentes en asuntos regionales y mundiales, y en los últimos años se ha posicionado como una voz crecientemente importante en los debates sobre las respuestas internacionales a problemas de derechos humanos. A nivel interno, el país continúa enfrentando serios desafíos en materia de derechos humanos, incluidos el uso de tortura y maltratos, los asesinatos ilegales por parte de policías, la sobrepoblación carcelaria y la persistente impunidad por abusos cometidos durante el régimen militar (1964-1985).

Las violentas pandillas delictivas y las prácticas policiales abusivas constituyen problemas graves en numerosas ciudades de Brasil. En los últimos años, los gobiernos de los estados de San Pablo y Río de Janeiro han implementado medidas destinadas a mejorar el desempeño policial y prevenir abusos, si bien todavía es común que la Policía no informe debidamente estos hechos o participe en otras formas de encubrimiento.

Durante el año previo al Mundial de Fútbol de 2014, hubo masivas protestas a lo largo del país. Decenas de personas resultaron heridas en enfrentamientos entre manifestantes y policías, incluidos periodistas. En varios incidentes, miembros de la Policía emplearon un uso excesivo de la fuerza, por ejemplo, propinaron golpizas a personas que no se habían resistido a ser arrestadas y arrojaron cartuchos de gas lacrimógeno a manifestantes desde corta distancia.

Seguridad pública y conducta policial

Durante los primeros nueve meses de 2014, la Policía fue responsable de 436 muertes en el estado de Río de Janeiro y de otras 505 en el estado de San Pablo. En el estado de San Pablo, la cifra representa un incremento del 93 por ciento con respecto al mismo período en 2013. Según la información disponible más reciente compilada por la organización no gubernamental (ONG) Foro Brasileño de Seguridad Pública, más de 2.200 personas murieron durante operativos policiales en todo Brasil en 2013, lo cual equivale en promedio a 6 personas por día.

La Policía informa, de forma rutinaria, que estas muertes son resultado de enfrentamientos armados con delincuentes. Si bien algunas muertes causadas por policías son consecuencia del uso legítimo de la fuerza, otras no lo son, lo cual ha sido documentado por Human Rights Watch y otras organizaciones y reconocido por funcionarios de la justicia penal de Brasil.

En un esfuerzo por prevenir el encubrimiento de muertes causadas ilegalmente por policías, el gobierno del estado de San Pablo dictó en enero de 2013 una resolución que prohíbe que los policías retiren los cuerpos de víctimas del lugar donde se

produjo un tiroteo. Sin embargo, persisten en San Pablo obstáculos significativos a la rendición de cuentas por muertes ilegítimas, incluidos que la Policía no ha preservado evidencias cruciales y que las autoridades no destinan personal y recursos suficientes a los fiscales responsables de investigar estos casos.

En el estado de Río de Janeiro, casi 2.900 policías y otros funcionarios públicos recibieron en mayo de 2014 un premio económico por cumplir metas de reducción de delitos, incluida la reducción de homicidios por parte de la policía.

Condiciones carcelarias, tortura y maltrato de detenidos

Muchas cárceles y centros de detención están sobrepobladas y caracterizadas por la violencia. La tasa de encarcelamiento del país aumentó un 45 por ciento entre 2006 y 2013, según datos del Sistema Integrado de Información Penitenciaria (InfoPen) del Ministerio de Justicia. La población carcelaria adulta supera el medio millón de personas, es decir, un 37 por ciento más de la capacidad para la cual fueron diseñadas las prisiones, según datos del Consejo Nacional de Justicia de junio de 2014.

Además, más de 20.000 menores cumplen actualmente penas de prisión. Las demoras en el sistema judicial agravan la sobrepoblación. Más de 230.000 personas se encuentran en prisión preventiva. En el estado de Piauí, el 68 por ciento de los detenidos están en prisión preventiva, lo cual constituye el índice más alto en todo el país. La sobrepoblación y la salubridad deficiente favorecen la propagación de enfermedades, y el acceso de los presos a la atención médica continúa siendo inadecuado.

La tortura es un problema crónico en estaciones de policía y centros de detención. Entre enero de 2012 y junio de 2014, la Defensoría del Pueblo recibió 5.431 denuncias de casos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes (cerca de 181 denuncias por mes) ocurridos a lo largo del país, a través de un servicio de atención telefónica. De estas denuncias, el 84 por ciento se refería a incidentes en dependencias policiales, cárceles, prisiones y centros de detención de menores.

Grabaciones de video publicadas en línea por el periódico Folha de São Paulo el 7 de enero de 2014, muestran los restos de los cuerpos decapitados de tres de cuatro internos que fueron asesinados por otros reclusos en el Complejo Penitenciario Pedrinhas, en el estado de Maranhão, el 17 de diciembre de 2013. En total 60 internos fueron asesinados en ese estado en 2013, según el Consejo Nacional de Justicia (CNJ), que efectuó una investigación en cinco cárceles de Maranhão y determinó que existía lo que denominó una “falta absoluta de seguridad” para los detenidos. En abril de 2014, el CNJ emitió una recomendación a la justicia, en la cual estipuló los pasos que debían seguir los jueces para investigar denuncias creíbles de tortura y maltrato.

Los agentes de seguridad que cometen abusos contra presos son rara vez juzgados. En una excepción notable, 73 policías fueron condenados por homicidio en 2013 y 2014 por su participación en la muerte de 111 detenidos en la cárcel de Carandiru, en el estado de San Pablo, en 1992.

En julio de 2014, la Presidenta Dilma Rousseff designó a los 23 miembros del Comité Nacional para Prevenir y Combatir la Tortura, que forma parte del Sistema Nacional para Prevenir y Combatir la Tortura, creado por ley en agosto de 2013. En noviembre, el comité designó a un panel de 11 expertos que tendrán facultades para efectuar visitas sin aviso previo a centros de detención, iniciar investigaciones sobre posibles casos de tortura, y formular recomendaciones a instituciones públicas y privadas.

Libertad de expresión, libertad en Internet y privacidad

Según la Asociación Brasileña de Periodismo de Investigación, fuerzas de seguridad del Estado hirieron o detuvieron a 178 periodistas que cubrían manifestaciones en distintas regiones del país durante el año previo al Mundial de Fútbol de 2014.

En 2012 entró en vigor una ley federal de acceso a información pública, y desde entonces, la mayoría de los estados han promulgado leyes reglamentarias. La ley dispone que el público debería tener acceso irrestricto a información sobre violaciones de derechos fundamentales.

Brasil dio un paso importante al promulgar el Marco Civil de Internet en abril de 2014. El Marco Civil prevé garantías para el derecho a la privacidad y la libertad de expresión en línea, y contribuye a reforzar la vigencia del estado de derecho en el ámbito digital. La ley estipula que Brasil apoyará la neutralidad de la red como principio rector de futuros desarrollos de Internet. El Marco aún no ha sido implementado.

Derechos reproductivos

El Código Penal de Brasil prohíbe el aborto, salvo en casos de violación o cuando resulte necesario para preservar la vida de la mujer. En 2012, el Supremo Tribunal Federal amplió las excepciones para incluir casos de anencefalia, en los cuales el feto presenta una malformación cerebral congénita. Las mujeres y jóvenes que obtienen abortos no contemplados en estas excepciones pueden enfrentar penas de hasta tres años de prisión, y las personas que practican abortos pueden recibir penas de hasta cuatro años de prisión.

Los abortos practicados en clínicas clandestinas suponen altos riesgos para las mujeres, como ejemplifica el resonante caso de Jandira dos Santos Cruz, quien la Policía presume que habría muerto tras un intento fallido de practicar un aborto ilegal a fines de agosto de 2014, y cuyo cuerpo fue posteriormente mutilado para ocultar su identidad.

En agosto de 2013, la Presidenta Rousseff promulgó una ley que exige a los hospitales públicos brindar asistencia integral a víctimas de violencia sexual, incluida la “profilaxis de embarazo” para quienes hayan sufrido una violación, e información sobre el derecho a acceder a un aborto en los casos en los cuales esta práctica es lícita. En 2014, el Ministerio de Salud dictó una resolución que incluyó al aborto legal en el seguro de salud nacional, pero revocó la medida una semana después en respuesta a presiones políticas.

Orientación sexual e identidad de género

La Defensoría del Pueblo (Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos) recibió más de 1.500 denuncias de violencia y discriminación contra lesbianas, homosexuales, bisexuales y transgénero (LGBT) en 2013. En los seis primeros meses de 2014, la Defensoría del Pueblo informó más de 500 denuncias de este tipo. La defensoría también anunció un aumento de las denuncias luego de que un candidato presidencial instara a las personas LGBT a que recibieran tratamiento psicológico durante un debate televisivo.

Derechos laborales

Los esfuerzos del gobierno federal por erradicar el trabajo forzado han posibilitado que desde 1995 más de 46.000 trabajadores sean liberados de condiciones laborales similares a la esclavitud, según datos oficiales. No obstante, la Comisión Pastoral de la Tierra, una ONG católica, recibió denuncias de que aproximadamente 3.000 personas fueron víctimas de trabajo forzado en 2013. El juzgamiento penal de los empleadores que vulneran los derechos de los trabajadores sigue siendo relativamente excepcional.

En junio de 2014, el Congreso promulgó una reforma constitucional que permite al gobierno confiscar bienes sin resarcir al propietario, cuando se compruebe que se ha utilizado trabajo forzado. Los legisladores aún no han promulgado una ley que precise el significado de trabajo forzado y explique de qué manera se llevará a cabo la expropiación en estos casos.

Brasil adoptó una reforma constitucional en marzo de 2013, mediante la cual se reconoce a los 6,5 millones de trabajadores domésticos que, según se estima, existen en el país el derecho al pago de horas extras, seguro por desempleo, jubilación y una jornada laboral máxima de 8 horas diarias y 44 horas semanales. El Senado de Brasil aún no ha aprobado un proyecto de reglamentación de la reforma constitucional.

Violencia rural

Activistas rurales y líderes indígenas involucrados en conflictos por tierras continúan enfrentando amenazas y violencia. Según las cifras más recientes de la Comisión Pastoral de la Tierra, 34 personas involucradas en conflictos por tierras fueron asesinadas en todo el país durante 2013, y 15 sufrieron tentativas de homicidio. Hasta agosto, la comisión ya había informado sobre 23 personas asesinadas en conflictos por tierras en 2014. Casi 2.500 activistas rurales han recibido amenazas de muerte en la última década.

Según el Consejo Indigenista Misionero de la Iglesia Católica (Cimi), 53 indígenas fueron asesinados en Brasil en 2013, 33 de ellos en Mato Grosso do Sul, el estado con el mayor índice de homicidios de indígenas de todo Brasil. Treinta y tres de las víctimas eran miembros de la población indígena Guarani-Kaiowá y dos pertenecían al grupo Terena.

Justicia por abusos del período militar

En mayo de 2012, una comisión nacional de la verdad comenzó a investigar violaciones sistemáticas de derechos humanos ocurridas durante el régimen militar entre 1964 y 1985, incluidas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias y limitaciones a la libertad de expresión. En febrero, la comisión de la verdad presentó un informe preliminar que identificó siete establecimientos de las Fuerzas Armadas donde fueron torturados y murieron presos políticos durante la dictadura militar. A la fecha de redacción de este documento, estaba previsto que el informe final de la comisión de la verdad se difundiera en diciembre 2014.

Los responsables de estos delitos no pueden ser juzgados debido a ley de amnistía de 1979. En abril de 2010, el Supremo Tribunal Federal ratificó pronunciamientos de tribunales inferiores, que habían determinado que la amnistía impedía la mayoría de las persecuciones penales a agentes estatales por estos crímenes. No obstante, seis meses después, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que esta interpretación vulneraba las obligaciones jurídicas de Brasil con arreglo al derecho internacional, y que la ley de amnistía no debería constituir un obstáculo al juzgamiento de graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen militar.

En abril de 2013, fiscales de San Pablo iniciaron acciones penales contra un coronel del Ejército retirado y un investigador de la Policía por haber ocultado el cuerpo de un estudiante de medicina asesinado durante el régimen militar. El caso todavía está siendo juzgado en los tribunales de Brasil. No obstante, en junio de 2013 un juez en Río de Janeiro se negó a juzgar a agentes estatales por su presunta participación en la desaparición forzada de un periodista en 1970.

Actores internacionales clave

Tras una petición presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que remarcó los persistentes abusos de derechos humanos ocurridos en el Complejo Penitenciario Pedrinhas en el estado de Maranhão, en noviembre de 2014 la Corte Interamericana de Derechos Humanos instó a Brasil a que adoptara medidas inmediatas para proteger la vida y la integridad personal de todos los internos de ese complejo penitenciario.

Política exterior de Brasil

Brasil ha vuelto a ser miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y durante 2014 mantuvo un historial de votos positivo, apoyando la adopción de resoluciones sobre varias situaciones críticas en materia de derechos humanos. En junio, Brasil votó a favor de una resolución que condenó los operativos militares realizados por fuerzas israelíes en Gaza, repudió abusos contra civiles cometidos por ambos bandos y designó una comisión internacional de investigación encargada de investigar violaciones del derecho internacional humanitario y del derecho

internacional de los derechos humanos. En septiembre de 2014, Brasil fue uno de los promotores de una importante resolución contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género del Consejo de Derechos Humanos. La resolución instó al Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU a que actualizara un informe de 2012 sobre violencia y discriminación, con el objeto de dar a conocer buenas prácticas que permitieran poner fin a estos abusos. No obstante, Brasil se abstuvo en una polémica resolución del consejo que no reconoció las distintas formas que pueden adoptar las familias.

En la Asamblea General de la ONU, Brasil ha desempeñado un rol de liderazgo en la promoción de la privacidad en la era digital. En diciembre de 2013, la Asamblea General adoptó una resolución propuesta por Brasil y Alemania que instaba a todos los estados a proteger y respetar el derecho a la privacidad, y encargaba al Alto Comisionado para los Derechos Humanos que informara sobre el tema. Ese informe, que se emitió en julio de 2014, concluyó que la vigilancia masiva se había convertido en “un hábito peligroso” en algunos países, y que numerosos estados no proveían protecciones suficientes a la privacidad. Al momento de la preparación de este informe, Brasil seguía exigiendo que la Asamblea General adoptara mayores medidas sobre estos temas.

En noviembre de 2014 Brasil votó a favor de una resolución histórica de la Asamblea General, que instó al Consejo de Seguridad a que remitiera la situación en Corea del Norte a la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad.

En la Organización de los Estados Americanos, Brasil presentó una resolución que prohíbe todo tipo de discriminación contra personas LGBT, incluida la discriminación que limita su participación política y su involucramiento en otros aspectos de la vida pública. La resolución fue aprobada en junio de 2014.

En abril de 2014, Brasil organizó y albergó NetMundial, un encuentro global que congregó a gobiernos, organizaciones no gubernamentales, especialistas en tecnología y actores del sector privado interesados en el futuro de Internet. Los participantes de NetMundial prepararon un documento final que priorizó principios de derechos humanos y definió un plan de trabajo para el futuro diálogo intersectorial en materia de gobernanza de Internet.

En marzo de 2014, la Presidenta Michelle Bachelet comenzó su segundo mandato con el compromiso de abordar las desigualdades sociales y económicas, enfocándose inicialmente en una reforma exhaustiva de los sistemas educativo y tributario. Su plataforma de campaña incluyó el compromiso de adecuar la ley antiterrorista chilena a los estándares internacionales, y presentar un proyecto de ley que despenalice el aborto cuando el embarazo ponga en riesgo la vida de la mujer o joven, sea inviable o haya sido resultado de una violación. Su gobierno también se ha comprometido a poner fin a la jurisdicción de los tribunales militares sobre presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por carabineros (policías encargados de mantener el orden público y prevenir delitos).

Si bien la justicia continúa juzgando a personas por abusos cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), en numerosos casos la Corte Suprema de Justicia ha aplicado sus facultades discrecionales para reducir las penas de quienes han perpetrado violaciones de derechos humanos, lo cual ha llevado a penas desproporcionadas en relación con la gravedad de los delitos.

Leyes antiterroristas

Tras reiteradas recomendaciones de organismos de derechos humanos de las Naciones Unidas, en 2014 las autoridades anunciaron que el gobierno de Bachelet no aplicaría las leyes antiterroristas de 1984 para responder a la violencia surgida en protestas indígenas sobre la titularidad de tierras.

La definición excesivamente amplia de terrorismo que prevé la ley continúa permitiendo la persecución penal por terrorismo de activistas presuntamente responsables de actos como incendio intencional y destrucción de propiedad privada, si bien en los casos más recientes la justicia ha rechazado acusaciones de terrorismo por considerarlas infundadas. También es preocupante una disposición de la ley que permite que fiscales no divulguen la identidad de determinados testigos, lo cual ha permitido la detención de presuntos responsables durante más de un año sobre la base de evidencias que estos no pueden impugnar en la práctica.

En septiembre de 2014, 14 personas resultaron heridas por la explosión de una bomba ubicada en un cesto de basura de un concurrido paseo de compras de una estación de metro de Santiago. Una serie de ataques de esta índole, atribuidos a grupos anarquistas, habían sido informados a lo largo de varios años, pero hasta el incidente de septiembre nunca antes se habían dejado explosivos durante el día en lugares de gran concurrencia, y ningún transeúnte había resultado gravemente herido. Si bien en varios de los incidentes anteriores los presuntos responsables fueron persegui-

dos penalmente sobre la base de la ley antiterrorista, en todos los casos la justicia desestimó los cargos por terrorismo por falta de evidencias.

En noviembre, el gobierno presentó en el Senado un proyecto de ley para reemplazar la actual ley antiterrorista. El proyecto refuerza las garantías de debido proceso, al reconocer a los abogados defensores el derecho a ser informados sobre la identidad de testigos protegidos, así como a interrogar a los testigos sobre la evidencia y indagar su credibilidad. También autoriza a la Policía a utilizar agentes encubiertos para recabar evidencias sobre organizaciones terroristas, y les otorga inmunidad por las acciones cometidas en cumplimiento de una orden judicial.

Jurisdicción militar

Diversas normas aprobadas por el Congreso en septiembre de 2010 durante el gobierno de Sebastián Piñera finalmente eliminaron la jurisdicción de los tribunales militares sobre civiles, una reforma que había sido exigida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su pronunciamiento en el caso Palamara Iribarne de 2005. No obstante, la reforma conservó la jurisdicción de los tribunales militares con respecto a abusos cometidos por carabineros.

Los tribunales militares están integrados por militares en servicio y carecen de la independencia y las garantías de debido proceso que distinguen a los procesos penales ordinarios. Las investigaciones se instruyen en forma secreta, los procedimientos penales son en su mayoría escritos y los abogados tienen escasas oportunidades de interrogar a los testigos de cargo.

La mayoría de las acciones planteadas en tribunales militares por violaciones de derechos humanos en los cuales las víctimas son presuntamente civiles son desestimadas. Según datos publicados en 2014 por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH, el ombudsman de derechos humanos de Chile), la cantidad de condenas por abusos policiales en las zonas centrales de Chile entre 2005 y 2011 descendió al 0,48 por ciento de las denuncias presentadas, en comparación con el 3,2 por ciento registrado en el período entre 1990 a 2004, a pesar de que la cantidad de denuncias aumentó significativamente.

Los más altos tribunales de Chile se han opuesto progresivamente a la jurisdicción militar sobre estos casos. En mayo, el Tribunal Constitucional determinó la inconstitucionalidad de una decisión de un juez de la justicia ordinaria que se había declarado incompetente para intervenir en un caso sobre un policía acusado de haberle provocado una ceguera a un manifestante al arrojarle un cartucho de pintura en el ojo durante una manifestación callejera en 2013, y emitió un pronunciamiento similar en una causa distinta el mes siguiente. La sala penal de la Corte Suprema ha fallado a favor de la competencia de la justicia ordinaria en varias causas, incluida una vinculada con la muerte de un detenido que fue abandonado en un vehículo policial a altas temperaturas.

En mayo de 2014, el ministro de defensa anunció que presentaría un proyecto legislativo antes de fin de junio de 2015 que reformaría el Código de Justicia Militar y pondría

fin a la jurisdicción militar sobre delitos cometidos contra civiles por miembros de las Fuerzas Armadas (incluidos carabineros).

Actuación policial

Información publicada por el INDH en 2014 reveló que el abordaje de la policía a las manifestaciones públicas no era adecuado a los estándares internacionales de derechos humanos. El instituto concluyó que el uso de equipos antidisturbios como cañones de agua y gases lacrimógenos por parte de los carabineros en respuesta a actos violentos de manifestantes durante 2013 fue indiscriminado en el 70 por ciento de las manifestaciones que examinó. En general los Carabineros utilizaron estos métodos de manera desproporcionada en relación con la amenaza que enfrentaban, y también emplearon una fuerza desproporcionada al realizar detenciones.

Durante 2014 se redujo significativamente la cantidad de protestas públicas y de abusos cometidos por carabineros en este contexto. En agosto, gracias a la insistencia del INDH, los Carabineros autorizaron por primera vez la publicación de sus protocolos de intervención en manifestaciones públicas.

Condiciones en centros de detención

Muchas de las cárceles chilenas están sumamente sobrepobladas y las condiciones siguen siendo deficientes a pesar de los esfuerzos del gobierno. Un estudio de 44 cárceles publicado en marzo de 2014 por el INDH documentó golpizas propinadas por guardias penitenciarios y altos niveles de violencia entre internos en algunas cárceles, que causaron 35 muertes entre enero y octubre de 2012.

Es común que los presos sean arbitrariamente encarcelados en celdas de castigo sin suficiente iluminación, ventilación, acceso básico al agua, saneamiento, higiene, o atención médica. Al retirarse de su cargo en 2014, una funcionaria de la Corte Suprema responsable de supervisar las condiciones carcelarias se refirió a esta práctica como un “flagrante trato cruel e inhumano”.

Tortura

Se siguen denunciando casos de tortura, los cuales generalmente quedan impunes. Entre 2011 y agosto de 2014, el INDH presentó 33 denuncias de tortura ante la justicia: 16 por actos presuntamente cometidos por carabineros, 10 por guardias penitenciarios y 7 por miembros de la Policía de Investigaciones (PDI).

Juicios por abusos del pasado

El presidente de la Corte Suprema señaló en marzo de 2014 que 1.022 casos de violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura de Pinochet (1973-1990) estaban siendo juzgados en la justicia, 72 de las cuales eran casos de tortura. Según el programa de derechos humanos del Ministerio del Interior (que es parte en cerca de 800 de los casos bajo investigación judicial), hasta octubre se habían formulado

cargos o dictado condenas por violaciones de derechos humanos, incluidos asesinatos y desapariciones forzadas, contra 1.086 personas, de las cuales 279 habían recibido una condena definitiva y 75 cumplían penas de prisión.

La sala penal de la Corte Suprema ha revisado de forma inconsistente las condenas dictadas en causas importantes de derechos humanos. El Observatorio de Justicia Transicional de la Universidad Diego Portales, que lleva a cabo un monitoreo de los juicios de derechos humanos, ha constatado que en casos de desapariciones forzadas la corte a menudo confirma penas de prisión que cumplen con la obligación jurídica asumida por Chile de impartir justicia contra los responsables a través de penas adecuadas. No obstante, en casos de ejecuciones extrajudiciales, la corte con frecuencia ha reducido las penas de prisión impuestas, y ha permitido que se apliquen alternativas a la prisión si ha transcurrido un tiempo significativo desde la comisión del delito.

Derechos reproductivos

Chile es uno de los cuatro únicos países de América Latina (los otros tres son El Salvador, Honduras y Nicaragua) que prohíben el aborto de manera absoluta, incluso en casos de necesidad médica o violación. En su mensaje anual a la nación, pronunciado en mayo de 2014, la Presidenta Bachelet anunció que su gobierno presentaría un proyecto de ley para despenalizar el aborto cuando esté en riesgo la vida de la mujer o joven, el feto sea inviable, o el embarazo sea producto de una violación. Hasta noviembre de 2014, el gobierno aún no había presentado el proyecto en el Congreso. Dos proyectos propuestos por varios diputados y senadores en mayo y julio de 2013 todavía estaban siendo tratados en comisiones a la fecha de redacción de este informe.

Orientación sexual e identidad de género

Un proyecto presentado por cinco senadores en mayo de 2013 para otorgar reconocimiento jurídico a la identidad de género de personas transgénero todavía estaba siendo analizado en el Senado en noviembre de 2014. El proyecto permitiría que las personas cambien su nombre y género a efectos legales en sus certificados de nacimiento y documentos de identidad a fin de que los registros oficiales coincidan con su identidad de género. Otro proyecto planteado por el entonces presidente Sebastián Piñera en 2011 que concedería reconocimiento y protección legal a parejas del mismo sexo fue aprobado en el Senado en octubre de 2014, y a la fecha del presente aún no había sido sometido a votación en la Cámara de Diputados.

Actores internacionales clave

Como miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Chile apoyó medidas de la ONU para llevar a cabo un seguimiento de las violaciones de derechos humanos cometidas en Corea del Norte, Sri Lanka, Bielorrusia, Irán, los territorios ocupados de Palestina, Ucrania y Siria. Chile también fue uno de cuatro países que propusieron en septiembre de 2014 una resolución emblemática del

Consejo de Derechos Humanos contra la violencia y la discriminación basadas en la orientación sexual y la identidad de género, y fue el único miembro latinoamericano del Consejo de Derechos Humanos que se opuso en junio de 2014 a una polémica resolución que no reconocía las distintas formas que pueden adoptar las familias.

En enero de 2014, el desempeño de Chile en materia de derechos humanos fue evaluado en el marco del proceso del “examen periódico” del Consejo de Derechos Humanos. Varios países elogiaron que Chile haya establecido el INDH como un organismo independiente de monitoreo de la situación de derechos humanos, y que haya promulgado una ley contra la discriminación en 2012.

Muchos exigieron también que se lleve a cabo un debate para despenalizar el aborto. Chile aceptó esta recomendación (que había rechazado en el EPU de 2009), pero señaló que la ley propuesta se limitaría a embarazos que pusieran en riesgo la vida de la madre, fueran inviables o hubieran sido producto de una violación.

En julio de 2014, en sus observaciones finales sobre el sexto informe periódico de Chile, el Comité de Derechos Humanos, que es el organismo internacional de expertos encargado de interpretar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, recomendó que Chile reformara su legislación antiterrorista para asegurar que los delitos de terrorismo quedaran claramente definidos en la ley, y exhortó a Chile a que se abstuviera de aplicar la ley de manera discriminatoria contra los mapuches. El comité también manifestó su preocupación por la práctica de la Corte Suprema de reducir las penas por graves violaciones de derechos humanos cometidas en las décadas de 1970 y 1980.

En *Norín Catrín y otros vs. Chile*, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó en mayo de 2014 que Chile era responsable por la violación de derechos de debido proceso, libertad de pensamiento y expresión, y libertad personal de siete líderes mapuches y un activista que fueron condenados por terrorismo en 2003 y 2004.

Colombia

La población civil de Colombia sigue sufriendo graves abusos cometidos por guerrillas y grupos sucesores de paramilitares. Los últimos surgieron luego de un proceso oficial de desmovilización paramilitar llevado a cabo hace una década. La violencia asociada con el conflicto armado interno en Colombia ha provocado el desplazamiento forzado de más de 5,7 millones de colombianos, y cada año más de 200.000 personas abandonan su hogar, lo cual ha generado la segunda población más grande del mundo de desplazados internos. Es común que defensores de derechos humanos, sindicalistas, periodistas, líderes indígenas y afrocolombianos, y otros activistas comunitarios enfrenten amenazas de muerte y actos de violencia. Si bien el gobierno del Presidente Juan Manuel Santos ha repudiado de forma consistente estos ataques, la falta de investigaciones efectivas implica que los responsables son rara vez arrestados.

El gobierno de Santos sigue promoviendo la adopción de varios proyectos legislativos que limitarían el juzgamiento de asesinatos de civiles perpetrados por militares, incluyendo las ejecuciones que se conocen como “falsos positivos”. Los proyectos legislativos propuestos generarían un grave riesgo de que estas causas se transfieran de la justicia penal ordinaria al sistema de justicia militar, que carece de independencia y tiene un deplorable record en materia de investigaciones sobre violaciones de derechos humanos.

El gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) participan en conversaciones de paz en Cuba desde 2012, y a la fecha de preparación de este informe habían llegado a un acuerdo sobre tres de los seis temas de la agenda de negociación. El 10 de junio, el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la segunda guerrilla más numerosa de Colombia, anunciaron que habían iniciado conversaciones exploratorias de paz.

En marzo, el gobierno destituyó al alcalde de Bogotá, a pesar de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó una medida cautelar jurídicamente vinculante que solicitaba al gobierno que no adoptara esa decisión. El Presidente Santos cumplió posteriormente con una orden de un tribunal colombiano que exigía restituir al alcalde en su cargo.

Abusos de las guerrillas

Es común que las FARC ataquen a civiles. Por ejemplo, en el municipio de Tumaco, en la región sudoeste de Colombia, las FARC fueron responsables de abusos generalizados en 2013 y 2014, incluidos asesinatos, desapariciones, tortura, violencia sexual, desplazamiento forzado, reclutamiento de menores, extorsión y amenazas de muerte contra líderes comunitarios. En un caso de junio, existen evidencias convincentes

de que miembros de las FARC secuestraron, torturaron y asesinaron a Mónica Julieth Pernía, una residente de Tumaco de 25 años.

El ELN también continúa cometiendo graves abusos contra civiles, como asesinatos, secuestros y reclutamiento de menores. El 15 de septiembre de 2014, miembros del ELN le dispararon y mataron a dos trabajadores petroleros que estaban inspeccionando un oleoducto en el municipio de Teorama, en la región nordeste de Colombia.

Las FARC y el ELN continúan usando minas antipersonal. El gobierno informó que 6 civiles murieron y otros 65 sufrieron heridas entre enero y agosto de 2014 a causa de minas antipersonal y municiones sin detonar.

Los paramilitares y sus sucesores

Entre 2003 y 2006, organizaciones paramilitares de derecha que tenían estrechos vínculos con la fuerza pública y con políticos participaron en un proceso oficial de desmovilización que presentó graves falencias y tras el cual numerosos miembros permanecieron activos y se reorganizaron conformando nuevos grupos. Los grupos sucesores de paramilitares, que con frecuencia son liderados por miembros de organizaciones paramilitares desmovilizadas, cometen abusos generalizados, incluidos asesinatos, desapariciones y violencia sexual.

En Buenaventura, una ciudad portuaria en la costa del Pacífico donde la población es mayoritariamente afrocolombiana, grupos sucesores de paramilitares, entre ellos los Urabeños, continúan cometiendo atrocidades, como desapariciones y descuartizamientos. Estos grupos han provocado que Buenaventura presente los índices más altos de desplazamiento forzado en Colombia: más de 33.000 residentes abandonaron sus hogares en 2013, y 22.383 lo hicieron entre enero y el 1 de noviembre de 2014, según datos difundidos por el gobierno en noviembre.

En ocasiones los grupos se han beneficiado de la tolerancia y la connivencia de agentes estatales. En marzo, la Fiscalía ordenó la captura del coronel del Ejército retirado Robinson González del Río, quien habría liderado un red de miembros activos y retirados de la fuerza pública que vendía armas a los Urabeños.

La implementación de la Ley de Justicia y Paz, que ofrece drásticas reducciones en las penas para los paramilitares desmovilizados que confiesen atrocidades, ha sido sumamente lenta. Hasta septiembre de 2014, solamente 37 de los más de 30.000 paramilitares que se desmovilizaron oficialmente habían sido condenados en el marco de la Ley de Justicia y Paz, a nueve años de su promulgación. Las condenas cobijan tan sólo una pequeña proporción de los casi 70.000 delitos confesados por los acusados que reclaman los beneficios de la ley.

Continuaron las investigaciones de la “parapolítica”, que indagan sobre los nexos entre paramilitares y miembros y ex miembros del Congreso. Más de 55 legisladores han sido condenados desde 2006.

El 17 de septiembre de 2014, el Senado colombiano mantuvo un debate sobre presuntos vínculos entre paramilitares y el ex Presidente Álvaro Uribe (2002-2010), quien asumió como senador en 2014.

Abusos cometidos por miembros de la fuerza pública

Durante el gobierno de Uribe, militares colombianos perpetraron numerosas ejecuciones de civiles, especialmente entre 2002 y 2008. En muchos casos —que se conocen comúnmente como “falsos positivos”— soldados y oficiales, bajo presión de superiores para incrementar el número de bajas, asesinaron a civiles y luego informaron que se trataba de combatientes enemigos muertos en enfrentamientos. El número de presuntas ejecuciones ilegales atribuidas a miembros de la fuerza pública se redujo drásticamente a partir de 2009, pero durante 2013 y 2014 se registraron algunos nuevos casos.

El gobierno no mantiene un registro estadístico que clasifique a los casos de “falsos positivos” como una categoría de delitos distinta de otros tipos de ejecuciones ilegales. No obstante, hasta julio de 2014, la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía se encontraba investigando más de 3.500 casos de ejecuciones ilegales presuntamente perpetradas por agentes del Estado entre 2002 y 2008, y había obtenido condenas en 402 casos. La gran mayoría de los 785 miembros del Ejército condenados son soldados de bajo rango y suboficiales. Algunos militares condenados han gozado de privilegios extravagantes en los centros de detención militares.

El ministro de defensa y altos militares han realizado acciones tendientes a desacreditar las investigaciones sobre falsos positivos. En septiembre, luego de que los medios informaron que fiscales habían solicitado que se iniciaran investigaciones sobre nueve generales y ex generales del Ejército por su presunta responsabilidad por casos de falsos positivos, el ministro de defensa indicó que se le estaba asignando un “exceso de atención” al testimonio en el cual los fiscales basaron sus solicitudes. En febrero, el Presidente Santos relevó de su cargo al comandante de las Fuerzas Militares luego de que la revista *Semana* publicara una grabación de audio de 2012, en la cual este aconsejaba a un coronel del Ejército que estaba siendo procesado por falsos positivos que “hagan una mafia” para desacreditar a los fiscales.

En febrero, el titular del servicio de inteligencia del Ejército fue apartado de su cargo luego de que la revista *Semana* revelara que autoridades judiciales habían allanado un establecimiento en Bogotá donde militares de inteligencia presuntamente interceptaban de forma ilegal las comunicaciones de los representantes del gobierno que intervenían en las negociaciones de paz y de otras personas.

Reformas que favorecen la impunidad

En 2013 y 2014, el ministro de defensa presentó tres proyectos legislativos al Congreso que posibilitarían que casos de falsos positivos sean sustraídos de la actuación de los fiscales de la justicia ordinaria y remitidos al sistema de justicia penal militar, que tradicionalmente no ha conseguido que los responsables rindan cuentas por sus

crímenes. Los proyectos prevén que la justicia penal militar también tenga competencia sobre otros tipos de violaciones de derechos humanos cometidas por militares en el pasado o el futuro, además de otros delitos graves, como la connivencia con fines de narcotráfico con paramilitares o bandas criminales. Uno de los proyectos de ley autorizaría a la fuerza pública a usar fuerza letal contra civiles en un espectro peligrosamente amplio de situaciones.

Los proyectos son similares a una reforma constitucional al sistema de justicia penal militar promovida por el gobierno de Santos que el Congreso aprobó en diciembre de 2012, y que la Corte Constitucional invalidó en octubre de 2013 por vicios de procedimiento.

En junio de 2012, el gobierno consiguió que el Congreso aprobara el Marco Jurídico para la Paz, una reforma constitucional que podría permitir la impunidad generalizada de atrocidades cometidas por guerrilleros, paramilitares y militares en caso de que se alcance un acuerdo de paz con las FARC. La reforma habilita al Congreso a limitar el juzgamiento de atrocidades a quienes se identifique como los “máximos responsables” (una categoría que no se define en la reforma) y ofrecer inmunidad legal a todos los demás implicados.

Si bien la reforma también autorizó al Congreso a suspender totalmente las penas de prisión impuestas a todos los guerrilleros, paramilitares y militares condenados por atrocidades, la Corte Constitucional resolvió en agosto de 2013 que no se podía suspender completamente la pena aplicada a los “máximos responsables” de delitos de lesa humanidad. No obstante, la reforma contempla igualmente “penas alternativas”, y en abril el Fiscal General de la Nación propuso que los más altos comandantes de las FARC pudieran recibir una pena alternativa de trabajo comunitario, en lugar de ir a prisión.

Desplazamiento interno y restitución de tierras

Más de 5,7 millones de colombianos han sido desplazados internamente desde 1985, según estadísticas oficiales. El gobierno registró más de 220.000 personas que habían sido desplazadas en 2013.

La implementación por parte del gobierno de la restitución de tierras conforme a la Ley de Víctimas continúa siendo lenta. La ley se promulgó en 2011 para restituir millones de hectáreas de tierra despojada y abandonada a desplazados. Inicialmente, el gobierno estimó que para fines de 2015 se habrían dictado sentencias judiciales en más de 150.000 casos de restitución de tierras en el marco de la Ley de Víctimas.

Sin embargo, hasta septiembre de 2014, el gobierno había obtenido sentencias que ordenaban la restitución de tierras en apenas 1.546 de las casi 68.000 solicitudes recibidas. En septiembre de 2013, el gobierno solamente podía confirmar tres casos de familias que habían regresado a vivir en sus tierras como resultado de sentencias judiciales dictados conforme a la ley. A la fecha de elaboración de este informe, la Unidad de Restitución de Tierras no había brindado datos actualizados sobre la cantidad de familias que habían regresado a vivir en sus tierras como consecuencia de la ley.

Los desplazados internos sufren amenazas y actos de violencia por intentar reclamar sus tierras. En la mayoría de los casos de asesinatos de reclamantes y líderes de restitución de tierras ninguna persona ha sido condenada.

Violencia de género

La violencia de género es un problema generalizado en toda Colombia. La falta de capacitación y la implementación deficiente de protocolos generan obstáculos para las mujeres y niñas que procuran recibir atención luego de hechos de violencia, lo cual lleva a que las víctimas pueden enfrentar demoras en el acceso a servicios médicos básicos. Los responsables de delitos de violencia de género son rara vez llevados ante la justicia.

En junio, el gobierno sancionó una ley para mejorar el acceso a la justicia y la protección para los sobrevivientes de hechos de violencia sexual, especialmente las víctimas que fueron violadas sexualmente o agredidas en el contexto del conflicto armado interno.

Violencia contra defensores de derechos humanos, periodistas y sindicalistas

Defensores de derechos humanos y periodistas continúan siendo objeto de amenazas y ataques. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), una organización no gubernamental (ONG) colombiana que monitorea la situación de la libertad de prensa, informó que 2 periodistas fueron asesinados y 75 recibieron amenazas en 2013, y 58 recibieron amenazas entre enero y septiembre de 2014.

La Escuela Nacional Sindical (ENS), la principal ONG colombiana dedicada a la promoción de los derechos laborales, continúa denunciando asesinatos de sindicalistas. Hasta septiembre de 2014, la subunidad de la Fiscalía dedicada exclusivamente a la violencia contra sindicalistas había iniciado investigaciones en más de 110 casos de asesinatos de sindicalistas cometidos desde 2009, pero había conseguido condenas en apenas 9 casos.

La Procuraduría General de la Nación continuó su investigación disciplinaria contra el Senador Iván Cepeda, un reconocido defensor de víctimas, por haber recabado y presentado ante autoridades judiciales información sobre posibles abusos paramilitares. La investigación, vinculada con las entrevistas efectuadas por el Senador Cepeda a ex paramilitares con respecto a los presuntos vínculos del ex Presidente Uribe con paramilitares, parece carecer de sustento y podría tener un efecto amedrentador para otras personas que exigen justicia por violaciones de derechos humanos.

El Ministerio del Interior administra un programa de protección que alcanza a miles de miembros de grupos vulnerables en riesgo, como defensores de derechos humanos, sindicalistas y periodistas.

Actores internacionales clave

Estados Unidos sigue siendo el actor extranjero con mayor influencia en Colombia. En 2014, aportó cerca de US\$ 225 millones en asistencia militar y policial, y US\$ 165 millones en asistencia humanitaria y para el desarrollo. Una parte de la ayuda militar estadounidense está supeditada al cumplimiento de requisitos en materia de derechos humanos, entre los cuales se incluyen que todas las presuntas violaciones de derechos humanos sean investigadas y juzgadas por autoridades de la justicia penal ordinaria. En septiembre de 2014, el Departamento de Estado certificó que Colombia cumplía estos requisitos, a pesar de que el gobierno siguió impulsando proyectos legislativos que permitirían que delitos por militares que constituyen violaciones de derechos humanos sean conocidos por los tribunales militares, y de la reciente remisión de algunos de estos casos al sistema de justicia militar. El Departamento de Estado justificó su decisión indicando que los casos de violaciones de derechos humanos “en general” se juzgan en la justicia penal ordinaria, aunque el requisito exige que tales delitos estén “únicamente” sujetos a esa jurisdicción.

En agosto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó un extenso informe sobre Colombia, en el cual señaló graves preocupaciones sobre el Marco Jurídico para la Paz y las reformas al sistema de justicia militar, entre otras cuestiones.

La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) continúa realizando un seguimiento de las investigaciones locales de delitos que estarían comprendidos dentro de la competencia de la CPI. En noviembre de 2013, la Fiscalía de la CPI informó que existen motivos para creer que los falsos positivos se cometieron “conforme a una política adoptada al menos a nivel de ciertas brigadas de las fuerzas armadas”, y que continuaría examinando si la política se extendía a funcionarios estatales de mayor rango.

Cuba

En 2010 y 2011, el gobierno de Cuba liberó a decenas de presos políticos a cambio de que aceptaran exiliarse. Desde entonces, el gobierno cubano ha apelado con menos frecuencia a sentencias prolongadas para castigar el disenso, y ha distendido las draconianas restricciones para viajar que dividían a familias e impedían que los críticos del gobierno pudieran salir de la isla y regresar a esta.

No obstante, el gobierno cubano continúa reprimiendo a personas y grupos que critican al gobierno o reivindican derechos humanos fundamentales. Los funcionarios aplican una variedad de tácticas para castigar el disenso e infundir temor entre la población, incluidas golpizas, actos públicos de denigración, despidos y amenazas de largas penas de prisión.

En los últimos años se incrementó dramáticamente la cantidad de detenciones arbitrarias de períodos breves, y estas generalmente impiden que defensores de derechos humanos, periodistas independientes y otras personas puedan reunirse o trasladarse libremente.

Detenciones arbitrarias y encarcelamiento por períodos breves

El gobierno sigue llevando a cabo detenciones arbitrarias para hostigar e intimidar a personas que ejercen sus derechos fundamentales. La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN) —una organización independiente de derechos humanos que el gobierno considera ilegal— recibió más de 7.188 denuncias de detenciones arbitrarias entre enero y agosto de 2014, lo cual representa un drástico incremento en comparación con las cerca de 2.900 recibidas en 2013 y las 1.100 en 2010 durante el mismo período.

Los funcionarios de seguridad casi nunca presentan órdenes judiciales para justificar la detención de críticos, y los amenazan con la posibilidad de ser condenados penalmente si continúan participando en actividades “contrarrevolucionarias”. En algunos casos, los detenidos son liberados tras recibir advertencias oficiales, que luego los fiscales pueden utilizar durante procesos penales posteriores para mostrar que existe un patrón de conducta delictiva. Los disidentes afirman que estas advertencias buscan disuadirlos de participar en actividades que se consideran críticas del gobierno.

A menudo se practican detenciones preventivas para evitar que personas participen en marchas pacíficas o en reuniones para debatir sobre política. Por ejemplo, en los días previos a la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que se desarrolló en La Habana el 28 y 29 de enero de 2014, al menos 40

personas fueron detenidas arbitrariamente, y 5 debieron permanecer bajo arresto domiciliario hasta la conclusión de la conferencia, según la CCDHRN.

Es común que integrantes de las Damas de Blanco —una organización, que el gobierno considera ilegal, fundada por esposas, madres e hijas de presos políticos— sean detenidas antes y después de asistir a la misa de domingo. El 4 de mayo, por ejemplo, más de 80 mujeres fueron detenidas en a lo largo de la isla antes de asistir a misa. El 13 de julio, 129 integrantes de la organización fueron detenidas cuando se preparaban para acudir a ceremonias conmemorativas de los cubanos que perdieron la vida intentando abandonar la isla en 1994.

Es común que los detenidos sufran golpizas, reciban amenazas y permanezcan incomunicados durante horas o incluso días. El ex preso político Guillermo Fariñas, quien fue puesto bajo prisión domiciliaria mientras se llevaba a cabo la conferencia de la CELAC y luego fue arrestado cuando intentó salir de su vivienda, denunció que sufrió la factura de dos costillas y otras lesiones debido a golpizas que recibió mientras estaba detenido. Ylenni Aguilera Santos, una integrante del movimiento Damas de Blanco en Holguín, denunció que sufrió la pérdida de un embarazo a causa de una violenta golpiza propinada por agentes de seguridad tras ser arrestada cuando se dirigía a misa el 22 de junio.

Presos políticos

Los cubanos que critican al gobierno enfrentan la posibilidad de ser perseguidos penalmente. No se les reconocen las garantías de debido proceso, como el derecho a ser oídos públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente e imparcial. En la práctica, los tribunales están “subordinados” a los poderes ejecutivo y legislativo, lo cual impide que exista una independencia judicial genuina. Se niega sistemáticamente la posibilidad de licencia extrapenal a presos políticos que han completado la pena mínima exigida pero se niegan a participar en actividades ideológicas obligatorias, como las clases de “reeducación”.

Todavía hay decenas de presos políticos en las cárceles cubanas, según grupos locales de derechos humanos. Estos grupos estiman que habría más presos políticos, cuyos casos no pueden documentar debido a que el gobierno impide que organizaciones de derechos humanos independientes nacionales o internacionales ingresen a las prisiones. Iván Fernández Depestre, miembro del Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo, fue detenido en julio de 2013 mientras participaba en una protesta pública. Tres días después, fue condenado a tres años de prisión por “peligrosidad” en un proceso sumario que se celebró a puertas cerradas.

Libertad de expresión

El gobierno controla todos los medios de comunicación existentes en Cuba y restringe fuertemente el acceso a información que provenga del extranjero, lo cual restringe gravemente el derecho a la libertad de expresión. Sólo una proporción ínfima de la población cubana tiene posibilidad de leer páginas web y blogs independientes debido

al acceso limitado a Internet y su elevado costo. Si bien personas que viven en ciudades como La Habana, Santiago de Cuba o Santa Clara cuentan con acceso a Internet, aquellas que viven en zonas más rurales no tienen posibilidad de acceder a Internet.

Un decreto gubernamental de mayo de 2013 destinado a ampliar el acceso a Internet dispone que este no podrá ser utilizado para actividades que atenten contra la “seguridad pública, la integridad, la economía, la independencia y la soberanía nacional” de Cuba, condiciones amplias que podrían ser aplicadas contra críticos del gobierno.

Son pocos los periodistas y blogueros independientes que logran escribir artículos para páginas web o blogs, o publicar tuits. Sin embargo, quienes publican información que se considera crítica del gobierno a veces son objeto de campañas de desprestigio, agresiones y detenciones arbitrarias, y lo mismo ocurre con artistas y académicos que exigen mayores libertades.

En mayo de 2014, la bloguera Yoani Sánchez presentó el sitio web 14ymedio, el primer periódico independiente en línea de Cuba. En pocas horas, el sitio web fue objeto de un ataque cibernético, y los lectores fueron redirigidos a una página que contenía críticas feroces contra Sánchez. El sitio fue restablecido al día siguiente, pero fue bloqueado nuevamente varios días después, y desde entonces no puede ser visitado por los usuarios de Internet en Cuba.

En mayo de 2013, Roberto Zurbano, director del instituto cultural estatal Casa de las Américas, publicó un artículo en el New York Times donde denunciaba los persistentes prejuicios y desigualdades en contra de afrocubanos. Posteriormente, Zurbano fue duramente criticado a través de medios controlados por el gobierno y degradado a un cargo de menor jerarquía en el instituto.

Restricciones para viajar y separaciones familiares

Las reformas a las reglamentaciones sobre viajes que entraron en vigor en enero de 2013 eliminan la necesidad de solicitar una visa de salida para viajar fuera de la isla, un requisito que anteriormente había sido utilizado para negar el derecho a viajar a críticos del gobierno y a sus familiares. Desde entonces, muchas personas a quienes anteriormente se les había negado este permiso han podido viajar, incluidos defensores de derechos humanos y blogueros independientes.

Sin embargo, la reforma incluyó facultades discrecionales sumamente amplias que le permiten al gobierno restringir el derecho a viajar por motivos de “defensa y seguridad nacional” u “otras razones de interés público”, lo cual permite que las autoridades impidan la salida de personas que expresen desacuerdos con el gobierno. Por ejemplo, las autoridades le han negado en reiteradas oportunidades a Manuel Cuesta Morúa el derecho a viajar al extranjero, desde que este intentó organizar una cumbre paralela a la conferencia de la CELAC en enero de 2014.

El gobierno además continúa negándole arbitrariamente a cubanos que viven en el extranjero el derecho a visitar la isla. En agosto de 2013, el gobierno cubano le negó a Blanca Reyes, una integrante de las Damas de Blanco que vive exiliada en España, una

autorización para viajar a Cuba a visitar a su padre de 93 años, que se encontraba en un delicado estado de salud y falleció en octubre, antes de que ella pudiera visitarlo.

El gobierno restringe la circulación de ciudadanos dentro de Cuba mediante la aplicación de una ley de 1997 conocida como Decreto 217. Esta norma, diseñada para limitar la migración a La Habana, exige a los cubanos una autorización del gobierno para mudarse a la capital del país. La ley se aplica a menudo para impedir que opositores viajen a La Habana para asistan a mítines, y para perseguir a disidentes originarios de otras regiones de Cuba que residen en la capital.

Condiciones en centros de detención

Las prisiones están sobrepobladas y tienen condiciones antihigiénicas e insalubres, que causan malnutrición y enfermedades generalizadas. Los presos son obligados a trabajar jornadas de 12 horas, y reciben castigos si no cumplen las cuotas de producción preestablecidas, según ex presos políticos. Los presos no cuentan con un mecanismo efectivo que les permita presentar reclamos, y aquellos que critican al gobierno o recurren a huelgas de hambre u otras formas de protesta son encarcelados en soledad durante extensos períodos y golpeados, se les restringen las visitas familiares, y se les niega atención médica.

Si bien el gobierno permitió que miembros elegidos de la prensa extranjera realizaran visitas supervisadas a un puñado de prisiones en abril de 2013, este continúa negando que organizaciones de derechos humanos internacionales y organizaciones cubanas independientes accedan a cárceles.

Defensores de derechos humanos

El gobierno cubano todavía se niega a reconocer la defensa de los derechos humanos como una actividad legítima, y niega estatus legal a organizaciones locales de derechos humanos. A su vez, autoridades gubernamentales hostiguan, agreden y encarcelan a defensores de derechos humanos que intentan documentar abusos.

Actores internacionales clave

El embargo económico aplicado por Estados Unidos a Cuba desde hace más de medio siglo continúa imponiendo privaciones indiscriminadas al pueblo cubano, y no ha contribuido en absoluto a mejorar la situación de derechos humanos en el país. La Asamblea General de la ONU ha instado reiteradamente a que concluya el embargo estadounidense sobre Cuba. En octubre de 2014, 188 de los 192 Estados Miembros votaron a favor de una resolución que condena el embargo.

En 2009, el Presidente de Estados Unidos Barack Obama aprobó reformas destinadas a eliminar las restricciones sobre viajes y envío de remesas de cubano-estadounidenses a Cuba impuestas en 2004 durante la presidencia de George W. Bush. En 2011, el Presidente Obama aplicó sus facultades ejecutivas para moderar las restricciones a viajes de encuentro de tipo “people-to-people”, que permiten que grupos religiosos,

educativos y culturales de Estados Unidos realicen visitas a Cuba. No obstante, en 2012 el gobierno de Obama estableció requisitos adicionales para la autorización de viajes “people-to-people”, que han reducido la frecuencia de tales viajes.

La Unión Europea (UE) mantiene su “posición común” sobre Cuba, adoptada en 1996, que supedita la plena cooperación económica de la UE con Cuba a la transición del país hacia una democracia pluralista y el respeto de los derechos humanos. No obstante, tras una reunión celebrada en abril de 2014 en La Habana, delegados de la Unión Europea y de Cuba acordaron establecer un plan de trabajo para “normalizar” las relaciones. Funcionarios de la UE indicaron que las preocupaciones por las libertades civiles y la participación democrática continuarían incidiendo en la política de la UE con respecto a Cuba.

Durante la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos que tuvo lugar en junio, gobiernos de toda la región pidieron que Cuba asistiera a la próxima Cumbre de las Américas, que se celebrará en 2015 en Panamá.

El ex contratista de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional Alan Gross continúa en prisión a pesar de que en un informe de noviembre de 2012 el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria pidió que se dispusiera su inmediata liberación. Gross fue detenido en Cuba en diciembre de 2009 y luego fue condenado a 15 años de prisión por distribuir equipos de telecomunicaciones a grupos religiosos. El grupo de trabajo indicó que la detención de Gross fue arbitraria y que el gobierno de Cuba no había aportado pruebas suficientes de los delitos que se le imputan.

En noviembre de 2013, Cuba fue reelegida miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, imponiéndose sobre Uruguay para un puesto regional, a pesar de la deficiente situación en materia de derechos humanos y sus continuos esfuerzos por socavar la importante labor del consejo. Como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Cuba votó reiteradamente para que no prosperaran medidas que pudieran permitir el seguimiento de graves situaciones de derechos humanos alrededor del mundo, oponiéndose a las resoluciones que alertaban sobre abusos en Corea del Norte, Siria, Irán, Sri Lanka, Bielorrusia y Ucrania. Sin embargo, Cuba apoyó la emblemática resolución sobre orientación sexual e identidad de género que el consejo adoptó en septiembre de 2014.

Ecuador

El gobierno del Presidente Rafael Correa ha ampliado el control estatal sobre los medios de comunicación y la sociedad civil. Las tácticas aplicadas en 2014 incluyen procesos penales por difamación y sanciones administrativas contra periodistas y medios de comunicación críticos, así como intentos agresivos de desacreditar a defensores de derechos humanos en el país.

En septiembre, miembros de las fuerzas de seguridad emplearon un uso excesivo de la fuerza para dispersar manifestaciones mayormente pacíficas en Quito, sometiendo a manifestantes y transeúntes a graves abusos físicos. El gobierno también ha aplicado una legislación vaga sobre terrorismo para perseguir penalmente a manifestantes y líderes indígenas que han cuestionado proyectos extractivos. En diciembre de 2013, el gobierno clausuró de forma arbitraria una importante organización no gubernamental (ONG) dedicada a la promoción de derechos ambientales y de pueblos indígenas.

El Consejo de la Judicatura, integrado casi totalmente por ex miembros del gobierno de Correa, ha nombrado y destituido a cientos de jueces a través de métodos sumamente cuestionables, lo cual representa una grave amenaza para la independencia judicial.

En octubre, la Corte Constitucional determinó que la Asamblea Nacional podía iniciar un proceso para modificar 16 artículos de la Constitución, incluidas reformas que otorgarían a las Fuerzas Armadas la facultad de participar en operativos de seguridad pública, concederían al gobierno amplias facultades reglamentarias sobre “la comunicación” al considerarla un “servicio público”, y permitirían la reelección indefinida del presidente.

Problemas persistentes incluyen las deficitarias condiciones carcelarias y las limitaciones en el acceso por parte de mujeres y niñas a servicios de salud reproductiva.

Uso excesivo de la fuerza contra manifestantes

En septiembre, la respuesta de las fuerzas de seguridad a manifestaciones mayormente pacíficas en Quito incluyó numerosos casos de uso excesivo de la fuerza y detenciones arbitrarias de manifestantes y transeúntes. Decenas de detenidos sufrieron graves abusos físicos, incluidas violentas golpizas, puntapiés y descargas eléctricas, durante su arresto y detención. Una minoría de los manifestantes estuvo involucrada en actos de violencia durante enfrentamientos con la Policía, que dejaron un saldo de más de 30 oficiales heridos.

Dentro de las 24 horas posteriores a su detención, más de 100 detenidos fueron llevados ante un juez y procesados por delitos como “ataque o resistencia” a la auto-

ridad y “daño a bien ajeno”. Los detenidos no fueron informados de los cargos en su contra antes de las audiencias, y tampoco tuvieron contacto con sus familiares o sus abogados hasta inmediatamente antes de estas.

El gobierno respondió a las denuncias y señalamientos de abusos felicitando públicamente a la Policía Nacional por su rol durante las manifestaciones, amenazando con perseguir legalmente a abogados que denunciaban violaciones de derechos humanos, y cuestionando a medios de comunicación que publicaron información sobre los abusos.

Libertad de expresión

La Ley Orgánica de Comunicación de 2013 le concede al gobierno una amplia potestad para limitar la libertad de expresión. La ley exige que toda la información difundida por los medios sea “verificada” y “precisa”, lo cual facilita la censura, al permitir que el gobierno decida qué información cumple con estos criterios imprescindibles. También prohíbe el “linchamiento mediático”, al cual define como “la difusión de información que [...] sea producida de forma concertada y publicada reiterativamente [...] con el propósito de desprestigiar a una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad pública”. Y la ley prohíbe la censura previa, cuya definición incluye el deber de los medios privados de difundir temas que el gobierno considere de “interés público”. En septiembre de 2014, la Corte Constitucional rechazó varios recursos que cuestionaban la constitucionalidad de artículos clave de la ley.

La Superintendencia de la Información y Comunicación, un organismo gubernamental regulatorio creado por la Ley Orgánica de Comunicación, ha ordenado reiteradas veces que medios de comunicación y periodistas se rectifiquen u ofrezcan una disculpa pública por haber publicado información y opiniones que este organismo consideró falsas. Por ejemplo, en enero, el organismo ordenó que un caricaturista conocido como Bonil “rectificara” una caricatura donde se representaba a policías allanando el domicilio de un periodista que había sido condenado por difamar a Correa. La Superintendencia también dispuso que el periódico El Universo, que había publicado la caricatura, pagara una multa de aproximadamente US\$ 140.000.

El nuevo Código Penal que entró en vigor en agosto de 2014 elimina varias disposiciones sobre difamación, pero mantiene el delito de calumnia, que ha sido utilizado numerosas veces por Correa para acosar a sus críticos.

En enero, la Corte Nacional de Justicia confirmó la condena por injurias contra el asambleísta opositor Cléver Jiménez, el dirigente sindical Carlos Figueroa y el periodista y sindicalista Fernando Villavicencio. Los tres habían solicitado que el fiscal general investigara a Correa por haber presuntamente ordenado la toma armada de un hospital durante un motín policial ocurrido en septiembre de 2010, que fue considerado un intento de golpe de estado por el gobierno. La corte condenó a Jiménez y Villavicencio a 18 meses de prisión, y a Figueroa a 6 meses, y dispuso que los condenados debían ofrecer una disculpa pública al presidente y pagarle una indemnización de aproximadamente US\$ 145.000. Figueroa fue detenido en julio, mientras que Jiménez y Villavicencio permanecían prófugos al momento de la redacción de este documento.

El gobierno de Correa frecuentemente exige a medios privados que transmitan mensajes oficiales en respuesta a informes de noticias u opiniones desfavorables. Por ejemplo, en diciembre de 2013, obligó a estaciones de radio a interrumpir sus programas matutinos de noticias para transmitir un mensaje oficial en respuesta a las declaraciones críticas de la Hermana Elsie Monge, de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos. En el mensaje transmitido se aseveraba que Ecuador no había violado derechos humanos “ni [en] un solo caso”.

Proveedores de servicios en línea han bloqueado videos, imágenes y cuentas que criticaban al gobierno de Correa, luego de que una empresa española reclamara que estos contenidos violaban legislación estadounidense sobre derechos de autor. Si bien las autoridades ecuatorianas han negado estar involucradas, las notificaciones enviadas para solicitar que se quitaran los contenidos indican que la empresa representaba a actores estatales ecuatorianos. En octubre de 2013, YouTube bloqueó el acceso durante varias semanas a un documental que buscaba mostrar la persecución a la comunidad Íntag por su oposición a actividades de minería en la zona. La firma española adujo que el uso de imágenes de la televisión pública ecuatoriana suponía una violación a los derechos de autor.

Independencia judicial

Durante años, la corrupción, la ineficiencia y la influencia política han caracterizado al poder judicial de Ecuador. Con el mandato popular obtenido tras un referéndum efectuado en 2011, el gobierno de Correa inició un drástico proceso de reforma judicial para abordar estos problemas crónicos. No obstante, como parte de este proceso, el Consejo de la Judicatura designó y destituyó a cientos de jueces, incluidos todos los magistrados de la Corte Nacional de Justicia, a través de mecanismos sumamente cuestionables que debilitan la independencia judicial.

Un informe publicado en julio por tres ONG internacionales —la Fundación para el Debido Proceso Legal, Dejusticia y el Instituto de Defensa Legal— documentó la habitual intromisión del poder ejecutivo en las decisiones judiciales, el uso indebido del sistema penal contra quienes cuestionan políticas del gobierno y el uso indebido del sistema de disciplina interno del poder judicial para sancionar a jueces que tomaban decisiones inconsistentes con las políticas del gobierno de Correa.

Acusaciones penales desproporcionadas contra manifestantes

Las disposiciones excesivamente amplias del capítulo sobre “sabotaje y terrorismo” del Código Penal han sido aplicadas reiteradamente por fiscales contra manifestantes. Estas normas se han utilizado para condenar a más de 100 personas por haber participado en protestas presuntamente violentas durante el motín policial de septiembre de 2010.

En marzo de 2014, la estudiante universitaria María Alejandra Cevallos fue condenada a cuatro años de prisión. Cevallos fue una de los numerosos manifestantes acusados de haber ingresado por la fuerza a la sede del canal de televisión pública ese día —

luego de que el gobierno ordenara que todos los demás canales transmitieran su programación— para exigir que se le concediera la posibilidad de hablar al público. Otro estudiante fue condenado a dos años de prisión como cómplice debido a que “con su aplauso... exteriorizaba su acuerdo general con la actuación del colectivo social”.

En abril, tres mujeres que, junto con otras personas, en su mayoría mujeres, participaron en una protesta a las afueras de una cárcel en Quito contra el traslado de reclusos, fueron detenidas y acusadas aplicando las disposiciones sobre sabotaje y terrorismo. Según un parte policial, las manifestantes “le gritaban ‘torturador’ [al ministro del interior] razón por la cual [este] dispuso la inmediata detención de las tres ciudadanas”. Las tres mujeres estuvieron 18 días en prisión, hasta que la fiscalía retiró los cargos.

Defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil

En 2013, el Presidente Correa dictó un decreto ejecutivo extremadamente amplio que le otorga al gobierno la potestad de intervenir en las actividades de las ONGs, incluida la posibilidad de disolver estas organizaciones cuando “afecten la paz pública” o hayan participado en actividades distintas a aquellas identificadas al momento de registrarse ante el gobierno.

En diciembre de 2013, el gobierno disolvió a la Fundación Pachamama, una ONG que durante más de 16 años se había dedicado a la defensa del medio ambiente y los derechos humanos, sobre la base de que varios de sus miembros supuestamente habían participado en una manifestación violenta contra la extracción de petróleo en la región amazónica. Pachamama no fue notificada anticipadamente sobre la disolución, y todas las acciones legales que planteó contra esta resolución fueron rechazadas.

El gobierno ha intentado reiteradamente desacreditar a organizaciones de la sociedad civil, acusándolas de que intentan desestabilizar al gobierno. En abril, Correa acusó a miembros de Yasunidos, una organización de base dedicada a temas ambientales, de ser mentirosos, incoherentes y “tirapiédras”. Yasunidos había reunido más de 700.000 firmas para que se llevara a cabo un referéndum sobre si debía permitirse que continuara la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní en el Amazonas.

Juicios por abusos del pasado

Los esfuerzos para que funcionarios ecuatorianos rindan cuentas por violaciones de derechos humanos cometidas entre 1984 y 2008 siguen avanzando lentamente. En 2014, un tribunal resolvió que las violaciones graves de derechos humanos son imprescriptibles, y el ex comandante de Policía Edgar Vaca, acusado de delitos de lesa humanidad durante la presidencia de León Febres Cordero (1984-1988), fue detenido en Estados Unidos. A la fecha de redacción de este informe, su extradición se encontraba pendiente.

En 2010, se creó una unidad de fiscalía especializada a la cual se encomendó la investigación de 118 casos sobre 456 víctimas (incluidas 68 víctimas de ejecuciones extrajudiciales y 17 de desapariciones forzadas) documentados por una Comisión de la Verdad creada por el gobierno de Correa. Al momento de la preparación de este informe, la fiscalía había formulado cargos en siete casos, incluidos dos en los cuales los presuntos responsables fueron condenados, y uno en el cual resultaron absueltos.

Derechos reproductivos

El derecho a realizar abortos se limita a aquellos casos en que la salud o vida de la mujer esté en riesgo, o cuando el embarazo sea consecuencia de la violación de una “mujer con discapacidad mental”. El temor a ser perseguidas penalmente provoca que algunas mujeres y niñas recurran a abortos ilegales e inseguros, e impide el acceso a servicios de salud y a la atención luego de una violación para víctimas de violencia sexual. El temor a la persecución penal también dificulta la detección y prevención de la violencia sexual y de género. En Ecuador, una de cada cuatro mujeres mayores de 15 años ha sido víctima de violencia sexual, según estadísticas oficiales.

Refugiados

Según las estadísticas oficiales más recientes disponibles, correspondientes a 2013, hay en Ecuador casi 55.000 refugiados registrados, una cantidad superior a la de cualquier otro país de América Latina. La mayoría son ciudadanos colombianos que escapan del conflicto armado.

En septiembre, la Corte Constitucional estableció que varias disposiciones de un decreto presidencial de 2012 que reglamenta los procedimientos de asilo eran inconstitucionales. La corte dispuso que la definición de “refugiado” contenida en el decreto era demasiado acotada y resultaba incompatible con la definición prevista en la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados de 1984. También extendió el plazo para presentar una solicitud de refugio a tres meses a partir del ingreso del solicitante, y estableció garantías adicionales para apelar las decisiones sobre asilo, estableciendo que los refugiados no pueden ser devueltos hasta que un juez haya dictado una decisión definitiva sobre su caso.

No obstante, la sentencia confirmó otras disposiciones problemáticas del decreto, como procedimientos injustos para la determinación sobre qué pedidos de asilo deberían considerarse “manifiestamente infundados”, y facultades excesivamente amplias para revocar la condición de refugiado.

Condiciones en centros de detención

La sobrepoblación y las condiciones deficientes en centros de detención son dos problemas crónicos en Ecuador. Desde 2012, el gobierno ha invertido millones de dólares en la construcción de nuevos centros de detención. Sin embargo, la ubicación remota de estos centros y el carácter estricto y limitado del régimen de visitas dificultan que los internos mantengan contacto con sus familiares. Según ha trascendido,

se habrían practicado inspecciones vaginales y rectales a personas que ingresan a estos centros como visitantes.

Actores internacionales clave

Con el apoyo de miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), Ecuador continuó impulsando una campaña internacional orientada a socavar la independencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en particular de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. El gobierno no participó en audiencias públicas sobre Ecuador convocadas por la comisión, y anunció que no cumpliría con las medidas cautelares ordenadas por esta. En enero, Correa sugirió una vez más que Ecuador podría retirarse del sistema interamericano de derechos humanos.

La Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (United States Agency for International Development, USAID) y la Fundación Konrad Adenauer Stiftung (KAS), vinculada a un partido político alemán, cerraron sus oficinas en Ecuador en septiembre. USAID indicó que esto era “resultado de la decisión del gobierno de Ecuador de prohibir la aprobación de nuevos programas de asistencia de USAID”, mientras que KAS se refirió al “control y la influencia cada vez mayor del gobierno en la labor política que desarrollan fundaciones y ONG”.

Estados Unidos

Estados Unidos tiene una sociedad civil vibrante y muchos de sus derechos fundamentales cuentan con fuertes protecciones constitucionales. Sin embargo, sobre todo en las áreas de justicia penal, inmigración y seguridad nacional, las leyes y prácticas de EE.UU. violan sistemáticamente los derechos. A menudo, los menos capaces de defender sus derechos ante los tribunales o a través de los procesos políticos —las minorías raciales y étnicas, los inmigrantes, los niños, los pobres y los presos— son los más propensos a sufrir abusos.

La muerte a manos de la policía del adolescente desarmado Michael Brown, en agosto de 2014, en Ferguson, Missouri, y la consiguiente represión policial contra los manifestantes, subrayaron la alarmante brecha existente entre el respeto por la igualdad de derechos y el tratamiento que reciben las minorías raciales por parte de las fuerzas del orden. La respuesta represiva de EE.UU. al aumento de migrantes no autorizados que provienen de México y Centroamérica pone de relieve la urgente necesidad de que se lleve a cabo una reforma a la política migratoria de EE.UU.

Políticas nacionales de seguridad de EE.UU., incluyendo los programas de vigilancia masiva, están quebrantando las libertades de prensa, expresión y asociación. Investigaciones y enjuiciamientos discriminatorios e injustos de musulmanes estadounidenses están alienando a las comunidades que EE.UU. afirma querer como aliados en la lucha contra el terrorismo.

Un resumen parcialmente editado de un extenso informe del Senado sobre torturas de la CIA, publicado en diciembre, constituye un primer paso hacia la solución de los graves abusos cometidos en los años posteriores a los ataques del 11 de septiembre de 2001, pero el gobierno de Obama no ha logrado llevar a los responsables de torturas ante la justicia.

Sentencias severas

Después de tres años de un ligero declive en la población carcelaria, a finales del año 2013 las prisiones estatales y federales registraron un aumento del 0,3 por ciento frente al año anterior albergando aproximadamente a 1.574.700 personas. A mediados de 2013, también había 731.200 personas en las cárceles, lo que resulta en un total estimado de 2,3 millones de personas entre rejas, la mayor población carcelaria reportada en el mundo.

Aunque el crimen sigue disminuyendo, las políticas sancionadoras del país continúan impulsando altas tasas de encarcelamiento. Entre los presos estatales, más del 46 por ciento fueron encarcelados por delitos no violentos relacionados con drogas,

propiedad, orden público y otros. En el sistema federal, el 50 por ciento de los presos federales están cumpliendo condena por delitos de drogas.

Entre un 90 y un 95 por ciento de todos los casos penales a nivel estatal y federal se resuelven mediante acuerdos con la fiscalía. Los fiscales amenazan a los acusados con penas mucho mayores si no se declaran culpables y optan por su derecho a un juicio. Entre los acusados federales por delitos de drogas, por ejemplo, los que se niegan a declararse culpables reciben sentencias que son en promedio tres veces mayores que las que reciben las personas que sí accedieron. No es de extrañar que solo un tres por ciento de los acusados federales por delitos de drogas se arriesguen a ir a juicio.

La Comisión Nacional de Sentencias de EE.UU. dio un paso positivo hacia la imposición de condenas por delitos de drogas más justas cuando modificó sus directrices para reducir las sentencias de la gran mayoría de delincuentes federales por temas relacionados con las drogas. Esto afecta a los más de 46.000 presos federales que actualmente cumplen penas innecesariamente largas y que ahora podrían solicitar una reducción.

Por primera vez en tres años, ningún estado cambió sus leyes para abolir la pena de muerte; 18 estados y el Distrito de Columbia no la aplican. El gobernador del estado de Washington, Jay Inslee, anunció en febrero que concedería indultos a cualquier caso de pena de muerte que se le presentara, estableciendo, en efecto, una moratoria.

En el momento de redactarse este informe, 33 personas habían sido ejecutadas en EE.UU. por inyección letal en 2014. Debido a la prohibición de las farmacéuticas europeas de usar sus productos para las ejecuciones, muchos estados del país están utilizando combinaciones experimentales de drogas, mientras se niegan a revelar su composición. Por lo menos cuatro hombres ejecutados en 2014 mostraron signos evidentes de sufrimiento antes de morir.

Las disparidades raciales en la justicia penal

Las disparidades raciales son muy habituales en el sistema de justicia penal de Estados Unidos desde hace mucho tiempo. Los afroamericanos son encarcelados en proporciones seis veces más altas que los blancos, y el tres por ciento de todos los varones afroamericanos están actualmente encarcelados en una prisión estatal o federal. Hay muchas causas que explican las disparidades raciales en la cárcel, incluyendo las prácticas para el combate al narcotráfico. Por ejemplo, los blancos y los afroamericanos cometen delitos de drogas a niveles comparables, pero las tasas de detención, enjuiciamiento y encarcelamiento por estos delitos son enormemente diferentes.

Aunque los afroamericanos representan solo el 13 por ciento de la población de EE.UU., conforman el 31 por ciento de todos los arrestos por drogas, y el 41 por ciento de los presos estatales y el 42 por ciento de los presos federales cumpliendo una sentencia por delitos de drogas. Es casi cuatro veces más probable que los afroamericanos sean arrestados por posesión de marihuana que los blancos.

Las disparidades raciales en la justicia penal contribuyeron a la indignación que estalló en agosto en Ferguson, Missouri, tras la muerte a manos de la policía de Michael

Brown, un joven afroamericano desarmado de 18 años. Mientras las protestas de Ferguson comenzaron como una reacción a ese tiroteo, pusieron en evidencia antiguos problemas entre la comunidad predominantemente afroamericana de Ferguson y su fuerza policial casi completamente blanca. En respuesta a las protestas, las fuerzas del orden en varias ocasiones utilizaron gases lacrimógenos, balas de goma y otras tácticas intimidatorias en aparente violación del derecho de reunión y la libertad de expresión pacífica, e incurrió en un posible uso excesivo de la fuerza.

Reformas en la política de drogas

Desde la década de 1980, EE.UU. ha gastado cientos de miles de millones de dólares en arrestar y encarcelar a delincuentes por casos de drogas en el país. Su fuerte dependencia de leyes penales para el control del tráfico de drogas ha tenido graves costos para los derechos humanos, incluyendo la violación a la autonomía y a la privacidad de los que simplemente poseen o consumen drogas.

En 2014, los votantes de Oregón y Alaska aprobaron medidas para legalizar la producción, venta, distribución y consumo de la marihuana con fines recreativos, sumándose a Colorado y el estado de Washington. El Distrito de Columbia también despenalizó la posesión de pequeñas cantidades de marihuana para consumo personal. Nueva York, Maryland y Minnesota se unieron a otros 20 estados y el Distrito de Columbia en la legalización de la marihuana con fines médicos.

Condiciones penitenciarias

Presionados por litigios y la presión pública, algunos estados y gobiernos locales de EE.UU. están reevaluando sus políticas de aislamiento. Ohio acordó disminuir y, en última instancia, poner fin a la utilización del régimen de aislamiento en sus centros de menores. Los funcionarios penitenciarios de Nueva York acordaron desarrollar nuevas y estrictas directrices, limitando el uso del aislamiento como castigo excepto para las infracciones más graves y eliminando el uso del régimen de aislamiento para los presos menores de 18 años. En California, un tribunal federal ordenó que las prisiones modificaran sus políticas sobre el uso del aislamiento como castigo para los presos con enfermedades mentales. No obstante, muchos presos y reclusos —niños incluidos— siguen detenidos en duras condiciones de constante aislamiento e inactividad, a menudo durante meses o incluso años.

Pobreza y justicia penal

Muchos acusados con escasos recursos económicos languidecen en prisiones preventivas, en gran medida porque son demasiado pobres para pagar los costos, cada vez más altos, de la fianza. Las tasas legales y de monitoreo extremadamente altas son cada vez más comunes, ya que condados y municipios con problemas de liquidez a menudo esperan que sus tribunales se financien por sí mismos o incluso recurren a ellos como fuente de ingresos públicos. El impacto sobre los acusados pobres es particularmente grave.

En 2014, Human Rights Watch informó sobre abusos generalizados vinculados a la privatización de los servicios de libertad condicional por delitos menores en varios estados del país. Operando bajo un modelo donde el acusado es el que paga, las empresas de libertad condicional les cobran directamente a los inculcados por sus servicios y pueden asegurar su arresto si no pagan. Las tarifas están estructuradas de manera que penalizan a los pobres, y hay una falta general de supervisión gubernamental y de un sistema adecuado de rendición de cuentas.

En abril, el gobernador de Georgia, Nathan Deal, vetó un proyecto de ley que habría protegido a las empresas de libertad condicional del escrutinio público. Es probable que la legislatura de Georgia retome la cuestión en 2015 y tenga una oportunidad para introducir mecanismos de supervisión y rendición de cuentas muy necesarios que podrían ser un modelo para otros estados.

La juventud en el sistema de justicia penal

En todas las jurisdicciones de EE.UU. está permitido que los niños menores de 18 años sean juzgados como adultos y, en determinadas circunstancias, sentenciados a penas de prisión de adultos. A finales de 2013 había 1.200 niños detenidos en centros penitenciarios estatales para adultos. Florida es el estado que detuvo a un mayor número de menores en centros para adultos, en parte como resultado de su política que concede a los fiscales discreción procesal sobre el enjuiciamiento de menores en tribunales para adultos. Otros 14 estados también permiten que los fiscales refieran, por lo menos en algunos casos, a los menores a tribunales para adultos para su procesamiento sin revisión judicial.

Los estados continúan lidiando con una decisión de la Corte Suprema de EE.UU. que prohíbe las sentencias de cadena perpetua obligatoria sin posibilidad de libertad condicional para los delincuentes juveniles condenados por homicidios. Si bien la mayoría de los estados del país considera que el fallo de la Corte Suprema es retroactivo, en julio la Corte Suprema de Michigan determinó que la decisión no se aplica a los jóvenes que ya están cumpliendo condenas de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Los derechos de los inmigrantes

Desde octubre de 2013 hasta septiembre de 2014, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. detuvo a 68.541 niños no acompañados procedentes de América Central y México, y a 68.445 inmigrantes no autorizados en unidades familiares cerca de la frontera entre EE.UU. y México. Estas cifras representan un incremento del 77 por ciento y del 361 por ciento, respectivamente, respecto al año anterior. En respuesta, el gobierno de Barack Obama aumentó drásticamente las detenciones de familias no autorizadas y las deportaciones expeditas. En octubre, Human Rights Watch documentó cómo los migrantes centroamericanos que habían huido a EE.UU. temiendo por sus vidas fueron deportados sin suficiente oportunidad para buscar protección.

El gobierno abrió en junio el primero de los tres nuevos centros de detención familiar dedicados principalmente a facilitar y procesar la deportación de madres y niños de

Centroamérica. Muchas familias detenidas buscan asilo. Sin embargo, incluso cuando EE.UU. determina que tienen un temor creíble de regresar a sus países, les deniega la libertad bajo fianza, argumentando categóricamente que constituyen una amenaza de “seguridad nacional” sin llevar a cabo evaluaciones de riesgo individualizadas.

Las iniciativas de ley para regularizar el estatus legal de millones de inmigrantes no autorizados en EE.UU. se hundieron en 2014. El gobierno de Obama anunció en noviembre una acción ejecutiva para proveer estatus legal temporal a más de cuatro millones de inmigrantes no autorizados que no tuvieran determinadas condenas penales, que hubieran vivido en EE.UU. durante cinco años o más y que tuvieran hijos con nacionalidad estadounidense o residencia permanente. Estas políticas probablemente protegerán a millones de familias de la amenaza de la separación arbitraria. Sin embargo, no alterarán las políticas fronterizas que dan lugar a deportaciones sumarias y sanciones penales de personas con lazos profundos en EE.UU.

En 2014, más de 166 jurisdicciones locales dieron instrucciones a la policía para que no cumpliera con algunas peticiones de las autoridades federales para detener a inmigrantes no autorizados por razones de estatus migratorio, bajo un programa conocido como “Comunidades Seguras”. La acción ejecutiva de noviembre del presidente Obama limita esa colaboración federal-local en asuntos de inmigración, reconociendo que había exacerbado la desconfianza en la policía.

Derechos de los trabajadores

Cientos de miles de niños trabajan en granjas agrícolas de Estados Unidos. La Ley de Normas Laborales Justas de 1938 exige a los niños trabajadores agrícolas de los requisitos de edad mínima y la jornada laboral máxima que protegen a todos los demás niños trabajadores. Los trabajadores agrícolas menores de edad a menudo trabajan diez o más horas diarias y corren el riesgo de intoxicación por pesticidas, enfermedades producidas por el calor y lesiones.

El trabajo infantil es común en las plantaciones de tabaco de EE.UU., el cuarto mayor productor de tabaco del mundo. Los niños que trabajan en las plantaciones de tabaco sufren vómitos, dolores de cabeza y otros síntomas asociados con la intoxicación aguda por nicotina.

El Congreso no ha cerrado un vacío legal que permite que los niños lleven a cabo tareas peligrosas en la agricultura cuando tienen 16 años; el trabajo peligroso está prohibido en todos los demás sectores laborales hasta los 18 años. Las leyes y los reglamentos estadounidenses no incluyen disposiciones especiales para proteger a los niños que trabajan en las plantaciones de tabaco de la exposición a la nicotina.

Política de salud

Los veteranos de las fuerzas militares de EE.UU. se enfrentan a barreras sistémicas para acceder a la atención sanitaria, incluyendo largas demoras para obtener una atención adecuada en los centros de salud del Departamento de los Asuntos de Veteranos (VA, por sus siglas en inglés).

Decenas de miles de veteranos no reciben ningún tipo de ayuda para prevenir sobredosis, tratar la dependencia de opiáceos y acabar con la indigencia crónica. El Congreso de Estados Unidos aprobó en agosto de 2014 la Ley de Acceso de los Veteranos a la Atención Sanitaria a través de la Elección, Rendición de Cuentas y Transparencia, para mejorar y ampliar el acceso de los veteranos a los servicios médicos.

Treinta y cuatro estados tienen leyes penales que castigan a las personas seropositivas por exponer a otras personas al virus VIH. En junio, Iowa se convirtió en el primero en modificar (pero no derogar completamente) su estatuto de criminalización.

Los derechos de la mujer y las niñas

En junio, la Corte Suprema de Estados Unidos falló en el caso de Burwell contra Hobby Lobby Stores, Inc. para que ciertas corporaciones con fines de lucro pueden negarse a cubrir los métodos anticonceptivos en los planes de seguro de salud de sus empleados, basándose en las opiniones religiosas del dueño de la empresa de que la vida comienza en la concepción. Más de dos tercios de los adultos estadounidenses con empleo menores de 65 años obtienen su seguro de salud a través de un empleador.

Mientras que en 2014 las legislaturas estatales promulgaron menos regulaciones dirigidas contra los prestadores de servicios de aborto, el impacto del aumento en las restricciones impuestas entre 2011 y 2013 se hizo más visible. En Texas, el número de clínicas de aborto se ha reducido casi a la mitad desde 2011, con más posibles cierres en función del resultado de los litigios sobre los onerosos requisitos para los proveedores y las instalaciones de abortos aprobados en 2013.

Una de cada cinco mujeres es agredida sexualmente en la universidad, según un informe de 2010 elaborado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. El gobierno de Obama estableció en enero el Grupo de Trabajo de la Casa Blanca para Proteger a los Estudiantes de la Agresión Sexual, que publicó su primer conjunto de recomendaciones en abril. Mientras tanto, víctimas de violación en las universidades de todo el país continuaron sacando a la luz cómo las escuelas y la policía local gestionaron mal sus casos.

La policía de Memphis, Detroit y Cleveland analizaron exámenes forenses (kits de violación) que habían estado almacenados durante años. Los resultados de las pruebas condujeron al descubrimiento de decenas de violadores en serie y decenas de acusaciones formales. Los retrasos pusieron en evidencia el problema más amplio de que la policía no investiga adecuadamente las agresiones sexuales.

Después de que una investigación de Human Rights Watch revelara el manejo inadecuado de los casos de agresión sexual por parte del Departamento de Policía Metropolitana en Washington, DC, el Consejo del Distrito de Columbia aprobó una ley que establece una supervisión independiente de la policía y permite que las víctimas tengan a un abogado presente durante los interrogatorios policiales.

Orientación sexual e identidad de género

En el momento de redactarse este informe, las parejas del mismo sexo pueden contraer matrimonio en 35 estados, el Distrito de Columbia y la ciudad de St. Louis. La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó en octubre de 2014 revisar la decisión de tres tribunales federales que revocaron las prohibiciones de contraer matrimonio homosexual en cinco estados, y desde entonces se ha negado a intervenir en casos semejantes.

El presidente Obama firmó una orden ejecutiva en junio de 2014 que prohíbe la discriminación laboral por motivos de orientación sexual o identidad de género por parte de empresas que se benefician de contratos federales, y proscribe la discriminación por identidad de género para los empleados federales. En respuesta a una decisión de la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo de 2012, en agosto el Departamento de Trabajo de EE.UU. anunció planes de emitir nuevas directrices que dejaran claro que la discriminación sobre la base de la condición de persona transgénero está prohibida bajo la actual definición de la discriminación por razón de sexo en el Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964.

Sin embargo, la amplia interpretación de la Corte Suprema de EE.UU. de la exclusión religiosa en el caso Hobby Lobby podría sentar un precedente que socavaría las protecciones para la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (LGBT) por motivos religiosos.

Doce estados del país conservan leyes de sodomía. Desde abril de 2013, los legisladores de Montana y Virginia han derogado las leyes de sodomía de sus estados. El poder legislativo de Louisiana votó a favor de mantener la ley del estado en abril de 2014.

Seguridad nacional

EE.UU. mantuvo detenidos indefinidamente en Guantánamo a hombres sin cargos ni juicio por decimotercer año; en el momento de redactarse este informe, 143 detenidos seguían en la prisión. El gobierno de Obama reanudó las transferencias de Guantánamo en agosto de 2013, después de un largo paréntesis, y hasta finales de ese año envió a 11 detenidos a sus países de origen u otros países. A finales de 2013, el Congreso añadió nuevas disposiciones a la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA, por sus siglas en inglés) que otorgaban al gobierno una mayor flexibilidad para realizar traslados. Sin embargo, desde el cambio, el ritmo de las transferencias de Guantánamo no ha cambiado significativamente; en el momento de escribirse este informe, el gobierno solo había trasladado a 12 detenidos de Guantánamo durante 2014.

El Departamento de Defensa continuó alimentando a la fuerza a los detenidos de Guantánamo en huelga de hambre, utilizando métodos que siguen clasificados, y ha dejado de informar sobre el número de huelgas de hambre en curso. Los escasos detalles revelados plantean serias preocupaciones de que esta alimentación forzada viole la ética médica y los estándares de cuidado, y constituyan malos tratos bajo el derecho internacional. Un tribunal federal ordenó la desclasificación de los videos de la alimentación forzada de un detenido, pero se negó a emitir una orden

judicial para modificar los procedimientos de dicha alimentación. En el momento de redactarse este informe, EE.UU. estaba considerando apelar la decisión sobre la difusión de los videos.

El gobierno de Obama continuó tramitando casos ante las comisiones militares de Guantánamo. Este sistema no protege las comunicaciones entre abogado y cliente, permite la introducción de pruebas obtenidas mediante coacción y utiliza reglas que impiden que los abogados defensores tengan acceso a información esencial para el caso, tales como el tratamiento que recibieron sus clientes mientras se encontraban bajo custodia secreta de la CIA.

EE.UU. llevó a las comisiones un nuevo caso contra un detenido acusado de delitos relacionados con los ataques a las tropas estadounidenses en Afganistán, entre otras acusaciones. Otros dos casos pendientes, incluyendo uno contra cinco hombres acusados de planear los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, siguieron languideciendo en audiencias previas al juicio. Es probable que haya que esperar varios años para que se concrete una fecha para el juicio.

Human Rights Watch publicó en julio un informe que documenta abusivas investigaciones antiterroristas contra musulmanes estadounidenses a menudo vulnerables, como personas indigentes o con discapacidad intelectual y mental, cuya mera participación en cualquier actividad terrorista habría sido improbable de no ser por la intervención del gobierno. El gobierno también recurrió al uso de cargos de apoyo material demasiado amplios, tácticas procesales que pueden violar los derechos a un juicio justo y duras condiciones de reclusión.

EE.UU. siguió llevando a cabo operaciones de asesinatos selectivos en Afganistán, Pakistán, Yemen y Somalia, pretendiendo cumplir con las directrices de política del gobierno anunciadas en 2013, bajo las que los objetivos de los ataques deben suponer una continua e inminente amenaza para EE.UU. y debe haber una certeza casi absoluta de que ningún civil saldrá herido.

Una investigación de Human Rights Watch de un ataque en diciembre de 2013 contra un cortejo nupcial en Yemen, que mató a 12 personas e hirió a por lo menos otras 15, descubrió que muchos, si no todos, los fallecidos eran civiles, en contra de las directrices y en aparente violación de las leyes de la guerra. El gobierno yemení habría pagado más de US\$1 millón en total a las familias de las víctimas del ataque. Apparentemente también se hicieron pagos a los familiares de un clérigo anti-Al-Qaeda que murió como consecuencia de un ataque estadounidense con aviones no tripulados (drone) en 2013.

La política y la práctica de EE.UU. de los asesinatos selectivos se mantuvieron rodeadas de secretismo. En respuesta a un caso judicial, la administración se vio obligada a revelar un memorando del Departamento de Justicia, parcialmente editado, que presentaba el fundamento legal para un ataque que mató a un ciudadano estadounidense en Yemen en 2011. Sin embargo, el gobierno no ha hecho públicos los memorandos legales que justifican los asesinatos selectivos en otros contextos.

El Comité de Inteligencia del Senado de Estados Unidos publicó en diciembre un sumario ejecutivo de 499 páginas, que ha sido parcialmente editado, a partir de un informe de 6.700 páginas sobre el programa de detención e interrogatorios de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés). El informe muestra que las técnicas de interrogatorio utilizadas por la CIA fueron mucho más brutales y generalizadas de lo que se informó anteriormente, incluyendo formas previamente no declaradas de tortura y agresión sexual como “la rehidratación rectal”. El informe también encontró que las técnicas de interrogatorio utilizadas por la CIA no resultaron eficaces para conseguir información útil o valiosa, que la CIA mintió reiteradamente sobre el programa y que durante años trató de encubrir sus crímenes. EE.UU. aún no ha enjuiciado a los funcionarios estadounidenses encargados de autorizar y llevar a cabo la tortura y otros malos tratos de detenidos bajo custodia estadounidense desde el 11 de septiembre.

Documentos filtrados a la prensa por el ex contratista de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés) Edward Snowden siguieron revelando nuevos detalles sobre los programas estadounidenses de vigilancia. En el último año, informes basados en los documentos de Snowden muestran que EE.UU. podría estar obteniendo a diario millones de mensajes de texto en todo el mundo, interceptando todas las llamadas y metadatos telefónicos en las Bahamas y Afganistán y recopilando todos los metadatos telefónicos en México, Kenia y Filipinas. Una noticia de julio aseguraba que varios destacados líderes musulmanes estadounidenses, entre ellos el jefe de un grupo musulmán de libertades civiles, fueron blanco de la vigilancia electrónica.

El 17 de enero de 2014, el presidente Obama anunció nuevas medidas para restringir el uso, la conservación y la difusión de datos personales recopilados por los servicios de inteligencia en la Directiva Presidencial Política 28. Sin embargo, estas medidas no fueron suficientes para asegurar que la interferencia en la vida privada se limitaba a lo que era necesario y proporcionado, y dejaban abierta la posibilidad de la recopilación a gran escala. Asimismo, si bien las medidas pretendían adaptar la normativa en materia de vigilancia de las personas no estadounidenses (extranjeros fuera de EE.UU.) para que se ajustara más a la que rige los datos recogidos sobre estadounidenses, las reglas son imprecisas y no crean derechos justiciables.

El Comité de Derechos Humanos de la ONU pidió en marzo a EE.UU. que garantizara que sus actividades de vigilancia respeten los derechos de privacidad en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, independientemente de la nacionalidad o la ubicación de las personas vigiladas. También expresó su preocupación por la falta de transparencia en las leyes y resoluciones judiciales de EE.UU. relativas a la vigilancia.

Human Rights Watch publicó en julio un informe que documenta cómo la vigilancia estadounidense a gran escala está obstaculizando el trabajo de periodistas y abogados, ya que hace que proteger a las fuentes resulte más difícil y obliga a los periodistas a llegar a verdaderos extremos para evitar la detección: desde el uso de sistemas de encriptación a teléfonos de prepago, pasando por evitar toda comunicación electrónica. Como resultado, mucha menos información sobre asuntos de interés público llega a ser revelada públicamente.

También en julio, el senador Patrick Leahy introdujo una nueva versión de la Ley de Libertad de EE.UU. que habría limitado algunas formas de vigilancia dentro del país, dado que se hace casi nada para salvaguardar la privacidad de los extranjeros fuera de EE.UU. Sin embargo, no logró avanzar en el Senado.

Política exterior de EE.UU.

En agosto, EE.UU. lanzó ataques aéreos en Irak contra el grupo extremista Estado Islámico (también conocido como ISIS), como parte de una coalición liderada por EE.UU. que incluye cinco países árabes; en septiembre, EE.UU. expandió los ataques aéreos contra ISIS y otro grupo extremista, Jabhat al-Nusra, a Siria. El presidente Obama también anunció que estaba desplegando más tropas militares estadounidenses en Irak y aumentando la asistencia militar a los grupos armados que se oponen al gobierno de Assad en Siria.

Tras los polémicos resultados de las elecciones presidenciales en Afganistán en abril y agosto, el secretario de Estado estadounidense, John Kerry, ayudó a negociar un acuerdo de reparto del poder en Afganistán. Las tropas estadounidenses se prepararon para retirarse de Afganistán a finales de año, dejando a unos 10.000 oficiales para capacitar, asesorar y ayudar a las fuerzas de seguridad afganas. EE.UU. firmó en octubre un Acuerdo de Seguridad Bilateral con el nuevo gobierno de Afganistán.

Tras el derrocamiento en febrero del presidente ucraniano, Viktor Yanukovich, y la violencia que se desató después, EE.UU. impuso sanciones contra los sectores financiero, energético y de defensa de Rusia.

En junio y septiembre, el gobierno de Obama anunció una prohibición estadounidense a la producción y adquisición de minas terrestres antipersonales y a su uso fuera de la península de Corea, medidas que le permiten ceñirse mejor al Tratado de Prohibición de Minas.

En agosto, EE.UU. acogió a 45 jefes de Estado africanos en la primera Cumbre entre Estados Unidos y África. Las discusiones se centraron en el desarrollo económico, la gobernanza y la seguridad.

Guatemala

El ex líder guatemalteco Efraín Ríos Montt fue condenado en mayo de 2013 por genocidio y crímenes de lesa humanidad. Se trata de la primera condena por genocidio a un jefe de Estado en los tribunales nacionales. Sin embargo, la sentencia fue anulada por razones procesales pocos días después, y está previsto que comience un nuevo juicio a inicios de 2015.

El Ministerio Público también ha conseguido avances en otros casos importantes de derechos humanos, aunque la impunidad sigue siendo generalizada. En mayo, la entonces Fiscal General Claudia Paz y Paz, reconocida por los adelantos conseguidos en la reforma del sistema procesal penal del país, fue apartada de su cargo por la Corte de Constitucionalidad siete meses antes de que concluyera su mandato.

El mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que con el respaldo de Naciones Unidas apoya desde 2007 los esfuerzos para investigar y juzgar la delincuencia organizada, concluirá en septiembre de 2015. El Presidente Otto Pérez Molina ha señalado que este será el último período de la comisión.

Juicios por atrocidades del pasado

En una decisión emblemática, en mayo de 2013 el ex jefe de Estado Efraín Ríos Montt fue condenado a 80 años de prisión por los delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad. El general retirado encabezó el régimen militar que gobernó el país de 1982 a 1983 y cometió cientos de masacres contra civiles desarmados. La sentencia fue revocada varios días después por la Corte de Constitucionalidad. Está previsto que comience un nuevo juicio a principios de 2015.

En abril de 2014, la jueza que condenó inicialmente a Ríos Montt por genocidio fue suspendida y multada por un tribunal de ética por una supuesta falta de profesionalidad, lo cual fue calificado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala como un grave avasallamiento de la independencia judicial. Posteriormente fue restituida en el cargo.

En mayo, el Congreso de Guatemala aprobó una resolución que niega que se hayan cometido actos de genocidio durante la guerra civil en el país, apesar de que una comisión de la verdad respaldada por la ONU llegó a conclusiones contrarias en 1999. El Presidente Otto Pérez Molina había expresado anteriormente su apoyo a una carta pública firmada por un grupo de políticos, en la cual se calificaba de “fabricación jurídica” a la imputación de genocidio contra ex militares .

Ríos Montt también ha sido imputado en otra causa sobre la masacre de 300 hombres, mujeres y niños en la localidad de Dos Erres en 1982. El juicio se encuentra paralizado a la espera de que se resuelva un recurso de apelación interpuesto por la defensa, que ha cuestionado la independencia de la jueza que interviene en la causa.

En julio, Felipe Solano Barillas se convirtió en el primer ex guerrillero en ser condenado en relación con atrocidades cometidas durante la guerra civil en el país. Tras ser declarado culpable por ordenar la masacre de 22 residentes de la aldea de El Aguacate en 1988, se le ha impuesto una pena de 90 años de prisión.

En junio, el coronel Esteelmer Reyes y el comisionado militar Heriberto Valdez fueron arrestados en relación con actos de violencia sexual perpetrados en 1982 contra 15 mujeres q'eqchi' en la comunidad de Sepur Zarco.

En junio, tres ex miembros de la Policía Nacional fueron arrestados en conexión con el homicidio de la renombrada activista de derechos humanos Myrna Mack, quien fue asesinada en 1990 por su rol en la documentación de abusos cometidos durante la guerra civil del país.

Seguridad pública y sistema de justicia penal

Poderosas organizaciones delictivas cometen actos generalizados de violencia y extorsión. La extendida corrupción del sistema judicial, combinada por hechos de intimidación y procedimientos ineficientes, contribuye a que existan altos niveles de impunidad. Frustradas por la falta de aplicación de las leyes penales, algunas comunidades han recurrido a la justicia por mano propia. Según datos del Procurador de los Derechos Humanos, 49 personas murieron durante linchamientos en 2013, lo que equivale a más del doble que en 2012.

A pesar de estos problemas, los fiscales han hecho progresos en casos de delitos violentos, torturas, ejecuciones extrajudiciales y corrupción, en gran parte debido al trabajo realizado por la ex Fiscal General Claudia Paz y Paz, así como al apoyo de la CICIG.

En febrero, nueve miembros del cartel los Zetas fueron condenados por la masacre de 27 campesinos durante una disputa por rutas de narcotráfico en la región de Petén. Los miembros de esta organización fueron condenados a un total de más de 100 años en prisión.

En septiembre, el ex militar Byron Lima Oliva, encarcelado desde 2006 por su participación en el asesinato del obispo Juan José Gerardi en 1998, fue imputado por dirigir una red criminal desde la prisión. Al menos otras siete personas fueron implicadas en la causa, incluido el director del sistema penitenciario nacional, Sergio Camargo. La investigación fue iniciada en 2013 por la CICIG, en colaboración con el Ministerio Público.

Los avances para enjuiciar a responsables de graves abusos han sido socavados por las maniobras dilatorias de abogados defensores, incluidos el uso abusivo del recurso de amparo, logrando la postergación de los juicios durante meses o incluso años.

Intervención de militares en operativos de seguridad pública

El gobierno continúa utilizando militares para lidiar con desafíos en materia de seguridad pública, a pesar del largo historial de abusos de derechos humanos de esta fuerza. Actualmente hay más de 20.000 soldados desplegados a lo largo del país.

En mayo, el gobierno anunció la creación de una nueva fuerza de tareas interinstitucional encargada de brindar seguridad contra el narcotráfico y otros delitos relacionados en todo el territorio guatemalteco. Esta fuerza se conoce con la sigla FIAAT, y cuenta con militares entre sus integrantes.

Ataques contra defensores de derechos humanos, periodistas y sindicalistas

Los ataques y las amenazas contra defensores de derechos humanos son habituales y obstruyen significativamente el trabajo sobre derechos humanos en el país. Los actos de violencia e intimidación contra sindicalistas atacan contra la libertad de reunión y asociación, y contra el derecho de sindicación y negociación colectiva. Según datos de la Confederación Sindical Internacional, 53 sindicalistas fueron asesinados entre 2007 y 2013.

Algunos periodistas, especialmente aquellos que investigan hechos de corrupción y narcotráfico, también enfrentan amenazas, ataques e intimidaciones a través de acciones legales. En noviembre de 2013, el Presidente Otto Pérez Molina y la Vicepresidenta Roxanna Baldetti demandaron a José Rubén Zamora, editor de El Periódico, luego de que este medio publicara artículos sobre la presunta vinculación entre el gobierno y la delincuencia organizada. En febrero, un juez prohibió la salida del país de Zamora mientras se encontrara en curso la investigación de estas denuncias. El presidente posteriormente desistió de los cargos, y la vicepresidenta señaló que haría lo mismo, pero hasta el momento de la preparación de este informe no lo había hecho.

En abril, el partido de oposición guatemalteco LIDER demandó a la revista Contra-Poder, luego de que esta informara equivocadamente que ciertas cartas de apoyo enviadas al líder de la oposición no eran genuinas. La organización ha sido objeto de acciones penales, a pesar de que la revista efectuó una retractación pública y ofreció una disculpa.

Actores internacionales clave

La CICIG, creada en 2007 con respaldo de la ONU, desempeña un rol clave en la asistencia al sistema judicial de Guatemala en el juzgamiento de delitos violentos, trabajando en colaboración con el Ministerio Público, la Policía y otros organismos gubernamentales para investigar, perseguir penalmente y desarticular a organizaciones delictivas que operan en el país. La CICIG puede participar en los procedimientos penales como querellante adhesivo, brindar asistencia técnica y promover reformas legislativas.

Iván Velásquez Gómez, un destacado jurista colombiano, fue nombrado al frente de la CICIG tras la renuncia de su titular anterior. Velásquez fue anteriormente magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia de Colombia y desempeñó un rol de liderazgo en la investigación de vínculos entre políticos y paramilitares en ese país.

Sin embargo, el mandato de la CICIG concluirá en septiembre de 2015, y el Presidente Pérez Molina ha señalado que este no será renovado por un período adicional.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos tiene una oficina en Guatemala desde 2005. Esta se ocupa de supervisar la situación de los derechos humanos en el país y brinda apoyo al gobierno y la sociedad civil en materia de políticas públicas.

En junio, la justicia suiza condenó al ex director de la Policía Nacional por su rol en la planificación del asesinato extrajudicial de internos en las cárceles de El Pavón y El Infiernito en 2005 y 2006. Fue condenado a prisión perpetua.

A pesar de la reciente restricción a la jurisdicción universal en los tribunales españoles, el Juez Santiago Pedraz ha señalado que seguirá adelante con las investigaciones de ocho funcionarios guatemaltecos implicados en violaciones de derechos humanos durante la guerra civil en el país.

Estados Unidos continúa limitando la asistencia militar prestada a Guatemala, por motivos de derechos humanos. La Ley Consolidada de Asignaciones de Estados Unidos (Consolidated Appropriations Act) de 2014 exige al gobierno guatemalteco adoptar “medidas creíbles” para implementar el plan de reparación para las comunidades afectadas por la construcción de la planta hidroeléctrica Chixoy, asegurar que el rol del Ejército se limite a combatir amenazas externas, y apoyar la investigación y la persecución penal de militares implicados en atrocidades cometidas en el pasado, como condición para el pleno restablecimiento de la asistencia.

Guinea Ecuatorial

La corrupción, la pobreza y la represión continúan asolando a Guinea Ecuatorial bajo el liderazgo del presidente Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, que ha presidido el país desde 1979. Los enormes ingresos procedentes del petróleo financian los fastuosos estilos de vida de la pequeña élite que rodea al presidente, mientras que una gran parte de la población sigue viviendo en la pobreza. Persisten problemas como la mala gestión de los fondos públicos y las denuncias verosímiles de corrupción de alto nivel, así como otros abusos graves, como la tortura, los arrestos arbitrarios, la detención secreta y los juicios injustos.

A lo largo del año, el presidente Obiang hizo importantes donaciones a organizaciones internacionales, contrató a empresas de relaciones públicas, viajó por todo el mundo para visitar a los líderes de otros países y auspició eventos internacionales con la intención de mejorar su imagen. Sus esfuerzos dieron algunos resultados: el Secretario General de las Naciones Unidas y otros dignatarios hicieron visitas oficiales durante la Cumbre de la Unión Africana, celebrada en junio, y una asociación de países de habla portuguesa aceptó en julio la candidatura de Guinea Ecuatorial para su adhesión, algo que el país había tratado de conseguir durante una década.

El hijo mayor y posible sucesor de Obiang, Teodorín, fue condenado formalmente en Francia en marzo por cargos de lavado de dinero derivados de una prolongada investigación, mientras que Estados Unidos accedió a resolver su reclamación de confiscación contra Teodorín en octubre, en un caso independiente, que produjo miles de páginas de evidencia de presunta corrupción, extorsión y lavado de dinero. Para pagar el acuerdo judicial de US\$30 millones, Teodorín tuvo que vender su mansión de Malibú y otros activos estadounidenses. El Departamento de Justicia de EE.UU. dijo que los bienes incautados se utilizarían para beneficio de la población de Guinea Ecuatorial.

Derechos sociales y económicos

Guinea Ecuatorial figura entre los cinco mayores productores de petróleo del África Subsahariana y tiene una población de aproximadamente 700.000 personas. El Banco Mundial lo clasifica como un país de altos ingresos. De acuerdo con el Informe de 2014 sobre Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, el país tiene un Producto Interno Bruto per cápita de US\$37.478,85, el mayor en la clasificación de riqueza de cualquier país de África y uno de los más altos del mundo, sin embargo, ocupa el puesto 144 de 187 países en el Índice de Desarrollo Humano, que mide el desarrollo social y económico. Como consecuencia, Guinea Ecuatorial tiene, de lejos, la mayor brecha de todos los países entre su riqueza per cápita y su índice de desarrollo humano.

A pesar de la abundante riqueza en recursos naturales del país y la obligación del gobierno de avanzar en la mejora de los derechos económicos y sociales de sus ciudadanos, una parte muy pequeña de esta riqueza ha sido dirigida a satisfacer sus necesidades. Alrededor de la mitad de la población carece de acceso a agua potable o instalaciones básicas de saneamiento, según estadísticas oficiales de 2012. La desnutrición infantil, entendida como el porcentaje de niños cuyo crecimiento se ha visto atrofiado, se encuentra en un nivel del 35 por ciento, según el Fondo de las Naciones para la Infancia (UNICEF). Una gran parte de la población también carece de acceso a atención sanitaria de calidad, escuelas o un suministro fiable de electricidad. Las tasas netas de matriculación en la enseñanza primaria eran de apenas un 61 por ciento en 2012. A pesar de sus enormes recursos, Guinea Ecuatorial tiene unas tasas de vacunación muy bajas, incluyendo la peor tasa de vacunación contra la polio del mundo (39 por ciento), según la Organización Mundial de la Salud. A mediados de 2014 se confirmaron cinco casos de polio, lo que provocó una campaña de vacunación tardía.

Las estadísticas del gobierno no son confiables y éste hace pocos esfuerzos por llevar a cabo un seguimiento fiable de indicadores básicos. Las organizaciones internacionales a menudo tienen que hacer sus estimaciones basándose en modelos informáticos porque solo tienen información limitada. Según estos modelos, Guinea Ecuatorial ha reducido sus tasas de mortalidad materna en un 81 por ciento desde 1990 y ha cumplido una meta de los Objetivos de Desarrollo del Milenio antes de lo previsto.

El gobierno no publica información básica sobre presupuestos ni gastos, y los ciudadanos y los periodistas carecen de la libertad para monitorear de manera eficaz el uso de la riqueza de recursos naturales del país. En agosto, el gobierno confirmó que trataría de volver a aplicar una iniciativa de transparencia internacional sobre pagos procedentes del petróleo, gas y minería de la que fue expulsado en 2010. Un requisito clave de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas es que los gobiernos dialoguen abiertamente con los activistas sobre la gestión de los recursos naturales del país, sin intimidación ni represalias, y garanticen un “entorno propicio” para su plena participación.

Libertad de expresión y asociación

Guinea Ecuatorial ha tenido durante mucho tiempo un pobre historial en materia de libertad de prensa. En enero, funcionarios de seguridad detuvieron a dos periodistas del Financial Times durante varias horas y confiscaron sus computadoras, cuadernos de notas y equipos de grabación, material que no les fue devuelto. Los periodistas pudieron recuperar sus pasaportes y teléfonos móviles, para luego salir del país antes de lo previsto.

Los periodistas locales siguen sin poder criticar al gobierno ni abordar temas que las autoridades no aprueban sin riesgo de censura o represalias. En el país existen muy pocos medios de comunicación privados y son generalmente propiedad de personas cercanas al presidente Obiang; la autocensura también es común. Solamente la pequeña minoría con acceso a transmisiones vía satélite e Internet tiene acceso a las noticias internacionales; los demás solo tienen acceso a una programación limitada de radio.

Las libertades de asociación y reunión están severamente restringidas en Guinea Ecuatorial, lo que limita en gran medida el espacio para los grupos independientes. El gobierno impone condiciones restrictivas al registro y operación de los grupos no gubernamentales. El país carece de grupos independientes de derechos humanos legalmente registrados. Los pocos activistas locales que tratan de abordar cuestiones relacionadas a los derechos humanos son blanco de intimidación, acoso y represalias.

Partidos políticos y la oposición

El Partido Democrático (PDGE) que está en el poder mantiene un monopolio sobre la vida política del país. Todos menos dos partidos políticos reconocidos oficialmente están alineados con el partido gobernante. El Parlamento bicameral de Guinea Ecuatorial, con un total de 175 asientos, solo cuenta con un representante de la oposición en cada cámara. El presidente Obiang nombró a 20 senadores, cinco más de lo permitido bajo la Constitución de 2011.

Los miembros de la oposición política son blanco de detenciones arbitrarias, intimidación y acoso. En julio, Santiago Martín Engono Esono, líder de la sección juvenil de la Convergencia para la Democracia Social (CPDS), fue detenido arbitrariamente y encarcelado durante cinco días en Bata, la segunda ciudad más grande del país.

En agosto, el presidente Obiang anunció que un diálogo político nacional previsto para noviembre incluiría por primera vez a líderes de la oposición exiliados. En preparación para este diálogo, el presidente Obiang declaró en octubre una amnistía política general para los representantes de la oposición en el exilio, pero no la extendió a los presos políticos encarcelados por presuntos delitos contra la seguridad nacional. En parte por esta razón, tres partidos políticos, incluido el único de la oposición con representación en el Parlamento, se retiraron del diálogo y lo declararon un fracaso.

Las elecciones presidenciales están programadas para el año 2016, pero se especula que puedan adelantarse a 2015. Las elecciones legislativas nacionales de 2013 estuvieron marcadas por graves violaciones a los derechos humanos y la denegación de las libertades fundamentales, incluyendo detenciones y restricciones arbitrarias a la libertad de reunión.

Tortura, detenciones arbitrarias y juicios injustos

En Guinea Ecuatorial, los derechos de debido proceso son ignorados de forma rutinaria y el maltrato a los prisioneros sigue siendo común. La tortura sigue vigente, a pesar de los desmentidos del gobierno. Muchos detenidos están recluidos indefinidamente sin conocer los cargos que pesan en su contra. Algunos se encuentran en detención secreta. Las deplorables condiciones en las prisiones y cárceles son potencialmente mortales.

El presidente Obiang ejerce un control excesivo sobre el poder judicial, que carece de independencia. El presidente es designado como “primer magistrado” de la nación. Entre otras facultades, preside el organismo que supervisa a los jueces y nombra a los miembros restantes del cuerpo.

En febrero de 2014, el gobierno de Obiang anunció una moratoria temporal sobre la pena de muerte. La Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP) admitió la membresía de Guinea Ecuatorial sobre esta base, creyendo que era un primer paso hacia la eliminación de la pena de muerte. Pero solo dos semanas antes de anunciarla, el gobierno ejecutó hasta a nueve personas que habían sido condenadas a muerte. En julio, el presidente Obiang afirmó en una entrevista que seguía estando a favor de la pena de muerte.

Agustín Esono Nsogo, un profesor que permaneció detenido sin cargos durante más de un año, fue puesto en libertad en febrero de 2014. Según su abogado, Esono fue torturado en tres ocasiones con el fin de hacerle confesar un presunto complot para desestabilizar el país. Se le negó la atención médica para sus heridas.

Cipriano Nguema Mba, un ex oficial del ejército al que le fue concedida la condición de refugiado en Bélgica en 2013, fue secuestrado cuando estaba de visita en Nigeria a finales de 2013 y fue devuelto ilegalmente a Guinea Ecuatorial, donde las autoridades gubernamentales lo mantuvieron en detención secreta y lo torturaron.

Esta es la segunda vez que Nguema fue secuestrado mientras se encontraba exiliado en el extranjero. En ambas ocasiones, las autoridades reconocieron tardíamente que se encontraba bajo su custodia y afirmaron que lo descubrieron en el interior del país y que lo habían encarcelado para que cumpliera una sentencia anterior. A raíz de un nuevo juicio, en septiembre de 2014, Nguema fue condenado por un presunto intento de golpe de estado y sentenciado a 27 años de prisión. Sus abogados no pudieron visitarlo ni representarlo durante el juicio. Otras cinco personas presuntamente vinculadas a Nguema también fueron juzgadas sin representación legal, condenadas y sentenciadas a duras penas de cárcel.

Durante 2014, Roberto Berardi, de nacionalidad italiana, fue torturado y recluido durante meses en régimen de aislamiento en condiciones inhumanas. En repetidas ocasiones le fue negado el tratamiento médico y el acceso a su abogado o representantes diplomáticos. Según su familia, durante varios días en septiembre no le dieron de comer ni beber después de que la embajadora de Guinea Ecuatorial en Italia lo visitara en la prisión. Supuestamente, durante la visita la funcionaria reprendió a Berardi por una carta abierta que éste publicó desde la cárcel. Berardi está encarcelado en un aparente intento por proteger a su socio de negocios, Teodorín, de la revelación de acusaciones de corrupción. El presidente Obiang no liberó a Berardi por razones humanitarias, tal como había prometido en abril ante la presión internacional. En el momento de redactarse este informe, seguía en prisión.

Principales actores internacionales

EE.UU. es el principal socio comercial de Guinea Ecuatorial y una fuente de inversión en su sector petrolero. Esto planteó preocupaciones de derechos humanos durante todo el año. En agosto, Obiang participó junto con decenas de otros líderes en la Cumbre EE.UU.-África organizada por el presidente estadounidense, Barack Obama. Esto desató una polémica mediática sobre por qué se le concedió el permiso para asistir a pesar de su pobre historial en materia de derechos humanos y corrupción.

Durante su estancia en Washington, Obiang fue también el invitado de honor durante una cena y conferencia organizada por el Consejo Corporativo sobre África.

España, la antigua potencia colonial, ejerció presión sobre Guinea Ecuatorial para que mejore su historial de derechos humanos. En junio, el presidente Mariano Rajoy asistió a la Cumbre de la Unión Africana, a las afueras de Malabo, en lo que fue la primera visita de un presidente del gobierno español desde 1991. A principios de año Rajoy se había negado a una reunión bilateral con Obiang.

Durante 2014, Irina Bokova, directora general de la Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura de las Naciones Unidas (UNESCO), viajó dos veces a Guinea Ecuatorial. Una de ellas fue para asistir a una ceremonia en septiembre organizada por el presidente Obiang para otorgar un premio que financió él mismo y que quiso que llevara su nombre. Previamente, ella había intentado bloquear la aprobación de la UNESCO para el polémico premio.

Guinea Ecuatorial se sometió a un segundo ciclo del Examen Periódico Universal de la ONU en Ginebra y recibió muchas recomendaciones sobre la tortura, la detención arbitraria, el estado de derecho, la libertad de asociación, la libertad de prensa, la corrupción y los derechos sociales y económicos. El gobierno aceptó la mayoría de estas recomendaciones y rechazó muy pocas. Sin embargo, las expectativas de que esto se tradujera en cambios positivos sobre el terreno eran escasas, ya que el gobierno aún no ha llevado a cabo los cambios prometidos tras un examen anterior de la ONU.

Haití

El gobierno de Haití y la comunidad internacional consiguieron avances limitados durante 2014 en el abordaje del devastador impacto de los desastres naturales y la letal epidemia de cólera que afectaron recientemente al país. Los impasses políticos, la falta de recursos y la debilidad de las instituciones gubernamentales continuaron entorpeciendo los esfuerzos del gobierno de Haití por satisfacer las necesidades básicas de su pueblo y abordar problemas de derechos humanos de larga data, como la violencia contra mujeres y las condiciones carcelarias inhumanas.

Por cuarto año consecutivo, Haití no celebró las elecciones previstas por su constitución, lo cual agravó el deterioro del entorno político. El mandato de otro tercio de los senadores y varios diputados debía concluir a comienzos de 2015, lo cual deja a casi todos los cargos electivos nacionales y locales del país vacantes o a cargo de personas designadas (salvo un tercio restante de los senadores y el presidente).

En junio, 103.565 desplazados internos vivían en campamentos instalados tras el terremoto de 2010, según la Organización Internacional para las Migraciones, lo cual representa una reducción de más del 90 por ciento desde 2010. Las Naciones Unidas estiman que cerca de 70.000 de los desplazados internos que aún quedan no tienen posibilidades de conseguir una solución duradera.

La epidemia de cólera se ha cobrado más de 8.500 vidas y ha infectado a más de 700.000 personas en cuatro años. Sin embargo, en 2014 se observó un descenso significativo de la cantidad de posibles casos de cólera y una reducción drástica del número de muertes, que fue de 51 hasta septiembre, en comparación con las más de 4.100 muertes ocurridas en los tres primeros meses de 2010.

Sistema de justicia penal y condiciones de detención

El sistema penitenciario de Haití sigue gravemente sobrepoblado, en gran parte debido a la alta proporción de arrestos arbitrarios y de detenciones preventivas prolongadas.

La capacidad insuficiente de la Policía Nacional de Haití (PNH) contribuye a la inseguridad general en el país. Si bien el gobierno y la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), que es la misión de mantenimiento de la paz de la ONU en el país, han promovido la reforma policial como una de sus prioridades, han existido dificultades para capacitar a un número suficiente de cadetes ingresantes. El informe más reciente del Secretario General de la ONU sobre MINUSTAH estimó que, a fines de 2014, la tasa de policías con respecto a población probablemente equivaldría a la mitad de la cantidad mínima recomendada.

Juicios por abusos del pasado

El ex Presidente Jean-Claude Duvalier regresó a Haití en enero de 2011 luego de casi 25 años en el exilio. Fue acusado de violar crímenes financieros y de derechos humanos presuntamente cometidos durante los 15 años que ocupó la presidencia. Entre 1971 y 1986, Duvalier comandó una red de fuerzas de seguridad que cometió graves violaciones de derechos humanos, incluidas detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones, ejecuciones sumarias y exilios forzados.

En 2012, en una decisión contraria a los estándares internacionales, el juez de investigación a cargo de la causa determinó que las normas sobre prescripción impedían que Duvalier fuera perseguido penalmente por violaciones de derechos humanos. Un tribunal de apelación hizo lugar a un recurso contra la sentencia en 2013, y Duvalier debió comparecer ante el tribunal y responder preguntas formuladas por este y por abogados de las víctimas. En una sentencia histórica dictada el 20 de febrero, el Tribunal de Apelación de Puerto Príncipe determinó que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles y dispuso que se llevaran a cabo investigaciones adicionales sobre los cargos contra Duvalier. Sin embargo, Duvalier falleció el 4 de octubre sin haber sido llevado a juicio por sus crímenes. A la fecha de redacción de este informe, continuaba pendiente una investigación sobre delitos cometidos por colaboradores de Duvalier.

Violencia contra mujeres

La violencia de género es un problema generalizado. Miembros del parlamento han discutido un proyecto de ley sobre violencia contra la mujer que permitiría adecuar el Código Penal de Haití a los estándares internacionales, pero el proyecto no ha sido oficialmente sometido a debate.

Un consejo de asesores presidenciales está revisando dos proyectos de reforma del Código Penal de Haití que contemplan actos de violencia de género, como la violación y la agresión sexual, que no están actualmente incluidos en el código, y se espera que se presente una versión consensuada al parlamento a comienzos de 2015.

Trabajo doméstico infantil

Persiste el empleo de menores en el servicio doméstico, conocidos como *restavèks*. Los *restavèks*, en su mayoría niñas, son enviados desde hogares de bajos ingresos a convivir con familias de mayor nivel económico con la esperanza de que sean cuidados y escolarizados a cambio de realizar tareas domésticas livianas.

Si bien los cálculos son complicados, algunos estiman que 225.000 niños trabajan como *restavèks*. A menudo, estos menores trabajan de forma gratuita, no tienen acceso a educación, y son abusados física o sexualmente. El código laboral de Haití no establece una edad mínima para el empleo en el servicio doméstico, aunque la edad mínima para trabajar en empresas industriales, agrícolas y comerciales es de 15 años. La mayoría de los casos de trata de personas en Haití involucran a *restavèks*. En

mayo, Haití promulgó una legislación que prohíbe muchas formas de trata, incluido el alojamiento de menores con fines de explotación.

Defensores de derechos humanos

Los defensores de derechos humanos continúan enfrentando amenazas de violencia. Malya Vilard Apolon, una de las fundadoras de la organización de defensa de derechos de la mujer Komisyon Fanm Viktim Pou Viktim (KOFVIV), viajó al exterior en marzo tras sufrir reiterados acosos y amenazas de muerte y que los perros de su familia fueran envenenados. Marie Eramithe Delva, otra de las fundadoras de KOFVIV, denunció en mayo a la policía que había recibido amenazas de muerte a través de mensajes de texto enviados de parte de una mujer que se encontraba bajo custodia policial, y proporcionó capturas de pantalla donde se podían ver los mensajes con amenazas y el número telefónico. No tiene conocimiento de que se hayan investigado sus denuncias, y no ha recibido protección policial, debido a lo cual en junio ella también viajó fuera del país.

En febrero, Daniel Dorsinvil, coordinador general de la Plataforma de Organizaciones Haitianas de Derechos Humanos (POHDH), y su esposa Girdy Lareche fueron asesinados mientras caminaban en un barrio de Puerto Príncipe, cerca de la sede de POHDH. En los días posteriores a los homicidios, funcionarios gubernamentales aseveraron que el delito se había producido en el contexto de un robo armado, y que no estaba vinculado con las actividades de derechos humanos desarrolladas por Dorsinvil ni con su crítica al gobierno. Esta aseveración no estaba basada en una investigación exhaustiva, según representantes de la sociedad civil local.

Pierre Espérance, director ejecutivo de Réseau National de Défense des Droits Humains (RNDDH), recibió una amenaza de muerte en abril, en la cual se lo acusaba de formular denuncias falsas de derechos humanos a fin de desestabilizar al gobierno. La nota manuscrita que contenía la amenaza estaba acompañada por una bala y el mensaje “esta vez no te escaparás”, en alusión a un incidente ocurrido en 1999 en el cual Espérance recibió disparos pero sobrevivió.

Actores internacionales clave

La misión de la ONU, MINUSTAH, tiene presencia en Haití desde 2004 y ha contribuido a esfuerzos para mejorar la seguridad pública, proteger a grupos vulnerables y fortalecer las instituciones democráticas del país. El Consejo de Seguridad de la ONU prorrogó el mandato de la MINUSTAH hasta el 15 de octubre de 2015.

Existen crecientes evidencias de que la epidemia de cólera que comenzó en octubre de 2010 probablemente haya sido introducida por fuerzas de paz de la ONU. Un miembro del Panel de Expertos de la ONU sobre el brote de cólera indicó que “la fuente más probable de introducción del cólera en Haití fue alguien afectado con la cepa de cólera de Nepal y vinculado al campamento Mirebalais de Naciones Unidas”.

En respuesta al rechazo por parte de la ONU de los reclamos de indemnización planteados por 5.000 víctimas de la epidemia, el Instituto de Justicia y Democracia

en Haití y el Bureau des Avocats Internationaux, que representan a las víctimas, interpusieron una demanda en la justicia estadounidense. Al momento de la redacción de este informe, se encontraba pendiente una solicitud para que se desestime la demanda. Hasta la fecha, no ha existido una determinación independiente sobre los hechos relativos a la introducción del cólera y la responsabilidad de la ONU.

Según cifras de la Oficina de Servicios de Supervisión Interna de la ONU, se han formulado al menos 93 denuncias de abuso o explotación sexual contra personal de la MINUSTAH en los últimos ocho años, incluidas 11 presentadas durante 2014, hasta el 30 de septiembre.

En febrero, el experto independiente de la ONU sobre Haití, Gustavo Gallón, instó a adoptar un “tratamiento de choque” para reducir significativamente la cantidad de personas en prisión preventiva.

En mayo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó a todos los estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) a poner a disposición sus archivos y documentos oficiales sobre violaciones a los derechos humanos cometidas bajo el régimen de Duvalier para que pudieran ser utilizados como evidencia en la investigación. Se desconocía si los estados miembros de la OEA habían cumplido con el pedido de la comisión.

Honduras

Existen en Honduras gravísimos índices de criminalidad e impunidad de violaciones de derechos humanos. En 2014, el índice de homicidios fue, una vez más, el más alto a nivel mundial. La respuesta de las instituciones a cargo de la seguridad pública sigue siendo en gran medida ineficaz y sigue estando signada por hechos de corrupción y abusos, mientras que las iniciativas que procuran reformar estas fuerzas sólo han logrado avances menores.

Los periodistas y los activistas campesinos son particularmente vulnerables a la violencia, pero el gobierno por lo general no juzga a los responsables ni brinda protección a quienes se encuentran en riesgo.

Tras despedir arbitrariamente de su cargo a cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia en diciembre de 2012, el Congreso sancionó una ley que habilita a este poder a destituir a jueces y al fiscal general, una medida que profundiza el debilitamiento de la independencia judicial y fiscal.

Abusos y corrupción policial

El uso ilegítimo de la fuerza por parte de la policía constituye un problema crónico. Entre 2011 y 2012, 149 personas murieron a manos de policías, según un informe de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. El entonces Comisionado de Policía Nacional Preventiva Alex Villanueva confirmó las conclusiones del informe e indicó que posiblemente haya habido muchos más asesinatos cometidos por policías que nunca fueron denunciados. El gobierno no respondió a reclamos del rector de la Universidad Nacional Autónoma de que informara cuántos de estos asesinatos habían sido investigados o tuvieron como resultado la imposición de condenas.

Los esfuerzos para abordar la corrupción endémica en la Policía sólo han conseguido avances menores. Si bien se han utilizado pruebas diseñadas para detectar corrupción para evaluar a más de 4.500 policías, apenas una fracción de quienes no superaron la prueba han sido apartados de su cargo. Según la Comisión de Reforma a la Seguridad Pública, la institución que anteriormente se ocupaba de diseñar las reformas de organismos judiciales y de seguridad pública, sólo el 3 por ciento de los 230 funcionarios cuyo despido se recomendó en 2012 fueron finalmente separados de su cargo.

Intervención de militares en operativos de seguridad pública

En noviembre de 2011, el Congreso aprobó un decreto de emergencia que permitió que militares llevaran a cabo funciones de seguridad pública, y que se ha prorrogado periódicamente. En agosto de 2013, se aprobó una ley que autorizó la creación de una

policía militar con atribuciones para controlar barrios violentos y efectuar detenciones, entre otras funciones, a pesar de los antecedentes de abusos de militares contra civiles. Esta Policía Militar entró en actividad en enero de 2014.

En agosto, soldados detuvieron a Marco Medrano Lemus cerca de su casa en La Lima, Cortés. Según medios de prensa locales, Medrano fue hallado muerto poco después, y una autopsia reveló que presentaba signos de haber sido torturado. Ocho soldados fueron arrestados en relación con el incidente, y las investigaciones continuaban al momento de redacción de este informe.

Justicia por los abusos posteriores al golpe

Luego del golpe militar de junio de 2009, el gobierno de facto suspendió libertades civiles clave, como la libertad de prensa y de reunión. En los días siguientes, las fuerzas de seguridad respondieron a manifestaciones mayormente pacíficas con un uso excesivo de la fuerza y clausuraron medios opositores, lo cual derivó en varias muertes, numerosos heridos y miles de detenciones arbitrarias. La comisión de la verdad establecida por el entonces Presidente Porfirio Lobo publicó en julio de 2011 un informe que documentó 20 casos de uso excesivo de la fuerza y asesinatos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad.

En agosto de 2014, el ex militar José Arnulfo Jiménez fue condenado a cinco años de prisión por la clausura arbitraria del Canal 36, en junio de 2009. Jiménez había liderado el contingente que ocupó la sede del medio, impidiendo que este transmitiera durante varios días. A la fecha de preparación de este informe, se habían producido escasos avances en el juzgamiento de otros abusos cometidos durante el período posterior al golpe de estado.

Independencia judicial

Es común que jueces sufran actos de intimidación e interferencia política. En diciembre de 2012, el Congreso destituyó a cuatro de los cinco magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, luego de que dictaran la inconstitucionalidad de una ley dirigida a abordar la corrupción policial. En enero de 2013 se designaron los reemplazantes, y al mes siguiente la nueva composición de la Corte desestimó un recurso interpuesto por los magistrados destituidos. Desde su destitución, los ex magistrados denuncian haber sufrido reiterados actos de intimidación, incluidas amenazas de muerte y acoso policial.

A través de una reforma constitucional de 2011, se creó el Consejo de la Judicatura, un órgano con potestades para designar y destituir jueces. Según la Comisión Internacional de Juristas, el proceso de selección de los miembros del consejo no contó con garantías que impidan la interferencia política, y ha estado marcado por irregularidades, como la exclusión de representantes de una de las dos asociaciones judiciales hondureñas. Más de 40 jueces han sido suspendidos desde que el consejo comenzó su labor.

Ataques contra periodistas

Periodistas en Honduras siguen sufriendo amenazas, agresiones y asesinatos. Las autoridades no investigan ni juzgan estos delitos. Según el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), más de 30 periodistas han sido asesinados desde 2009, aunque el móvil de muchos de estos casos no ha sido esclarecido.

En diciembre de 2013, el periodista de Globo TV Juan Carlos Argeñal Medina fue asesinado a tiros en la ciudad de Danlí, El Progreso, luego de haber recibido amenazas de muerte vinculadas con su investigación sobre corrupción en un hospital local. En el pasado, Globo TV había sufrido una serie de ataques violentos tras su cobertura crítica del golpe de 2009.

Violencia rural

Más de 90 personas han sido asesinadas en los últimos años en relación con controversias por tierras en la región del Bajo Aguán, la mayoría de ellas a partir de 2009, según un informe publicado en marzo de 2013 por el CONADEH. Muchas otras personas han sido víctimas de ataques y amenazas. Las controversias a menudo enfrentan a empresas agroindustriales internacionales y organizaciones campesinas que reclaman ser legítimas propietarias de tierras transferidas tras una reforma de la ley agraria del país. Si bien la mayoría de las víctimas han sido campesinos, también guardias de seguridad privada fueron asesinados o sufrieron lesiones.

Las autoridades hondureñas no han investigado eficazmente los abusos ni previsto protección para quienes están en riesgo. La investigación de Human Rights Watch de 29 casos de homicidios y dos secuestros ocurridos en el Bajo Aguán concluyó que ninguno de estos casos había sido perseguido penalmente de forma exitosa.

Condiciones en centros de detención

Las condiciones inhumanas, incluidas la sobrepoblación, la alimentación inadecuada y la salubridad deficiente, son sistemáticas en las prisiones hondureñas. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en agosto de 2013 había más de 13.000 presos en las cárceles del país, que tienen capacidad máxima para aproximadamente 8.600 presos. La corrupción es generalizada entre los funcionarios penitenciarios.

Defensores de derechos humanos

Los defensores de derechos humanos continúan sufriendo hechos de violencia, amenazas y asesinatos. En mayo, José Guadalupe Ruelas, director de Casa Alianza, una organización internacional benéfica que trabaja por la niñez y que ha criticado a autoridades por la desprotección de niños frente a la delincuencia organizada, fue detenido arbitrariamente y sometido a una violenta golpiza por miembros de la Policía Militar. Ruelas fue puesto en libertad al día siguiente, luego de que organizaciones locales de derechos humanos intervinieran en representación suya.

En agosto de 2013 el gobierno de Lobo presentó un proyecto legislativo ante el Congreso para proteger a defensores de derechos humanos, periodistas y profesionales del derecho, pero hasta la fecha de preparación de este informe la ley no había sido aprobada.

Violencia contra menores

Los niños estén expuestos a altos niveles de violencia, perpetrada mayormente por pandillas y otras formas de delincuencia organizada. En mayo, cinco adolescentes presuntamente vinculados con la Mara Salvatrucha fueron asesinados en el Centro Pedagógico de Rehabilitación El Carmen aparentemente por miembros de pandillas rivales. Según el CONADEH, 458 niños fueron asesinados entre 2010 y 2013. Casa Alianza informa que en los primeros cuatro meses de 2014 270 personas de menos de 23 años fueron asesinadas.

Es probable que la violencia de pandillas haya contribuido al importante aumento de la migración de jóvenes hacia Estados Unidos en los últimos años. Un informe de 2014 del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados determinó que el 34 por ciento de los menores migrantes provenientes de Honduras identificaron la violencia como uno de los motivos por los cuales se fueron de su país.

Actores internacionales clave

Estados Unidos destinó más de US\$ 50 millones de asistencia en materia de seguridad en Honduras entre 2010 y 2014, y mantiene esta ayuda a través de la Iniciativa Regional de Seguridad para América Central (Central America Regional Security Initiative, CARSI). La normativa estadounidense que prevé la ayuda militar y policial a Honduras estipula que el 35 por ciento de los fondos estarán disponibles sólo si el gobierno hondureño satisface varios requisitos importantes de derechos humanos. Hasta febrero de 2013, el Congreso estadounidense estaría reteniendo cerca de US\$ 30 millones de asistencia debido a preocupaciones en materia de derechos humanos.

En febrero de 2013, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la utilización de mercenarios expresó que el gobierno no había regulado adecuadamente a las empresas de seguridad privada y manifestó preocupación ante su presunto “involucramiento en violaciones de derechos humanos... incluidos asesinatos, desapariciones, desalojos forzados y violencia sexual”.

En enero de 2014, el Ombudsman de la Corporación Financiera Internacional (IFC), el organismo de préstamo al sector privado del Banco Mundial, determinó que la IFC no había aplicado correctamente mecanismos de debida diligencia ni evaluado y respondido a riesgos conocidos de violencia y desalojos forzados asociados con su inversión en Dinant, una empresa dedicada a la producción de aceite de palma y alimentos que tuvo un rol protagónico en una serie de sucesos violentos y asesinatos en Honduras.

En agosto, el ombudsman también concluyó que la IFC no había identificado ni abordado suficientemente los riesgos asociados con su inversión en Banco Ficohsa, la entidad bancaria más grande de Honduras. Dinant fue uno de los prestatarios más importantes del Banco Ficohsa.

En 2014, el primer año completo en que Hassan Rouhani ocupó la presidencia, no se vio ninguna mejora significativa en materia de derechos humanos. Los elementos represivos dentro de las fuerzas de seguridad e inteligencia y el poder judicial conservaron amplios poderes y continuaron siendo los principales perpetradores de los abusos contra los derechos. Las ejecuciones, especialmente por delitos relacionados con las drogas, continuaron a un ritmo elevado. Las fuerzas de seguridad e inteligencia arrestaron a periodistas, blogueros y activistas de medios sociales, y los tribunales revolucionarios los condenaron a penas severas.

Pena de muerte

Según medios de comunicación iraníes, hasta octubre de 2014, las autoridades habían ejecutado al menos a 200 presos, pero fuentes de la oposición aseguran que llevaron a cabo sin anunciar otras 400 ejecuciones. Algunas ejecuciones fueron públicas.

Según la legislación iraní, muchos delitos pueden ser castigados con la muerte, incluso algunos que no implican violencia, como “insultar al Profeta”, la apostasía, las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, el adulterio y los delitos relacionados con drogas. La mayoría de los prisioneros que fueron ejecutados en 2014 eran delincuentes que habían sido condenados por delitos de drogas tras juicios injustos en tribunales revolucionarios. El 24 de noviembre, el Tribunal Supremo confirmó una sentencia de un tribunal penal que condenaba a muerte a Soheil Arabi por los mensajes que publicó en Facebook y que fueron interpretados como “insultos al Profeta”.

Según fuentes no oficiales, al menos ocho presos ejecutados podrían haber sido delincuentes menores de 18 años en el momento en que cometieron los delitos de asesinato o violación por los que fueron condenados a la pena de muerte. Según informes, decenas de menores siguen condenados a muerte y en riesgo de ser ejecutados. La legislación iraní contempla la pena de muerte para las personas que hayan alcanzado la edad oficial de la pubertad: nueve años para las niñas, 15 para los niños.

En 2014 las autoridades ejecutaron al menos a nueve personas que los tribunales revolucionarios habían condenado por moharebeh (“enemistad contra Dios”) por sus presuntos vínculos con grupos armados de la oposición. En enero las autoridades ejecutaron a dos activistas árabes-iraníes, Hadi Rashedi y Hashem Shaa-baninejad, por moharebeh, según grupos de defensa de los derechos humanos. El 31 de mayo las autoridades ejecutaron a Gholamreza Khosravi Savadjani, condenado por sus presuntos vínculos con el grupo prohibido de la oposición Mojahedin-e Khalq. Decenas de personas sentenciadas por cargos relacionados con el terrorismo, entre ellas muchos kurdos y baluchis iraníes, fueron condenados a muerte en

juicios plagados de violaciones del debido proceso. El 12 de junio las autoridades informaron a los familiares de Ali Chabishat y Seyed Khaled Mousavi, árabes-iraníes de Ahvaz en Juzestán, que los habían ejecutado y enterrado en secreto, a pesar de los llamamientos de las Naciones Unidas.

El poder judicial continuó permitiendo la ejecución de presos condenados por moharebeh a pesar de los cambios en el código penal que requieren que se revisen y anulen las condenas a muerte en ausencia de evidencia de que el presunto autor recurrió al uso de las armas.

Libertad de expresión e información

Los cuerpos de seguridad continuaron tomando medidas drásticas contra la libertad de expresión y la disidencia. Según Reporteros sin Fronteras, Irán detuvo en octubre al menos a 48 periodistas, blogueros y activistas de medios sociales.

En mayo de 2014 la policía arrestó a cuatro hombres y tres mujeres jóvenes después de que un video en el que aparecían bailando al ritmo de la popular canción “Happy” se volviera viral en YouTube. Las autoridades los pusieron en libertad para ser juzgados por cargos como participar en “relaciones ilícitas”. En mayo un tribunal revolucionario de Teherán condenó a ocho usuarios de Facebook a un total de 127 años de cárcel por la presunta publicación de mensajes sobre funcionarios del gobierno y “santidades religiosas” que fueron considerados insultantes, entre otros delitos.

Las fuerzas de seguridad detuvieron el 28 de mayo a Saba Azarpeik, periodista de las publicaciones Etemad y Tejarat-e Farda, y la mantuvieron en régimen de incomunicación durante casi tres meses. A continuación, la pusieron en libertad bajo fianza. Según informes, será juzgada por cargos imprecisos de “propaganda contra el Estado” y “difusión de información falsa”. El 19 de junio un funcionario judicial anunció que 11 personas declaradas culpables de “diseñar páginas y sitios web y crear contenidos para medios hostiles al régimen” habían recibido penas de prisión de hasta 11 años. Parece ser que eran personas relacionadas con Narenji, un popular sitio web, que habían sido detenidas por los Guardias Revolucionarios el 3 de diciembre de 2013.

El 22 de julio, agentes no identificados detuvieron al corresponsal del periódico estadounidense Washington Post, Jason Rezaian; a su esposa Yeganeh Salehi, también periodista, y otras dos personas no identificadas: una fotoperiodista y su cónyuge. En el momento de redactarse este informe, Rezaian seguía detenido sin cargos y sin haber tenido acceso a un abogado. Las autoridades liberaron a Salehi y a los otros dos.

El 7 de agosto de 2014, un tribunal de apelaciones confirmó la condena por homicidio de un agente de la policía acusado por su implicación en el caso de la muerte bajo custodia del bloguero Sattar Beheshti el 6 de noviembre de 2012. El tribunal impuso una pena de tres años de cárcel, más dos años de exilio interno y 74 latigazos.

Funcionarios judiciales también cerraron al menos cuatro periódicos presuntamente por violación de las restricciones de contenido. Ordenaron el cierre de Aseman en febrero y la detención de su jefe de redacción por un artículo que describía las leyes

islámicas qesas de retribución como “inhumanas”. Las autoridades permitieron que algunos periódicos continuaran publicando después de las prohibiciones, pero siguieron bloqueando sitios web e interfiriendo las emisiones extranjeras vía satélite.

Libertad de reunión y asociación

Decenas de personas detenidas por su afiliación a partidos prohibidos de la oposición, sindicatos y grupos de estudiantes siguen en la cárcel. Los sindicatos independientes y no autorizados siguieron siendo blancos del poder judicial. El 1 de mayo la policía atacó y arrestó al menos a 25 trabajadores que protestaban por los bajos salarios y las pobres condiciones laborales delante del Ministerio del Trabajo y de una terminal de autobuses de Teherán. La policía llevó a los trabajadores a la prisión Evin, antes de liberarlos. Varios enfrentan cargos relacionados con reunión ilícita.

El ministro interino de Ciencias de Rouhani, Reza Faraji Dana, responsable de la mayoría de las universidades de Irán, dirigió esfuerzos para restituir a los profesores y estudiantes expulsados entre 2005 y 2012 por sus actividades pacíficas. Sin embargo, decenas seguían sin poder continuar sus estudios o docencia. En agosto, el Parlamento votó a favor de destituir al ministro y se negaron a confirmar varias otras nominaciones de Rouhani para el puesto.

Prisioneros políticos y defensores de los derechos humanos

Las autoridades continuaron encarcelando a decenas de activistas y defensores de los derechos humanos, tales como los abogados Mohammad Seifzadeh y Abdolfattah Soltani, a causa de sus actividades pacíficas o profesionales. En septiembre, un tribunal revocó una orden que prohibía que Nasrin Sotoudeh ejerciera la abogacía durante 10 años después de su salida de la cárcel en 2013. Pero el 18 de octubre el comité disciplinario del Colegio de Abogados de Irán le dijo a Sotoudeh que había revocado su licencia de abogado durante 3 años debido a su condena en 2011 por un tribunal revolucionario, por cargos imprecisos de seguridad nacional. El 9 de noviembre, funcionarios de seguridad convocaron a Narges Mohammadi, una defensora de los derechos, para ser interrogada después de dar un discurso en el que criticó las políticas del gobierno.

En 2014, las destacadas figuras de la oposición Mir Hossein Mousavi, Zahra Rahnava y Mehdi Karubi, recluidos sin cargos ni juicio desde febrero de 2011, permanecieron bajo arresto domiciliario. Los presos, especialmente aquellos condenados por motivos políticos, sufrieron abusos regulares por parte de los guardias y les fue denegado el tratamiento médico necesario. En abril, un grupo de guardias golpeó severamente a varias decenas de presos políticos en el Pabellón 350 de la prisión Evin y obligaron a cerca de 30 de ellos, a pasar entre dos filas de guardias, que daban puñetazos, patadas y golpes con porras. Según los familiares de las víctimas, algunos sufrieron lesiones graves. A continuación, los funcionarios sometieron al menos a 31 presos a régimen de aislamiento prolongado y trato degradante.

Derechos de la mujer

En 2014 las autoridades anunciaron o implementaron políticas discriminatorias, incluyendo la restricción del empleo de las mujeres en las cafeterías, algunos restaurantes y otros espacios públicos, y la limitación del acceso a la planificación familiar como parte de las medidas oficiales para impulsar el crecimiento de la población iraní.

El 30 de junio, las autoridades arrestaron a Ghoncheh Ghavami, una joven de 25 años de doble nacionalidad iraní-británica, y a otras personas por haber participado en una protesta pacífica en contra de una orden oficial que prohibía que las mujeres asistieran a los partidos de voleibol de los hombres en el Estadio Azadi de Teherán. Ghavami, que primero estuvo detenida en la prisión Evin, donde las autoridades le negaron el acceso a un abogado, fue luego juzgada y condenada por el delito de “propaganda contra el Estado” en un juicio a puerta cerrada. En septiembre, las autoridades anunciaron que Shahla Sherkat, editora de una nueva revista femenina, debía comparecer ante el Tribunal de Prensa por promover ideas no islámicas.

Las mujeres iraníes son discriminadas en muchos aspectos de sus vidas, incluyendo cuestiones de estatus personal relacionadas con el matrimonio, el divorcio, la herencia y la custodia de los hijos. Independientemente de su edad, una mujer no puede casarse sin la aprobación de su tutor masculino, y las mujeres, en general, no pueden transmitir su nacionalidad iraní a un cónyuge extranjero o a sus hijos. El matrimonio infantil, aunque ya no es la norma, sigue vigente, ya que la ley permite que las niñas se casen a los 13 años y los niños a los 15 años, y a edades más tempranas si un juez da su autorización.

Trato de las minorías

El gobierno niega la libertad religiosa a los Baha'is, la mayor minoría religiosa no musulmana de Irán, y los discrimina. Hasta mayo de 2014 había al menos 136 Baha'ís encarcelados en prisiones iraníes. Las autoridades estatales también profanaron cementerios de los Baha'is, incluido uno en Shiraz, que comenzaron a excavar en abril. Los cristianos conversos del Islam, los protestantes de habla persa y las congregaciones evangélicas, así como los miembros del movimiento de la iglesia en casa, siguieron siendo blanco de las fuerzas de seguridad e inteligencia. Muchos afrontan cargos como “actuar contra la seguridad nacional” y difundir “propaganda contra el Estado”.

Las autoridades restringen la participación política y el empleo en el sector público de las minorías musulmanas no chiíes, incluidos los sunitas, que representan el 10 por ciento de la población. También impiden que los sunitas construyan sus propias mezquitas en Teherán y celebren oraciones del Eid independientes. La persecución por parte del gobierno contra los miembros de las órdenes místicas sufíes, especialmente contra los miembros de la orden Nematollahi Gonabadi, no cesó. En marzo la policía golpeó y detuvo a varios manifestantes que se reunieron delante de un edificio judicial en Teherán para pedir la liberación de varios detenidos sufíes.

El gobierno restringió las actividades culturales y políticas entre las minorías azéris, kurdas, árabes y baluchis del país. Los refugiados afganos y los trabajadores

migrantes, que según cálculos oscilan entre los 2,5 y los 3 millones, siguieron sufriendo graves abusos.

Principales actores internacionales

El gobierno continuó bloqueando el acceso a Irán del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Irán, Ahmed Shaheed, y otros órganos de derechos de la ONU, pero anunció en noviembre que permitiría la visita de dos expertos de la ONU en 2015. El Relator Especial y otros funcionarios de la ONU criticaron el “alza en las ejecuciones” en Irán e instó al gobierno a imponer una moratoria.

Marruecos

La Constitución de Marruecos de 2011 incorporó sólidas disposiciones de derechos humanos, pero estas reformas no se tradujeron en prácticas mejoradas, ni en la aprobación de leyes significativas de implementación o en la revisión de leyes represivas. En 2014, los marroquíes ejercieron su derecho a protestar pacíficamente en las calles pero, en algunas ocasiones, la policía continuó dispersándolos violentamente. Las leyes que penalizan los actos que puedan atentar contra el rey, la monarquía, el Islam o la soberanía que Marruecos defiende sobre el Sáhara Occidental limitaron los derechos a las libertades de expresión, asamblea y asociación pacíficas. Los tribunales siguieron condenando y encarcelando a los que se manifestaron en las calles y a los disidentes en juicios injustos. En una nota más positiva, Marruecos implementó reformas anunciadas en 2013 a sus políticas de inmigración, concediendo estatus legal temporal a cientos de refugiados y miles de otros extranjeros, la mayoría de ellos subsaharianos.

Libertad de expresión

Los medios de comunicación independientes impresos y en línea de Marruecos continúan investigando y criticando a los funcionarios gubernamentales y sus políticas, pero se enfrentan al enjuiciamiento y al acoso cuando cruzan ciertos límites. La ley de prensa contempla penas de prisión por la difusión “maliciosa” de “información falsa” que las autoridades consideren que pueda perturbar el orden público, o por el discurso que sea considerado difamatorio.

La televisión estatal marroquí ofrece cierto margen para el debate y el periodismo de investigación, pero deja poco espacio para la crítica directa al gobierno o al disenso sobre cuestiones fundamentales. Las autoridades continuaron su investigación por cargos de terrorismo de Ali Anouzla, director del sitio web de noticias independiente Lakome.com, por un artículo que describía y proporcionaba un enlace indirecto a un video militante de reclutamiento yihadista. En 2013, Anouzla pasó cinco semanas detenido tras la publicación del artículo.

El rapero Mouad Belghouat (“El-Haqed”), cuyas canciones denuncian la corrupción y los abusos policiales, pasó cuatro meses en prisión tras ser declarado culpable de agredir a agentes de la policía, en un juicio en el que el juez se negó a convocar los testigos de la defensa o a las supuestas víctimas. Las autoridades impidieron en febrero que una librería en Casablanca celebrara un evento para lanzar el nuevo álbum de canciones de El-Haqed. El rapero de 17 años Othmane Atiq (“Mr. Crazy”) cumplió una pena de prisión de tres meses por insultar a la policía e incitar al consumo de drogas en sus videos musicales que representan la vida de una juventud urbana descontenta.

Abdessamad Haydour, un estudiante, continuo cumpliendo una condena de tres años por insultar al rey, calificándolo como un “perro”, “un asesino” y “un dictador” en un video de YouTube. Un tribunal lo sentenció en febrero de 2012 en virtud de una disposición del Código Penal que criminaliza las “injurias al rey”.

Libertad de reunión

Las autoridades toleraron numerosas marchas y mítines para exigir reformas políticas y protestar contra acciones del gobierno, pero dispersaron por la fuerza algunas reuniones, agrediendo a los manifestantes. En el Sáhara Occidental, las autoridades prohibieron todas las reuniones públicas consideradas hostiles a la norma impugnada de Marruecos sobre ese territorio, desplegando una gran cantidad de policías que bloquearon el acceso a los lugares de las manifestaciones y, a menudo por la fuerza, dispersaron a los saharauis que pretendían reunirse.

El 6 de abril, la policía detuvo a 11 jóvenes en una marcha a favor de la reforma en Casablanca y los acusó de golpear e insultar a la policía. El 22 de mayo, un tribunal de primera instancia sentenció a nueve de ellos a penas de prisión de hasta un año y a dos a penas suspendidas, basándose en “confesiones” muy similares que según la policía habían redactado mientras estaban en prisión preventiva, aunque los acusados las repudiaron en la corte. El 17 de junio, el tribunal liberó provisionalmente a los nueve en espera del resultado de su juicio de apelación, que seguía en curso en el momento de esta redacción.

Libertad de asociación

Los funcionarios siguen impidiendo arbitrariamente a muchas asociaciones obtener el registro legal, aunque la Constitución de 2011 garantiza el derecho a formar una asociación. En mayo, las autoridades se negaron a registrar a Freedom Now, un nuevo grupo de libertad de expresión y le prohibieron celebrar una conferencia en el Colegio de Abogados de Rabat. A otras asociaciones también se les negó el registro legal, incluyendo asociaciones caritativas, culturales y educativas, cuyo liderazgo incluye a miembros de al-Adl wal-Ihsan (Justicia y Espiritualidad), un movimiento nacional que aboga por un Estado islámico y cuestiona la autoridad espiritual del rey.

En el Sáhara Occidental, las autoridades denegaron el reconocimiento legal a todas las organizaciones locales de derechos humanos, cuyo liderazgo apoya la independencia de ese territorio, incluso asociaciones que ganaron resoluciones administrativas judiciales que afirmaban que se les había denegado injustamente el reconocimiento.

Las autoridades también prohibieron decenas de actividades públicas y no públicas organizadas por asociaciones de derechos humanos legalmente reconocidas, como un campamento juvenil internacional que la sección nacional de Amnistía Internacional había organizado cada verano; y numerosas conferencias, sesiones de capacitación y actividades juveniles organizadas por la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) y sus secciones.

Entre abril y octubre, Marruecos expulsó al menos a 40 visitantes extranjeros del Sáhara Occidental. La mayoría de los afectados eran o europeos que apoyan la autodeterminación saharaui o periodistas independientes o investigadores que no habían coordinado su visita con las autoridades. Estas expulsiones, junto con la severa vigilancia a la que la policía marroquí sometió a los extranjeros que visitaron y se reunieron con activistas de los derechos saharauis, socavaron los esfuerzos de Marruecos para mostrar el Sáhara Occidental como un lugar abierto al escrutinio internacional.

Conducta policial, tortura y el sistema de justicia penal

Las reformas legales avanzaron lentamente. Una ley promulgada en septiembre faculta a la Corte Constitucional de bloquear propuestas legislativas si son contrarias a la nueva Constitución, incluidas sus disposiciones sobre derechos humanos. Un proyecto de ley que negaría la jurisdicción de los tribunales militares sobre los civiles está a la espera de aprobación parlamentaria.

Mientras tanto, los tribunales militares continuaron juzgando a civiles, incluyendo a Mbarek Daoudi, un activista saharaui detenido desde septiembre de 2013 por cargos de armamento. Otros 21 saharauis permanecieron en prisión cumpliendo largas condenas impuestas por un tribunal militar en 2013. Los hombres habían sido acusados en relación con la violencia que estalló el 8 de noviembre de 2010, cuando las autoridades dismantelaron el campamento de protesta de Gdeim Izik en el Sáhara Occidental. Once miembros de las fuerzas de seguridad murieron en los disturbios. El tribunal militar no investigó las denuncias de los acusados de que los agentes de la policía los habían torturado y obligado a firmar declaraciones falsas, y se basó en gran medida en estas declaraciones para dictar su veredicto de culpabilidad.

Los tribunales privaron del derecho a un juicio justo a los acusados en casos políticos y relacionados con temas de seguridad. Las autoridades continuaron encarcelando a cientos de presuntos militantes islamistas que detuvieron a raíz de los atentados de Casablanca de mayo de 2003. Muchos están cumpliendo condenas impuestas en juicios injustos tras varios meses de detención secreta, malos tratos y, en algunos casos, tortura. La policía ha arrestado a cientos más de presuntos militantes tras los nuevos ataques terroristas en 2007 y 2011. Los tribunales han condenado y encarcelado a muchos de ellos, acusados de pertenecer a una “red terrorista” o de estar preparándose para unirse a los militantes islamistas que combaten en Irak o en otros lugares. La ley antiterrorista de Marruecos de 2003 contiene una amplia definición de “terrorismo” y permite hasta 12 días de detención *garde à vue* (pre-condena).

Después de visitar Marruecos y el Sáhara Occidental en diciembre de 2013, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias (GTDA) concluyó: “El sistema judicial penal marroquí se basa en gran medida en las confesiones como la principal evidencia para apoyar la condena. Las quejas recibidas por el Grupo de Trabajo indican el uso de la tortura por parte de funcionarios estatales para obtener pruebas o confesiones durante el interrogatorio inicial... Los tribunales y los fiscales no cumplen con su obligación de iniciar una investigación *ex officio* siempre que haya motivos razonables para creer que una confesión se ha obtenido a través del uso de

la tortura y los malos tratos”. El GTDA dijo que las autoridades le permitió visitar los lugares de detención que había solicitado, y entrevistarse en privado con los detenidos que habían elegido.

Los tribunales marroquíes siguen imponiendo la pena de muerte, pero las autoridades no han consumado ninguna ejecución desde principios de los años 90.

Aparentemente, las condiciones de reclusión son duras, en gran parte debido al hacinamiento, y agravadas por la tendencia de los jueces de ordenar la detención preventiva de los sospechosos. El Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que instó al gobierno a expandir las penas alternativas, informó que la población penitenciaria había llegado a 72.000 prisioneros en 2013, el 42 por ciento de ellos en detención preventiva, con un promedio de 2 metros cuadrados por recluso. El CNDH es un organismo financiado por el Estado que rinde cuentas al rey.

El 12 de agosto, un tribunal condenó a la activista de ideología de izquierdas Wafae Charaf a servir un año en prisión y pagar una multa y daños y perjuicios por difamación e informar “falsamente” de un delito, después de que presentara una denuncia alegando que unos desconocidos la secuestraron y la torturaron tras una protesta de trabajadores que tuvo lugar en abril en Tánger. Un tribunal de apelaciones de esa ciudad duplicó, el 20 de octubre, su pena de prisión a dos años. Un tribunal de Casablanca condenó a un activista local a tres años de prisión, una multa y daños y perjuicios por los mismos cargos, después de que denunciara haber sido secuestrado y torturado por hombres desconocidos. Las sentencias en estos dos casos podrían tener un efecto disuasorio en las personas que deseen presentar denuncias de abusos cometidos por las fuerzas de seguridad.

Orientación sexual e identidad de género

Los tribunales marroquíes continuaron encarcelando a personas por comportamiento homosexual en virtud del artículo 489 del código penal, que prohíbe “actos licenciosos o contra natura con un individuo del mismo sexo”. Dos de seis hombres detenidos en Beni Mellal en abril y acusados en virtud de esta disposición fueron condenados a penas de prisión por este y otros delitos.

El 2 de octubre, un tribunal condenó a un turista británico y un amigo íntimo de Marruecos a cuatro meses de prisión por homosexualidad. Después de pasar tres semanas en la cárcel, los dos hombres fueron puestos en libertad pendiente de apelación.

Migrantes y refugiados

En 2014 se continuó ejecutando un plan de 2013 para reformar las políticas nacionales hacia los migrantes. La agencia para los refugiados de Marruecos concedió permisos de residencia renovables de un año a más de 500 refugiados reconocidos por el ACNUR. En el momento de redactarse este informe, Marruecos no había determinado el estatus que otorgaría a más de 1.300 sirios, que el ACNUR reconoce como refugiados. Marruecos también concedió permisos de residencia de un año renovables a miles de migrantes subsaharianos que no eran solicitantes de asilo, pero

que cumplían con ciertos criterios. Sin embargo, las fuerzas de seguridad siguieron utilizando la fuerza excesiva contra los migrantes, especialmente aquellos, en su mayoría subsaharianos, que acampaban cerca de las vallas que separan Marruecos del enclave español de Melilla y los que las intentaban escalar por ellas (ver también el capítulo sobre España).

Derechos de la mujer y las niñas

La Constitución de 2011 garantiza la igualdad de las mujeres “al mismo tiempo que respeta las disposiciones de la Constitución, las leyes y las características permanentes del Reino”. En enero, el Parlamento retiró del artículo 475 del Código Penal una cláusula que, en efecto, permitía a algunos hombres evitar ser procesados por violar a una menor de edad si accedían a casarse con ésta. El código conserva otras disposiciones discriminatorias, incluido el artículo 490, que tipifica como delito las relaciones sexuales consentidas entre personas no casadas, poniendo así a las víctimas de violación en riesgo de ser enjuiciadas si el violador acusado es absuelto.

El Código Familiar discrimina a las mujeres con respecto a la herencia y el derecho de los esposos a divorciarse unilateralmente de sus esposas. Las reformas al código en 2004 mejoraron los derechos de la mujer respecto al divorcio y la custodia de los hijos, y elevaron la edad para contraer matrimonio de 15 a 18 años. Sin embargo, los jueces rutinariamente permiten que las niñas se casen por debajo de esta edad. En septiembre de 2014, el Comité de los Derechos del Niño expresó su preocupación porque Marruecos no había adoptado una legislación que penalizara todas las formas de violencia doméstica, incluida la violación conyugal, aunque todo indica que la violencia contra las mujeres y las niñas en el hogar está generalizada.

Trabajadoras del hogar

A pesar de las leyes que prohíben que los menores de 15 años trabajen, se cree que miles de niños más jóvenes –sobre todo niñas– trabajan en el servicio doméstico. Según la ONU, organizaciones no gubernamentales y fuentes del Gobierno, el número de trabajadores infantiles del hogar ha disminuido en los últimos años, pero niñas de tan solo 8 años siguen trabajando en casas privadas hasta 12 horas al día por cantidades tan pequeñas como US\$11 al mes. En algunos casos, los empleadores golpearon y abusaron verbalmente de las niñas, les negaron una educación y una alimentación adecuada. En enero de 2014, un tribunal de Agadir condenó a una empleadora a 20 años de prisión por la violencia que causó la muerte de un trabajador doméstico infantil en su puesto de trabajo. En septiembre de 2014, el Comité de los Derechos del Niño expresó su preocupación porque el gobierno no había tomado medidas eficaces para impedir que los niños desempeñen tareas doméstica peligrosas.

La ley laboral de Marruecos excluye a los trabajadores domésticos de sus protecciones, incluyendo un salario mínimo, límites a las horas de trabajo y un día de descanso semanal. En 2006, las autoridades presentaron un proyecto de ley para regular el trabajo doméstico y reforzar las prohibiciones existentes a los trabajadores domésti-

cos de menos de 15 años. En el momento de escribirse este informe, el borrador había sido modificado pero no adoptado.

Principales actores internacionales

Francia, un aliado cercano y el principal socio comercial de Marruecos, se abstuvo de criticar públicamente las violaciones de derechos humanos en el reino. Marruecos suspendió sus acuerdos bilaterales de cooperación judicial con Francia en febrero después de un juez francés presentara citaciones a un comandante de la policía marroquí de visita en base a una denuncia de complicidad en la tortura. Estados Unidos también es un aliado cercano de Marruecos. El Secretario de Estado, John Kerry, visitó Rabat en abril para el “Diálogo Estratégico” bilateral, pero evitó cualquier mención pública de los problemas de derechos humanos.

En los últimos años, el gobierno ha concedido el acceso a varios mecanismos de derechos humanos de la ONU que tratan de visitar Marruecos y el Sáhara Occidental, incluido el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria en diciembre de 2013 (véase más arriba). La entonces Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, en visita oficial el 29 de mayo, señaló que Marruecos había dado “grandes pasos hacia la mejor promoción y protección de los derechos humanos”, pero citó varias áreas de preocupación, como la tortura, las restricciones a la libertad de expresión y la necesidad de aplicar leyes que garanticen los derechos establecidos en la Constitución de 2011.

Como en años anteriores, el Consejo de Seguridad de la ONU renovó en abril el mandato de la fuerza de paz de la ONU en el Sáhara Occidental (MINURSO) sin ampliarlo para incluir el monitoreo de los derechos humanos, algo a lo que Marruecos se opone firmemente.

México

Al asumir en diciembre de 2012, el Presidente Enrique Peña Nieto reconoció que la “guerra contra el narcotráfico” iniciada por su predecesor, Felipe Calderón, había propiciado graves abusos por parte de miembros de las fuerzas de seguridad. En 2014, el gobierno adoptó un Programa Nacional de Derechos Humanos que expone sus políticas para los próximos 4 años, y admitió que todavía se desconocía el paradero de más de 22.000 personas que habían sido denunciadas como extraviadas desde 2006.

La desaparición forzada de 43 estudiantes ocurrida en septiembre en Iguala, Guerrero, provocó protestas generalizadas que llamaban al gobierno a esclarecer el paradero de los estudiantes y a abordar el problema más general de corrupción y abusos que el caso dejó en evidencia.

No obstante, el gobierno ha logrado avances limitados en el juzgamiento de los asesinatos, las desapariciones forzadas y los hechos de tortura generalizados perpetrados por soldados y policías en el marco de acciones contra la delincuencia organizada, incluso durante la presidencia de Peña Nieto.

Otros problemas que persisten son las restricciones a la libertad de prensa, los abusos contra migrantes y los límites al acceso a derechos reproductivos y a la atención médica.

Desapariciones forzadas

Miembros de las fuerzas de seguridad de México han participado en numerosas desapariciones forzadas desde que el ex Presidente Calderón (2006-2012) dio inicio a la “guerra contra el narcotráfico”. Integrantes de todas las fuerzas de seguridad han continuado perpetrando desapariciones durante el gobierno de Peña Nieto, en algunas ocasiones, en colaboración directa con grupos criminales.

En septiembre, cerca de 30 policías municipales en Iguala, Guerrero, dispararon sin preaviso contra tres autobuses que transportaban a aproximadamente 90 estudiantes antes de una escuela rural de formación docente. Durante ese incidente y otros dos posteriores en los cuales agresores no identificados dispararon contra estudiantes y otras personas, más de 15 víctimas resultaron heridas y 6 perdieron la vida. Los policías ordenaron a los estudiantes del tercer autobús que bajaran, los golpearon y los obligaron a punta de pistola acostarse al costado del camino, para luego llevárselos en al menos tres automóviles policiales.

A la fecha de redacción de este documento, se desconocía el paradero de 42 estudiantes. La Procuraduría General de la República (PGR) señaló que, según la confesión de

tres presuntos responsables, los estudiantes habrían sido entregados a miembros de una organización criminal, quienes los asesinaron, quemaron sus cuerpos y los arrojaron a un basurero municipal. El ADN de uno de los 43 estudiantes fue identificado entre los restos que la PGR afirma haber encontrado en el lugar. Más de 80 personas fueron detenidas y acusadas por su presunta participación en estos hechos.

En agosto de 2014, el gobierno reconoció que aún se desconocía el destino de más de 22.000 personas que habían sido denunciadas como extraviadas desde 2006, pero no aportó evidencias que corroboren este dato ni información sobre cuántos de estos casos son presuntas desapariciones forzadas. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha difundido 12 informes que documentan la desaparición forzada de 30 víctimas durante este período, y ha hallado evidencias de la probable participación de agentes del Estado en aproximadamente otros 600 casos de desapariciones.

Según datos oficiales, hasta abril ninguna persona había sido condenada por desapariciones forzadas ocurridas después de 2006. Es habitual que agentes del Ministerio Público y policías no adopten medidas básicas de investigación para identificar a los responsables de desapariciones, y a menudo atribuyen a las víctimas la responsabilidad por lo sucedido e indican a sus familiares que deben realizar ellos mismos las investigaciones. Los familiares de las personas desaparecidas pueden perder el acceso a beneficios sociales básicos que dependen de la condición laboral de las víctimas, como servicios de cuidado infantil.

El gobierno ha puesto en marcha medidas potencialmente alentadoras para hallar a personas cuyo paradero se desconoce, pero ha logrado resultados limitados. En 2013, el gobierno creó una unidad en el ámbito de la PGR dedicada a investigar desapariciones, y a localizar personas extraviadas. En agosto de 2014, la unidad había hallado a 87 personas. Al momento de la preparación de este informe aún no se había implementado una base de datos exhaustiva donada por el Comité Internacional de la Cruz Roja, que permitiría cruzar datos sobre personas extraviadas y cuerpos no identificados.

Abusos militares e impunidad

México ha dependido fuertemente de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la violencia vinculada al narcotráfico y contra la delincuencia organizada, lo cual ha llevado a violaciones generalizadas de derechos humanos. Desde 2006, la CNDH recibió aproximadamente 9.000 denuncias de abusos cometidos por miembros del Ejército, y emitió informes sobre más de 100 casos en los cuales determinó que personal de esta fuerza había cometido graves violaciones de derechos humanos.

En abril, el Congreso reformó el Código de Justicia Militar, estableciendo que los abusos cometidos por militares contra civiles deberían ser juzgados en la justicia penal ordinaria. Anteriormente, estos casos tramitaban en el sistema de justicia militar, que en general no lograba que los militares rindieran cuentas por sus abusos. Tras la reforma, los abusos contra soldados siguen siendo competencia del sistema de justicia militar, que carece de independencia y transparencia.

En junio, un grupo de militares abrió fuego y provocó la muerte de 22 civiles que se encontraban en el interior de una bodega vacía en el municipio de Tlatlaya, en el Estado de México. Un soldado resultó herido durante el incidente.

Los relatos de testigos y un informe de la CNDH indicaron que al menos 12 civiles fueron ejecutados extrajudicialmente. Agentes del Ministerio Público estatal detuvieron a dos de las tres testigos sobrevivientes, las golpearon, las asfixiaron con bolsas y las amenazaron con someterlas a abusos sexuales para obligarlas a confesar que tenían vínculos con las personas que fallecieron en los incidentes, y a declarar que los militares no eran responsables de las muertes, según informó la CNDH. También amenazaron y maltrataron a una tercer testigo, y obligaron a las tres a firmar documentos sin que se les permitiera leer su contenido.

En septiembre, el sistema de justicia militar detuvo a 24 soldados y un teniente que presuntamente participaron en los incidentes, y acusó a 8 de ellos de faltas a la disciplina militar. Posteriormente, siete soldados y el teniente fueron consignados por la PGR por “ejercicio indebido del servicio público”. Tres de los soldados también fueron consignados por “abuso de autoridad, homicidio calificado en agravio de ocho personas y alteración ilícita del lugar y vestigios del hecho delictivo”. El teniente enfrenta, además, cargos por encubrimiento.

Tortura

Es común que en México se practiquen torturas para obtener información y confesiones bajo coacción. En general, las torturas se aplican durante el período entre que las víctimas son detenidas arbitrariamente hasta que son puestas a disposición de agentes del Ministerio Público, en el cual a menudo son mantenidas incomunicadas en bases militares u otros centros de detención ilegales. Las tácticas más frecuentes incluyen golpizas, simulacros de ahogamiento, descargas eléctricas y tortura sexual. Muchos jueces aún admiten confesiones obtenidas mediante tortura, a pesar de que existe una prohibición constitucional contra este tipo de prueba.

Sistema de justicia penal

Es habitual que el sistema penal no logre proporcionarle justicia a las víctimas de crímenes violentos y violaciones de derechos humanos. Esto se debe a causas que incluyen la corrupción, la falta de recursos y de capacitación, y la complicidad de agentes del Ministerio Público y defensores públicos.

En 2013, México promulgó, a nivel federal, la Ley General de Víctimas para garantizar justicia, protección y resarcimiento a las víctimas de delitos. A la fecha de preparación de este documento, el poder ejecutivo aún no había adoptado las reglamentaciones necesarias para brindar resarcimiento a las víctimas. En marzo de 2014, solamente seis estados habían promulgado la legislación exigida por la Ley de Víctimas.

En 2008, México promulgó una reforma constitucional destinada a transformar para el 2016 su sistema judicial inquisitivo y escrito en un sistema acusatorio y oral. Hasta

noviembre, solamente 3 de los estados habían implementado completamente la reforma, y en 13 estados el nuevo sistema funcionaba parcialmente.

La reforma también ha introducido una disposición sobre arraigo que permite a los agentes del Ministerio Público, con autorización judicial, detener durante un máximo de 80 días a personas presuntamente involucradas en la delincuencia organizada, antes de ser consignadas. En febrero, la Suprema Corte de Justicia determinó que la disposición solamente debía aplicarse a casos de delincuencia organizada. A la fecha de preparación de este informe, se encuentra pendiente en el Senado un proyecto para reducir a 35 días el período máximo que estas personas pueden ser retenidas sin ser consignadas.

Grupos de autodefensa

La aplicación ineficaz de la ley ha contribuido al surgimiento de grupos armados de autodefensa ciudadana en numerosas regiones del país.

Luego de que se expresara preocupación ante la intervención no regulada de algunos grupos en materia de seguridad, varios grupos de autodefensa en el estado de Michoacán suscribieron en abril un acuerdo con el gobierno, en el cual se comprometieron a que sus miembros registraran sus armas y se sumaran a las fuerzas locales de seguridad. Al momento de la redacción de este documento, no se había efectuado ninguna evaluación independiente sobre la implementación del acuerdo, ni sobre si cumplía con los procedimientos de selección que prevé el derecho mexicano para las fuerzas de seguridad.

Condiciones en centros de detención

Las cárceles están sobrepobladas, tienen problemas de higiene y no brindan seguridad básica a la mayoría de los internos. Los presos que afirman sufrir agresiones u otros abusos cometidos por guardias o internos no cuentan con un sistema efectivo para exigir una reparación. En la mayoría de las prisiones, la población carcelaria es controlada por la delincuencia organizada, y la situación de corrupción y violencia es sumamente grave.

Libertad de los medios de comunicación

Numerosos periodistas, especialmente aquellos que tratan temas vinculados con la delincuencia o critican a funcionarios, han sido víctimas de persecución y agresiones. Según datos de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión, entre 2000 y mayo de 2014, 102 periodistas fueron asesinados y otros 24 desaparecieron, incluidos dos 2 que fueron asesinados en 2014.

Las autoridades generalmente no logran investigar de forma adecuada los delitos contra periodistas, y muchas veces descartan de manera prematura que los delitos estén vinculados con su profesión. Hasta mayo, la Fiscalía Especial estaba efectuan-

do 555 investigaciones sobre delitos contra periodistas o medios, y había presentado consignaciones en 61 casos.

Es común que periodistas opten por la autocensura ante los ataques de funcionarios gubernamentales o grupos delictivos. La regulación insuficiente de la publicidad oficial también puede limitar la libertad de los medios, al otorgarle al gobierno una influencia económica desproporcionada sobre ciertos medios de comunicación.

Derechos de mujeres y niñas

El derecho mexicano no protege adecuadamente a mujeres y niñas contra la violencia doméstica y sexual. Algunas disposiciones, como aquellas que supeditan la gravedad de la pena para ciertos delitos sexuales a la “castidad” de la víctima, contravienen estándares internacionales. Las mujeres y niñas que han sufrido este tipo de violaciones de derechos humanos en general no denuncian los hechos a las autoridades, y quienes sí lo hacen suelen enfrentarse a una actitud de sospecha, apatía y menosprecio.

En 2008, la Suprema Corte de Justicia confirmó la constitucionalidad de una ley de México D.F. que legalizó el aborto practicado durante las primeras 12 semanas de gestación. Desde entonces, 17 entidades federativas de México han adoptado leyes que reconocen el derecho a la vida desde el momento de la concepción.

En 2010, la Suprema Corte de Justicia resolvió que todos los estados deben ofrecer métodos anticonceptivos de emergencia y asegurar el acceso al aborto a víctimas de violación sexual. Sin embargo, en la práctica muchas mujeres y niñas enfrentan graves obstáculos, incluida la información errónea y la intimidación por parte de funcionarios, cuando intentan llevar a cabo abortos luego de ser víctimas de violencia sexual.

Orientación sexual e identidad de género

En 2010, la Suprema Corte de Justicia reconoció el derecho de las parejas del mismo sexo de México D.F. a adoptar niños y a contraer matrimonio. Determinó que la totalidad de los 31 estados mexicanos deben reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo celebrados en México D.F., pero no exigió que celebren estos matrimonios en sus respectivas jurisdicciones. En enero de 2014, la Suprema Corte de Justicia también determinó que las parejas del mismo sexo pueden reclamar los mismos beneficios de seguridad social y salud que reciben las parejas heterosexuales de parte de organismos gubernamentales. En septiembre, Coahuila se convirtió en el primer estado en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Cuidados paliativos

El gobierno mexicano adoptó una serie de medidas importantes para implementar normas que le conceden a las personas con enfermedades terminales acceso a cuidados paliativos. El gobierno promulgó una nueva reglamentación en noviembre de 2013, anunció una reforma de las reglamentaciones sobre control de drogas para facilitar el acceso a la morfina y otros analgésicos opioides, añadió la cobertura parcial de cuidados paliativos en un seguro gubernamental destinado a sectores de

bajos recursos, y anunció medidas orientadas a formular una estrategia nacional en materia de cuidados paliativos. En México, decenas de miles de pacientes necesitan cuidados terminales cada año, pero en la práctica apenas una pequeña minoría puede acceder a estos cuidados.

Migrantes

Cientos de miles de migrantes indocumentados, incluidos menores no acompañados y familias, cruzan el territorio de México cada año, y durante el trayecto muchos de ellos sufren graves abusos por parte del crimen organizado, autoridades migratorias y miembros de las fuerzas de seguridad. Un informe publicado en 2013 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó que los “robos, extorsiones, secuestros, agresiones físicas y psicológicas, abusos sexuales, asesinatos y desapariciones de los que son víctimas [los migrantes]... han empeorado de forma dramática” en los últimos años.

En abril, cerca de 300 migrantes de América Central y 3 defensores de derechos humanos que los acompañaban fueron presuntamente agredidos y detenidos por la fuerza por autoridades de inmigración y policías en Tabasco, según la CIDH.

Las autoridades no han adoptado medidas adecuadas para proteger a los migrantes, ni para investigar y juzgar a quienes cometen abusos contra ellos. El gobierno tampoco ha implementado las medidas de protección dictadas por organismos de derechos humanos nacionales e internacionales en beneficio del personal de centros de acogida de migrantes, que suele ser objeto de amenazas y hostigamiento por parte de grupos delictivos y funcionarios.

Derechos laborales

La preponderancia de sindicatos afines a sectores patronales continúa obstaculizando la actividad sindical legítima. Con frecuencia, se impide que sindicatos independientes inicien negociaciones con los sectores patronales, mientras que los trabajadores que pretenden conformar sindicatos independientes se exponen a la posibilidad de perder su empleo. Una ley de trabajo adoptada en 2012 no abordó la falta de transparencia y democracia en los poderosos sindicatos afines a intereses patronales y no protegió el derecho de los trabajadores a conformar sindicatos independientes y llevar a cabo negociaciones colectivas.

Defensores de derechos humanos

Continúan la persecución y las agresiones contra defensores y activistas de derechos humanos, a menudo asociadas con su oposición a “megaproyectos” de infraestructura o extracción de recursos. En muchos casos, existen evidencias de que agentes estatales están involucrados en las agresiones.

En 2012, México promulgó una ley para proteger a defensores de derechos humanos y periodistas. No obstante, el mecanismo de protección establecido en la ley no se ha

implementado de manera eficaz, y en algunos casos las medidas de protección han sido tardías, insuficientes o incompletas.

Actores internacionales clave

Estados Unidos ha destinado más de US\$ 2.000 millones en ayuda internacional a México a través de la Iniciativa Mérida, un paquete de medidas de asistencia acordado en 2007 sin plazo estipulado, para contribuir a la lucha contra la delincuencia organizada en México. El 15 por ciento de algunas partidas de esta ayuda sólo puede ser desembolsado luego de que el Secretario de Estado de los Estados Unidos informe que el gobierno mexicano está cumpliendo con una serie de requisitos vinculados con los derechos humanos. No obstante, el impacto de estos requisitos se ha visto menoscabado debido a que el Departamento de Estado de los Estados Unidos, de manera reiterada, ha informado al Congreso de ese país que se estarían cumpliendo los requisitos, a pesar de las abrumadoras evidencias que indican lo contrario, y citando a menudo adelantos incompletos y poco precisos con respecto a tal cumplimiento, en función de lo cual el Congreso ha dispuesto la entrega de los fondos.

En abril y mayo, el Relator Especial de la ONU sobre tortura visitó México y concluyó que la tortura era “generalizada”. En agosto, el Relator Especial de la ONU sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias informó que los abusos extendidos cometidos impunemente por miembros de las fuerzas de seguridad en el marco de la “guerra contra el narcotráfico” suponían una amenaza grave para el derecho a la vida. En septiembre, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su “profunda preocupación” por los ataques contra periodistas, y exhortó al gobierno a adoptar medidas para protegerlos.

En México, la mayoría de las personas con discapacidad vive en condiciones de pobreza, lo cual agrava los obstáculos a la educación, el empleo y atención médica. En el examen de octubre de 2014 sobre el cumplimiento por parte de México de la Convención de la ONU sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad, el órgano a cargo de supervisar la implementación del tratado alertó sobre las restricciones a la capacidad jurídica de personas con discapacidades, la violencia que enfrentan las mujeres y los niños con discapacidades (incluida la esterilización involuntaria), la institucionalización de menores con discapacidades, y la coerción física y el aislamiento de personas con discapacidades en hospitales psiquiátricos.

Perú

Es habitual que manifestaciones públicas contra proyectos de minería a gran escala y otras iniciativas del sector privado y del gobierno en Perú lleven a enfrentamientos entre policías y manifestantes, en los cuales civiles resultan heridos o asesinados por disparos policiales o militares. Si bien en 2013 y 2014 la cantidad de víctimas fatales de estos enfrentamientos fue menor que en 2012, hubo escasos avances en la investigación de casos lesiones o homicidios ocurridos en el pasado, y la legislación adoptada recientemente ha disminuido aún más la rendición de cuentas por parte de la Policía y las Fuerzas Armadas.

Continúan las investigaciones judiciales sobre graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado en Perú, pero el progreso de los juicios ha sido lento y limitado.

Muertes durante protestas

Hasta septiembre de 2014, 34 civiles habían sido asesinados durante protestas desde que el Presidente Ollanta Humala asumió su cargo en julio de 2011. En los primeros nueve meses de 2014, cuatro civiles murieron a causa de heridas de bala luego de que policías presuntamente utilizaran armas de fuego contra manifestantes en tres incidentes distintos. En septiembre de 2014, Jhapet Huilca, de 16 años, recibió disparos policiales durante una protesta contra un gasoducto en Quillabamba, Cusco. El ministro del interior anunció la suspensión del jefe de policía responsable del operativo mientras se encuentre en curso una investigación de los hechos.

Sólo hubo progresos menores en el esclarecimiento de las circunstancias en las cuales se produjeron estas muertes, y en el enjuiciamiento de los policías o militares que emplearon a un uso ilegítimo de la fuerza. En enero de 2014, un fiscal concluyó una investigación, sin presentar cargos, sobre la muerte de cuatro civiles, presuntamente provocada por disparos de soldados durante una manifestación en Celendín, Cajamarca, en julio de 2012, a pesar de que concluyó que los responsables habían incurrido en homicidio doloso. Su informe reveló que los disparos fatales fueron probablemente emitidos por fusiles Galil del Ejército, y que no había evidencias de que ninguna de las víctimas estuviera armada. No obstante, el informe indicó que el Ejército no había aportado una copia del plan de actuación, los nombres de los soldados que intervinieron ni datos de las armas de fuego que les fueron entregadas, a pesar del pedido en este sentido, y que era imposible identificar a los autores.

Nuevos obstáculos para la rendición de cuentas de las fuerzas de seguridad

En enero de 2014, entró en vigor la Ley 30151, que prevé la inimputabilidad del “personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú que, en el cumplimiento de su deber y en uso de sus armas y otro medio de defensa, cause lesiones o muerte”. Esta reforma al Código Penal derogó disposiciones que supeditaban la inimputabilidad a que los policías emplearan la fuerza letal observando las reglamentaciones relevantes, y se aparta de los estándares internacionales que exigen que los funcionarios de seguridad pública apliquen la fuerza con arreglo a los principios de necesidad y proporcionalidad, y rindan cuentas cuando haya un uso indebido de la fuerza.

Continúa siendo preocupante que los casos de derechos humanos en los cuales están involucrados militares sigan siendo competencia de la jurisdicción militar. El Decreto Legislativo 1095, adoptado por el gobierno del Presidente Alan García en 2010, podría permitir que tribunales militares juzguen a miembros de esta fuerza acusados de cometer abusos contra civiles en operativos de seguridad pública. Diversos órganos internacionales de derechos humanos han rechazado de forma consistente la intervención de fiscales y tribunales militares en casos de violaciones de derechos humanos.

En noviembre de 2014, el Tribunal Constitucional aún no se había pronunciado sobre la constitucionalidad del decreto, que ha sido cuestionada por defensores de derechos humanos de Perú.

Juicios por abusos del pasado

La Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú ha estimado que casi 70.000 personas murieron o fueron víctimas de desapariciones forzadas durante el conflicto armado ocurrido en el país entre 1980 y 2000. Muchas de ellas sufrieron atrocidades cometidas por Sendero Luminoso y otros grupos insurgentes; y otras fueron víctimas de violaciones de derechos humanos perpetradas por agentes estatales.

En un juicio emblemático, el ex Presidente Alberto Fujimori fue condenado en 2009 a 25 años de prisión por desapariciones y asesinatos ocurridos en 1991 y 1992. Su asesor en inteligencia Vladimiro Montesinos, tres ex generales del Ejército y miembros del grupo Colina, un escuadrón de la muerte creado por el gobierno, también están cumpliendo penas de entre 15 y 25 años de prisión por el asesinato en 1991 de 15 personas en el distrito de Barrios Altos, en Lima, y por 6 desapariciones.

Los tribunales han hecho avances mucho menores con respecto a abusos ocurridos durante los gobiernos anteriores de Fernando Belaúnde (1980-1985) y Alan García (1985-1990). En un informe emitido en agosto de 2013 en ocasión del décimo aniversario del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, la Defensoría del Pueblo determinó que, pese a los esfuerzos iniciales, Perú no había consolidado un sistema judicial especializado con suficiente personal y recursos para juzgar la mayoría de los casos.

En 2013, el 48 por ciento de los 2.880 casos de violaciones de derechos humanos cometidos durante el conflicto armado que se denunciaron ante fiscalías habían sido rechazados, principalmente debido a que los fiscales no pudieron identificar a los responsables y el Ministerio de Defensa no estuvo dispuesto a aportar documentos que facilitaran las investigaciones. Solamente el 2 por ciento de los casos llegaron a juicio, según datos de Juicios por Violaciones a los Derechos Humanos en Perú, un proyecto de la universidad George Mason que realiza un seguimiento de los juicios vinculados con derechos humanos. En 2014, continuaron las audiencias judiciales de dos causas emblemáticas por cuarto año: las torturas y desapariciones en la base militar Los Cabitos, en Ayacucho en 1983, y la masacre de Accomarca en 1985, en la cual murieron 62 campesinos a manos de miembros de una unidad del Ejército.

A partir de cambios jurisprudenciales recientes, la Corte Suprema ha revocado en instancia de apelación una cantidad creciente de condenas. Si bien en ocasiones la Corte ha fundado sus decisiones en contradicciones en los testimonios, esta determinó en un pronunciamiento de enero de 2014 que la desaparición en 1983 de 6 personas cuyos cuerpos fueron hallados e identificados más de 20 años después constituía un delito sujeto a prescripción, lo cual viola las obligaciones jurídicas de Perú de impartir justicia contra los responsables de desapariciones forzadas.

En junio de 2014, el Presidente Ollanta Humala designó como ministro del interior a un ex miembro de la sección de inteligencia del Ejército que siendo investigado por su

presunta participación en el homicidio de Hugo Bustíos, corresponsal en Ayacucho de la revista *Caretas*, en 1988. Dos soldados fueron condenados en 2007 por el homicidio de Bustíos, uno de los cuales declaró en su testimonio que el ministro, Daniel Urresti, había comandado a los soldados que organizaron una emboscada y dispararon contra Bustíos antes de destruir su cuerpo con una granada.

La designación de Urresti suscitó fuertes cuestionamientos debido a la gravedad del delito que se le atribuía y a que su posición pública como ministro podía incidir en el resultado judicial de la causa y cercenar el derecho de los familiares de Bustíos a obtener justicia. Asimismo, las declaraciones públicas del Presidente Humala antes del juicio oral, en las cuales apoyaba la inocencia de Urresti, constituyeron una intromisión indebida en procedimientos judiciales en curso.

Tortura

El Congreso adoptó medidas significativas durante 2014 para combatir la tortura, que continúa representando un problema crónico en Perú. En junio, aprobó un proyecto legislativo que exigía que la Defensoría del Pueblo implemente el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) para cumplir con las obligaciones de Perú con arreglo al Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que ratificó en 2006. El proyecto exige que la Defensoría del Pueblo, entre otras cosas, visite cárceles y centros de detención sin previo aviso y vigile sus condiciones, formule recomendaciones proactivas y preventivas y publique un informe anual, pero no indica deben financiarse estas actividades adicionales. En noviembre de 2014, el proyecto se encontraba frenado en el Congreso a la espera de que el plenario aclarara algunos puntos que habían sido planteados por el presidente de la comisión legislativa que trató el texto.

Libertad de expresión

Es común que periodistas que investigan la participación de funcionarios de gobiernos regionales, alcaldes y empresarios en actos de corrupción sean objeto de agresiones físicas, amenazas y juicios penales por difamación, y en 2014 se registró un aumento de la cantidad de procesos penales de este tipo.

En marzo de 2014, el periodista César Quino recibió una pena de seis meses de prisión en suspenso por haber difamado al entonces gobernador de Ancash, César Álvarez, en un artículo publicado en *El Observador*, un periódico editado por Quino que mantiene una postura crítica del gobierno regional. En los últimos años, Álvarez —que ahora enfrenta cargos por el homicidio de un opositor político— ganó varias demandas por difamación llevadas a cabo con el objetivo de silenciar a críticos en la prensa.

En abril de 2014, se detonó un explosivo en la vivienda del periodista Yofré López Sifuentes en la ciudad portuaria de Barranca, al norte de Lima. López, quien se desempeña como editor de un periódico semanal y presentador de un programa radial de noticias denominado “Toque de Queda”, resultó ileso, pero su madre y su padrastro

sufrieron heridas. Según trascendió en la prensa, López había sido un prominente crítico de la contaminación del aire provocada por empresas locales agrícolas.

Derechos reproductivos

Las mujeres y jóvenes de Perú solamente pueden solicitar abortos en casos de riesgo para su salud o su vida. En junio de 2014, el Ministerio de Salud publicó una guía técnica que describe los procedimientos administrativos que deben cumplir los hospitales al evaluar casos individuales. Las normas suplen un vacío en materia regulatoria que había sido criticado por organismos internacionales de derechos humanos, y permiten que el personal de salud practique abortos en 10 tipos de condiciones médicas, y considere los derechos y necesidades de mujeres y jóvenes que no estén contempladas en estas condiciones, analizando cada caso en particular. El acceso a servicios en situaciones no contempladas en las condiciones estipuladas —por ejemplo, cuando la salud mental de una mujer o joven pueda verse peligrosamente afectada por un embarazo no deseado— queda a discreción de personal del establecimiento, y sujeto a un proceso de apelación interno de este.

Actores internacionales clave

En sus observaciones finales sobre los informes periódicos séptimo y octavo combinados de Perú, el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer instó a Perú a que adoptara una ley integral para combatir la violencia contra la mujer e implementara una estrategia de lucha contra los estereotipos de género discriminatorios. También recomendó que Perú haga extensiva la legalización del aborto legal a casos de violación sexual e incesto.

En agosto de 2014, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CEDR) recomendó que Perú tomara medidas para evitar que se continúe perpetuando la estigmatización de su población indígena y afroperuana. El comité se refirió específicamente a “La Paisana Jacinta”, una comedia televisiva de amplia audiencia en la cual un actor disfrazado realiza una interpretación estereotipada y burda de una campesina indígena. Tras las recomendaciones del CEDR, Frecuencia Latina, el canal de televisión que emite el programa desde 1999, decidió quitarlo de su horario de mayor audiencia.

Como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Perú apoyó medidas de las Naciones Unidas orientadas a que se llevara a cabo un fuerte escrutinio sobre violaciones de derechos humanos cometidas en Corea del Norte, Sri Lanka, Bielorrusia, Irán, los territorios palestinos ocupados y Siria.

Qatar ha experimentado un nivel de disidencia interna bajo, en comparación con sus vecinos, pero, desde su exitosa candidatura para organizar la Copa Mundial de la FIFA 2022, se ha convertido en foco de críticas internacionales por el maltrato a trabajadores migrantes de bajos salarios. A pesar de esto, Qatar no ha promulgado ninguna reforma significativa a su sistema de trabajo y sigue facilitando la trata y el trabajo forzoso de los trabajadores. Qatar ha gozado de una reputación como un enclave para la libertad de prensa en la región, pero una nueva ley contra la ciberdelincuencia constituye una seria amenaza a la libertad de expresión.

Derechos de los trabajadores migrantes

Qatar tiene una población de alrededor de 2 millones de habitantes, de los cuales solo el 10 por ciento son nacionales de Qatar. Los trabajadores migrantes de bajos salarios, en su mayoría provenientes de Asia y, en menor medida, de África, siguen siendo explotados y sufriendo abusos. En mayo de 2014 las autoridades de Qatar anunciaron reformas laborales en respuesta a la condena generalizada de las violaciones de derechos humanos que sufrían los trabajadores de la construcción, a medida que el país construye estadios y otras instalaciones para acoger la Copa del Mundo de 2022.

Sin embargo, las reformas anunciadas no protegerán adecuadamente a los trabajadores migrantes de la trata de personas, el trabajo forzoso y otras violaciones de sus derechos. No está claro si proveerán algún tipo de protección para los trabajadores domésticos migrantes, en su mayoría mujeres, que son especialmente vulnerables a la explotación y el abuso.

En Qatar, la Ley 14 de 2004 que regula el trabajo en el sector privado, limita las horas de trabajo de los empleados, exige que los trabajadores extranjeros reciban vacaciones anuales pagadas, fija requisitos de seguridad y salud y exige cada mes el pago puntual de los salarios. En la práctica, las empresas siguen haciendo caso omiso de estos requisitos con total impunidad debido a la incapacidad de las autoridades para hacer cumplir esta y otras leyes destinadas a proteger los derechos de los trabajadores.

Los trabajadores suelen pagar tarifas de contratación exorbitantes y los empleadores suelen apoderarse de sus pasaportes a su llegada a Qatar. Muchos trabajadores migrantes se quejan de que sus empleadores no les pagan sus salarios a tiempo, si es que se los pagan. Los trabajadores migrantes tienen prohibido sindicalizarse o participar en huelgas, a pesar de que constituyen el 99 por ciento de la fuerza laboral en el sector privado. Muchos trabajadores migrantes se ven obligados a vivir en condiciones insalubres y de hacinamiento, especialmente los que trabajan sin documentación.

El sistema kafala (patrocinio) vincula la residencia legal de un trabajador migrante a su empleador o patrocinador. En Qatar está codificado bajo los términos de la Ley N°4 de 2009, que regula el patrocinio, el empleo y la residencia de los trabajadores expatriados. La ley autoriza la transferencia de trabajadores a otros patrocinadores bajo ciertas condiciones, pero en la práctica los trabajadores rara vez consiguen los Certificados de no objeción que necesitan de su patrocinador para ser transferido legalmente a otro. También requiere que los trabajadores extranjeros obtengan permisos de salida de sus patrocinadores cuando desean salir de Qatar; en la práctica, esto permite a los empleadores impedir arbitrariamente que sus empleados dejen Qatar y regresen a sus países de origen. Los trabajadores pueden convertirse en indocumentados cuando los empleadores los denuncian ante las autoridades, supuestamente por haber tratado de huir o por no haber pagado la renovación anual de sus tarjetas de identificación de trabajadores. La falta de documentación adecuada pone a los trabajadores en riesgo de ser arrestados y detenidos o incluso de ser deportados. También los pone en peligro de seguir siendo explotados laboralmente.

El requisito del visado de salida y las prohibiciones arbitrarias de viaje de las autoridades significa que los empresarios de Qatar pueden impedir indefinidamente que sus empleados extranjeros abandonen Qatar, un poder que pueden utilizar de manera injusta para obtener concesiones de empleados extranjeros con los que están en disputa. Entre los expatriados bien remunerados que quedaron atrapados en Qatar en 2014 se destacan los casos de los ex empleados del canal infantil de Al Jazeera.

En mayo de 2014 Qatar anunció una serie de reformas laborales a través de un comunicado de prensa del Ministerio del Interior. Anunció que “el sistema kafala actual será reemplazado por un sistema basado en contratos de trabajo”, pero los detalles que ofreció indican que los trabajadores seguirían estando vinculados a sus empleadores. El comunicado señaló que los trabajadores podrían conseguir Certificados de no objeción, pero solo después de 5 años de trabajo con un empleador, y que un sistema automatizado de gobierno electrónico emitiría visados de salida después de un período de gracia de 72 horas antes de la salida de un trabajador extranjero.

El comunicado de prensa también indicaba que Qatar incrementaría el número de inspectores laborales, introduciría un sistema de pago electrónico de salarios, aumentaría las penas por confiscación de pasaportes y construiría viviendas adecuadas para 200.000 trabajadores. Sin embargo, el comunicado no daba detalles sobre cómo o cuándo se implementarían dichas reformas. Las autoridades tampoco respondieron a una carta de Human Rights Watch que ponía en duda la validez de la afirmación del gobierno de que estas reformas equivalían a la sustitución del sistema kafala. El 5 de junio, el ministro de Trabajo contribuyó a la confusión cuando anunció que el modelo de contrato que estaba desarrollando su ministerio determinaría si un trabajador necesitaría o no un visado de salida para abandonar Qatar y si recibiría o no un Certificado de no objeción al final de su contrato.

En julio de 2014, la Fundación Qatar, una organización semi gubernamental fuertemente involucrada en la promoción inmobiliaria, publicó un informe sobre prácticas de contratación. Entre sus recomendaciones figuraba que el gobierno de Qatar debería tratar de garantizar prácticas éticas de contratación normalizadas

en los países que envían mano de obra mediante el desarrollo de acuerdos bilaterales en materia de contratación, y que debería considerar la creación de sus propias agencias de contratación de mano de obra en los principales países que envían trabajadores.

No está claro cómo las reformas propuestas afectarán a los trabajadores domésticos migrantes, un subgrupo predominantemente femenino de la población de trabajadores migrantes, que son especialmente vulnerables. Además de los problemas generales que afrontan todos los trabajadores migrantes, los trabajadores domésticos sufren abusos verbales, físicos y, en algunos casos, incluso sexuales en sus lugares de trabajo. Algunos tienen prohibido por sus empleadores que hablen con extraños o viven encerrados en las casas donde trabajan. Muchos están obligados a trabajar sin disfrutar de ni un día libre.

La legislación laboral de Qatar no ofrece ninguna protección a los trabajadores domésticos migrantes y no requiere que los empleadores concedan días libres o períodos de descanso en el trabajo ni que limiten sus horas de trabajo. El Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), del cual Emiratos Árabes Unidos es miembro, está evaluando un contrato regional unificado para los trabajadores domésticos. Sin embargo, el contrato no proporciona protecciones fundamentales, como un límite a la jornada laboral, y sus mecanismos de aplicación son débiles. Tampoco cumple con los estándares mínimos detallados en el Convenio Internacional sobre Trabajadores Domésticos de la Organización Internacional del Trabajo que ha sido recientemente adoptado y que Qatar aún no ha ratificado. Sin embargo, incluso un contrato fuerte no sería un sustituto válido a las reformas de la legislación laboral.

Libertad de expresión

En septiembre Qatar emitió una ley “para la represión de los delitos electrónicos”, que plantea una clara amenaza a la libertad de expresión. Disposiciones redactadas de manera ambigua permiten enjuiciar a personas por publicar “noticias falsas con la intención de poner en peligro el orden público” e información que “vulnera los principios o valores sociales”.

El emir de Qatar aún no ha dado su aprobación final a un proyecto de ley de medios que expondría a los periodistas en Qatar a sanciones económicas prohibitivas, en caso de que publiquen información que dañe las relaciones con otros estados árabes.

El código penal de Qatar contiene disposiciones que son incompatibles con los estándares de la libertad de expresión bajo el derecho internacional. El Artículo 134, por ejemplo, fija una pena de hasta cinco años de prisión para cualquiera que sea condenado por criticar al emir o vice emir.

En agosto de 2014, las autoridades arrestaron a dos ciudadanos británicos que se encontraban en Qatar para investigar y documentar las condiciones laborales de los trabajadores migrantes, y los detuvieron en régimen de incomunicación durante 11 días antes de ponerlos en libertad sin cargos.

Derechos de la mujer

Las disposiciones de la Ley No. 22 de 2006, la primera ley codificada de Qatar para abordar las cuestiones de la familia y el estatus personal, discrimina a las mujeres. En virtud del Artículo 36, se requiere la presencia de dos testigos varones para la conclusión del contrato matrimonial. El artículo 57 prohíbe que los esposos agredan a sus esposas física o moralmente, pero el artículo 58 establece que es responsabilidad de una esposa cuidar de la casa y obedecer a su marido. La violación conyugal no se considera un delito.

Principales actores internacionales

En marzo Arabia Saudita, Bahréin y los Emiratos Árabes Unidos retiraron a sus embajadores de Qatar, en respuesta a su apoyo a grupos islamistas, especialmente los Hermanos Musulmanes. En noviembre se reanudaron las relaciones diplomáticas. Qatar prestó asistencia durante los ataques aéreos liderados por Estados Unidos contra las fuerzas de militantes islamistas en Irak y Siria.

Siria

En 2014 el conflicto armado en Siria se volvió cada vez más sangriento. El gobierno y las milicias progubernamentales intensificaron sus ataques en áreas civiles y continuaron usando armas indiscriminadas. Las fuerzas del gobierno también continuaron deteniendo arbitrariamente, torturando y haciendo desaparecer a detenidos, muchos de los cuales murieron bajo custodia. Grupos armados no estatales que se oponen al gobierno también llevaron a cabo abusos graves, como ataques deliberados e indiscriminados contra civiles, el uso de niños soldados, secuestros y torturas durante la detención.

El grupo extremista Estado Islámico, también conocido como ISIS, y la filial de al-Qaeda en Siria, Jabhat al-Nusra, fueron responsables de violaciones sistemáticas y generalizadas, incluyendo ataques contra civiles, secuestros y ejecuciones.

Según la entonces Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, hasta agosto de 2014 la cifra de muertos en el conflicto había ascendido a más de 191.000 personas. La expansión y la intensificación de los combates han provocado una grave crisis humanitaria con millones de desplazados internos y solicitantes de asilo en los países vecinos.

Ataques del gobierno contra civiles, uso indiscriminado de armas

Tras el ataque con armas químicas en agosto de 2013 contra Ghouta, cerca de Damasco, la presión internacional hizo que Siria accediera a la Convención sobre Armas Químicas y el acuerdo para eliminar sus armas químicas declaradas. En 2014 todas las armas químicas declaradas fueron retiradas de Siria para su destrucción. Pero la justicia sigue eludiendo a las víctimas del ataque y la evidencia sugiere claramente que los helicópteros del gobierno sirio lanzaron a mediados de abril bombas de barril

con cilindros de gas cloro en tres pueblos del norte de Siria. Estos ataques utilizaron un producto químico industrial común como arma, un acto prohibido por la Convención de Armas Químicas.

El uso extensivo por parte del gobierno sirio de las municiones de racimo ha causado numerosas víctimas y ha dejado un legado mortal de restos explosivos de la guerra. Human Rights Watch identificó al menos 249 ataques en 10 de las 14 gobernaciones de Siria en los que se utilizaron bombas de racimo entre julio de 2012 y julio de 2014. Se utilizaron al menos siete tipos de municiones de racimo, como bombas lanzadas desde el aire, dispensadores fijados a aviones, cohetes lanzados desde tierra, y al menos diez tipos de submuniciones explosivas. La evidencia indica que, en los ataques en febrero contra Keferzita, una ciudad del norte de Siria, las fuerzas gubernamentales utilizaron una clase poderosa de cohetes con municiones en racimo que no se había visto antes en el conflicto. Parece ser que las municiones en racimo volvieron a ser utilizadas el 21 de agosto por las fuerzas del gobierno sirio en la ciudad de Manbij, en la gobernación de Aleppo, matando al menos a seis civiles e hiriendo a otros 40.

El gobierno también persistió en el lanzamiento de un gran número de bombas de barril altamente explosivas sobre la población civil, en contra de la resolución 2139 aprobada el 22 de febrero por el Consejo de Seguridad de la ONU. Estas bombas no guiadas altamente explosivas son de fabricación barata, producción local y, por lo general, están construidas a partir de grandes barriles de petrolero, cilindros de gas y depósitos de agua. Luego son rellenas de explosivos de gran potencia y chatarra para mejorar la fragmentación y, a continuación, lanzadas desde helicópteros. Entre febrero y julio hubo más de 650 ataques mayores contra barrios de Aleppo controlados por grupos armados de la oposición. La mayoría de los ataques mostraron daños consistentes con la detonación de bombas de barril. Un grupo local calcula que en 2014 los ataques aéreos habrían matado a 3.557 civiles en la gobernación de Aleppo.

El gobierno sirio también continúa imponiendo asedios, que se estima que afectan a más de 200.000 civiles. Estos asedios violan la resolución 2139 del Consejo de Seguridad, que exige que todas las partes “levanten inmediatamente los asedios de las zonas pobladas”, incluyendo en Homs, Moadamiya y Daraya, en Ghouta occidental, Ghouta oriental y en el campamento de refugiados palestinos en Yarmouk, en el sur de Damasco. El gobierno ha utilizado estrategias de asedio para efectivamente matar de hambre a la población civil hasta la sumisión y forzar las negociaciones que le permitirían retomar el territorio.

Arrestos arbitrarios, desapariciones forzadas, tortura y muertes bajo custodia de las fuerzas del gobierno

Las fuerzas de seguridad sirias siguen deteniendo arbitrariamente a las personas, sometiéndolas regularmente a malos tratos y torturas, y a menudo causando su desaparición utilizando una amplia red de centros de detención en toda Siria. Muchos detenidos eran jóvenes de entre 20 y 30 años, pero niños, mujeres y ancianos también fueron detenidos. En algunos casos, las personas denunciaban que las fuerzas de seguridad habían detenido a miembros de su familia, niños incluidos, para presionarlos a que se

entregasen. El 30 de agosto, la Red Siria para los Derechos Humanos, un grupo de seguimiento local, estimó que 85.000 personas se encontraban detenidas en ese momento en manos del gobierno en condiciones que constituyen una desaparición forzada.

A pesar de una amnistía general declarada por el gobierno en junio, decenas de activistas de la sociedad civil, defensores de los derechos humanos, medios de comunicación y trabajadores humanitarios permanecen en detención arbitraria. Algunos de ellos están siendo juzgados, incluso ante tribunales militares y antiterrorismo, por ejercer sus derechos. Algunos de los activistas que permanecen detenidos incluyen al defensor de la libertad de expresión Bassil Khartabil y el defensor de los derechos humanos Mazen Darwish y sus colegas Hani Al-Zitani y Hussein Ghareer, del Centro Sirio de Medios de Comunicación y Libertad de Expresión. Algunos activistas, como el abogado y defensor de derechos humanos Khalil Maatouk, a quien ex prisioneros aseguran que fue detenido por el gobierno, siguen privados de su libertad en condiciones que constituyen una desaparición forzada.

La resolución 2139 del Consejo de Seguridad exige el fin de las prácticas de detención arbitraria, desaparición y secuestro, y la liberación de todos los que han sido detenidos arbitrariamente.

Los detenidos que han sido liberados reportan consistentemente haber sufrido malos tratos y torturas en los centros de detención, y condiciones carcelarias que provocaron muchos casos de muerte bajo custodia. Cuatro exprisioneros que fueron liberados en 2014 de la cárcel militar de Sednaya describieron varias muertes bajo custodia y condiciones penitenciarias tan duras que casi se ajustan a las denuncias de muertes masivas bajo custodia que hizo en enero un desertor militar, que fotografió a miles de cadáveres en hospitales militares de Damasco. Al menos 2.197 detenidos murieron bajo custodia en 2014, según activistas locales.

Abusos de Jabhat al-Nusra e ISIS

Los grupos extremistas islamistas Jabhat al-Nusra e ISIS cometieron abusos sistemáticos de los derechos humanos, incluyendo ataques intencionales y secuestros de civiles, como el secuestro por las fuerzas de ISIS en mayo de 153 niños kurdos. Posteriormente, los niños fueron puestos en libertad.

Según informes de funcionarios kurdos locales y evidencias fotográficas, las fuerzas de ISIS utilizaron municiones en racimo el 12 de julio y el 14 de agosto durante los combates entre ISIS y las fuerzas kurdas de las Unidades de Protección Popular (YPG) en los alrededores de la ciudad siria de `Ayn al-`Arab, también conocida por su nombre kurdo de Kobani, en la gobernación de Aleppo, cerca de la frontera norte de Siria con Turquía.

El 29 de mayo, según informes locales, las fuerzas de ISIS ejecutaron al menos a 15 civiles, entre ellos siete niños, tras entrar en la aldea de al-Taliliya, cerca de Ras al-`Ayn, en el norte de Siria. En julio, tras hacerse con el control de la ciudad de Bukamal, en la gobernación de Deir al-Zour, un residente informó que las fuerzas de ISIS ejecutaron sumariamente a un residente alauita y cristiano en la plaza principal durante el mes

de Ramadán. En 2014 también se reportaron ejecuciones sumarias de residentes por las fuerzas de ISIS en las ciudades de Raqqa y Tabka, en la gobernación de Raqqa. Las fuerzas de ISIS también han ejecutado sumariamente a algunos de sus rehenes, entre ellos los periodistas estadounidenses James Foley y Steven Sotloff en agosto y septiembre, los trabajadores humanitarios británicos David Haines y Alan Henning en septiembre y octubre, y el cooperante estadounidense Peter Kassig en noviembre.

En repetidas ocasiones, Jabhat al-Nusra se ha adjudicado la responsabilidad de atentados letales con coches bomba contra civiles en Siria.

ISIS y Jabhat al-Nusra han impuesto reglas estrictas y discriminatorias sobre mujeres y niñas y ambos grupos han reclutado activamente a niños soldados. Aparentemente, en Bukamal, durante el mes de Ramadán de 2014, las fuerzas de ISIS habrían golpeado a cualquiera que estuviera comiendo o bebiendo en público, y durante y después del Ramadán, a cualquiera que fuera visto caminando por las calles durante las horas de oración. Usar Internet, escuchar música y fumar también estaba terminante prohibido.

Abusos por otros grupos armados no estatales

Grupos armados no estatales han lanzado ataques indiscriminados con proyectiles de mortero y otros tipos de artillería desde zonas bajo su control que acabaron con la vida de civiles en barrios controlados por el gobierno. Estos ataques impactaron repetidamente contra objetivos civiles conocidos, entre ellos, escuelas, mezquitas y mercados.

El 29 de abril, dos proyectiles de mortero impactaron el complejo educativo Badr el-Din Hussaini en el barrio de al-Shaghour de Damasco, una zona bajo control del gobierno, matando a 17 niños y por lo menos a dos padres que habían venido a recoger a sus hijos de la escuela, e hiriendo a unas 50 personas. Los morteros procedían de una zona en manos de grupos armados en el campamento de Yarmouk.

Grupos armados no estatales, incluyendo el Ejército Libre Sirio y el Frente Islámico, también están utilizando a niños para el combate y otros fines militares. También han puesto en riesgo a estudiantes mediante el uso de escuelas como bases militares, cuarteles, centros de detención y puestos para francotiradores.

Grupos armados no estatales también han sido responsables de secuestros. Al menos 54 mujeres y niños alauitas que fueron tomados como rehenes durante una ofensiva militar en la gobernación rural de Latakia en agosto de 2013 siguen detenidos por “la habitación Mujahadeen en la zona rural de Latakia”.

El destacado defensor de los derechos humanos, Razan Zeitouneh, y tres de sus colegas, Wael Hamada, Samira Khalil y Nazem Hammadi, fueron secuestrados el 9 de diciembre de 2013 en Douma, una ciudad a las afueras de Damasco controlada por una serie de grupos armados de la oposición, incluido el Ejército del Islam. En el momento de redactarse este informe, seguían detenidos.

A pesar de la naturaleza sistemática de los abusos cometidos por ISIS y Jabhat al-Nusra, muchos otros grupos armados no estatales en Siria no han dejado de coordinar y cooperar con estos grupos.

Áreas bajo mandato del gobierno de Kurdistán

En enero de 2014 el Partido de la Unión Democrática y los partidos aliados establecieron un gobierno de transición en las tres regiones del norte: `Afrin, `Ain al-`Arab y Jazira. Han formado consejos que funcionan como ministerios y han introducido un nuevo derecho constitucional. Las autoridades han llevado a cabo allí detenciones arbitrarias, violaciones del debido proceso y no han abordado las desapariciones ni los asesinatos sin resolver. La policía local, las fuerzas militares y el YPG también utilizaron a niños soldados, a pesar de que se comprometieron en junio a desmovilizar y erradicar su uso.

Crisis de desplazados

La ONU calcula que 7,6 millones de sirios están internamente desplazados y que 12,2 millones necesitan asistencia humanitaria. En 2014 las organizaciones de ayuda humanitaria se enfrentaron importantes desafíos para conseguir asistencia para la población civil desplazada y otros gravemente afectados por el conflicto, a causa de los asedios impuestos por los grupos armados, tanto gubernamentales como no estatales, la continua negativa del gobierno a permitir la entrada de la asistencia a través de la frontera y un fracaso general a la hora de garantizar la seguridad de los trabajadores humanitarios.

En julio una resolución del Consejo de Seguridad autorizó la entrega de ayuda humanitaria transfronteriza incluso sin permiso del gobierno.

Hasta el 3 de septiembre de 2014 más de 3 millones de sirios habían sido o estaban en proceso de ser registrados como refugiados ante la Agencia de Refugiados de la ONU (ACNUR) en el Líbano, Jordania, Turquía, Irak y Egipto. En 2014, Irak, Jordania, Turquía y el Líbano implementaron medidas para restringir el número de entradas de refugiados.

Los cuatro países vecinos que aceptan a refugiados sirios se han negado a concederles estatus legal seguro.

Los palestinos de Siria han afrontado obstáculos adicionales. Se les ha negado la entrada o han sido deportados a la fuerza de Jordania, y a algunos palestinos jordanos que vivían en Siria se les retiró la ciudadanía jordana. Refugiados palestinos procedentes de Siria también han enfrentado restricciones adicionales en el Líbano, después de la imposición en mayo de nuevas regulaciones por parte del ministro del Interior que limitan la capacidad de los palestinos para entrar al país o renovar sus residencias si ya se encontraban en el Líbano.

En 2014, el número de refugiados procedentes de Siria que intentaron llegar a Europa, incluso a través de peligrosas rutas de contrabando, ha aumentado. Mientras que algunos países de la Unión Europea les ofrecen seguridad, otros, como Bulgaria y Grecia, han rechazado a los solicitantes de asilo, a veces con violencia, en sus fronteras o en sus aguas territoriales sin permitirles presentar solicitudes de asilo.

Los países que no son vecinos de Siria, incluso en Occidente, han seguido aceptando solo a pequeñas cantidades de refugiados.

En el momento de redactarse este informe, solo un 51 por ciento de la apelación del ACNUR para la Respuesta Regional para los Refugiados Sirios contaba con financiación, dejando un déficit de presupuesto de más de US\$1.800 millones. Como resultado, el ACNUR, el Programa Mundial de Alimentos y otros organismos han suspendido la asistencia a los refugiados, incluyendo la provisión de bienes básicos y subsidios para el cuidado de la salud.

Principales actores internacionales

Mientras que las partes en conflicto y sus aliados internacionales se reunieron en Suiza en enero para una segunda ronda de negociaciones políticas conocida como Ginebra II, las reuniones no dieron ningún resultado tangible y desde entonces las negociaciones no se han reanudado.

También, los esfuerzos internacionales para garantizar justicia creíble por delitos graves bajo el derecho internacional en las partes enfrentadas en Siria difícilmente han tenido éxito. El 22 de mayo, Rusia y China bloquearon una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que habría referido la situación en Siria a la Corte Penal Internacional (CPI). Más de 100 organizaciones no gubernamentales instaron al Consejo a aprobar la resolución, más de 60 países la copatrocinaron y 13 de los 15 miembros del Consejo votaron a su favor.

Más de 140 naciones han condenado en declaraciones y resoluciones el empleo por parte de Siria de municiones en racimo, incluyendo decenas de estados que no son parte de la Convención sobre Municiones en Racimo. El 18 de diciembre de 2013, la Asamblea General de la ONU adoptó la Resolución 68/182, expresando su “indignación” por la “continuación de las graves violaciones generalizadas y sistemáticas de los derechos humanos” en Siria “incluidos los que entrañan el uso (...) de municiones en racimo”.

Sin embargo, el Consejo de Seguridad adoptó una resolución el 22 de febrero exigiendo el acceso seguro y sin obstáculos de la ayuda humanitaria, incluso a través de las líneas de conflicto y fronteras; que todas las partes pongan de inmediato fin “al uso indiscriminado de armas en zonas pobladas, incluidos disparos de artillería y bombardeos aéreos, como el uso de bombas de barril”; que cesen las prácticas de detención arbitraria, desaparición y secuestro, y que pongan en libertad a todos los que han sido detenidos arbitrariamente.

En vista del continuo incumplimiento por parte del gobierno sirio de la resolución, el 14 de julio, el Consejo aprobó una segunda resolución autorizando directamente a las agencias de Naciones Unidas y sus aliados a que entregaran ayuda humanitaria a través de las fronteras de Siria y las líneas de conflicto. No se han aprobado resoluciones de seguimiento semejantes de cara a los detenidos o los ataques indiscriminados, a pesar de la continua violación de la resolución por todas las partes en conflicto.

Según informes de prensa, en 2014, además de bloquear persistentemente la intervención del Consejo de Seguridad para frenar las violaciones del gobierno sirio, Rusia, junto con el gobierno iraní, siguió prestándole ayuda militar al gobierno sirio.

El 15 de agosto, el Consejo de Seguridad aprobó la resolución 2170, que insta a todos los Estados Miembros a tomar medidas nacionales para detener el flujo de combatientes extranjeros, el financiamiento y las armas a ISIS, Jabhat al-Nusra y cualquier otra persona o grupo asociado con al-Qaeda. También incluyeron a seis individuos de estos grupos en la lista relativa a las sanciones contra al-Qaeda.

En marzo de 2014 el Consejo de Derechos Humanos renovó el mandato independiente de su Comisión Internacional de Investigación sobre Siria por un año.

Los países vecinos de Siria, y principalmente el gobierno turco, han intensificado sus políticas de control de fronteras para limitar el flujo de material bélico y combatientes de estos grupos, pero estas medidas fueron implementadas con un retraso significativo. Estados occidentales que temen que sus ciudadanos estén tratando de entrar en Siria para luchar han intensificado también sus controles de detección y otras medidas en un intento por detener el flujo de combatientes extranjeros.

El 24 de septiembre, el Consejo de Seguridad aprobó la resolución 2178, instando a los Estados a tomar una serie de medidas para combatir el terrorismo, entre ellas, que los Estados establezcan medidas de detección, controles fronterizos eficaces y otras medidas para evitar el reclutamiento, la organización y la circulación de terroristas, incluidos aquellos afiliados a ISIS y al-Qaeda. La resolución también urge a los Estados a que mejoren la cooperación, entablen procesos judiciales, mejoren la asistencia durante esos procesos judiciales y ayuden a construir la capacidad de otros Estados para combatir el terror.

Ciudadanos de Kuwait, Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos también han financiado y apoyado operaciones militares dirigidas por ISIS o Jabhat al-Nusra. A principios de agosto, Kuwait anunció nuevas medidas para frenar la financiación de los extremistas. Esto incluyó la prohibición de cualquier iniciativa de recaudación de fondos en las mezquitas, la exigencia de una mayor transparencia por parte de las organizaciones benéficas sobre el origen y el destino de sus donaciones, y la obtención de recibos oficiales. Arabia Saudita también ha tomado nuevas medidas en 2014, como el anuncio en febrero de un real decreto para encarcelar a ciudadanos saudíes que luchan en el extranjero con grupos terroristas, la prohibición en abril de las donaciones a grupos no autorizados, y la promesa en agosto de US\$100 millones para establecer un centro de contraterrorismo de la ONU.

Unión Europea

El éxito de los partidos populistas y euroescépticos en las elecciones al Parlamento Europeo en mayo en medio de una continua fragilidad económica y política subrayó la necesidad de un fuerte compromiso de la Unión Europea (UE) para la protección de los derechos humanos dentro de sus propias fronteras. En marzo, la Comisión Europea acordó un mecanismo de estado de derecho para situaciones de crisis y, en junio, el Consejo de la Unión Europea respaldó la idea de una estrategia interna de derechos humanos de la UE. Pero la UE, en particular el Consejo, se mostró reacio a presionar a los Estados miembros sobre prácticas abusivas.

Política de inmigración y asilo de la UE

Las directrices estratégicas que el Consejo Europeo adoptó en junio sobre migración y asilo, que avalan al mismo tiempo el respeto de los derechos humanos y la necesidad de una política integral de la UE sobre migración, hicieron hincapié en un control de fronteras mejorado sin prever nuevas medidas para facilitar la migración legal o el acceso seguro al asilo en la UE.

Hasta mediados de noviembre, más de 155.000 personas habían llegado a las costas de la UE: principalmente las de Italia, pero también las de Malta, Grecia, España y Chipre. La operación italiana Mare Nostrum rescató a decenas de miles de personas de barcos en peligro, pero más de 3.000 murieron en el mar desde enero, de acuerdo a una estimación en septiembre de la Organización Internacional para las Migraciones, incluyendo en algunos casos el resultado de acciones deliberadas por parte de contrabandistas. En noviembre, la Agencia de Fronteras de la UE Frontex lanzó una operación más limitada en el Mediterráneo conforme Italia desmantelaba Mare Nostrum.

En julio, entraron en vigor nuevos reglamentos de Frontex que aclaran las obligaciones de búsqueda y rescate, así como los procedimientos para asegurar un rápido desembarque.

Durante todo el año se reportaron devoluciones sumarias, incluso de sirios, por parte de Bulgaria, Grecia y España; así como un uso excesivo de la fuerza por parte de la policía fronteriza de los tres países. Según Eurostat, en el primer semestre de 2014 había casi 122.030 solicitantes de asilo en los Estados miembros de la UE, un 22 por ciento más que en el mismo periodo de 2013.

Las personas que huían de Siria disfrutaron de altas tasas de protección, pero también se enfrentaron a devoluciones al primer país de entrada de la UE, bajo la Convención de Dublín de la UE y en virtud de acuerdos bilaterales de readmisión, sin la debida consideración de las circunstancias individuales, incluida la reunificación

familiar. Catorce países de la UE se ofrecieron a reasentar a 31.817 refugiados sirios vulnerables, con una cuota de Alemania de 25.500, superando las de otros países, aunque en realidad las cifras de los reasentados en el momento de la redacción de este informe eran mucho más pequeñas.

Los solicitantes de asilo fueron acogidos en condiciones deficientes de recepción en varios países, entre ellos Italia, Bulgaria, Grecia y Chipre. Las pésimas condiciones en Bulgaria mejoraron significativamente a principios de año conforme el número de solicitantes de asilo, principalmente de Siria, cayó, aunque las cifras estaban aumentando de nuevo en el momento de escribirse este informe.

En junio, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dijo que la falta de documentos de identidad no puede justificar la prolongación de la detención de los inmigrantes.

En octubre, el Comité de Derechos Humanos de la ONU expresó su preocupación por la extensa y automática detención de migrantes en Malta. Este país continuó deteniendo a niños migrantes cuya edad es objeto de controversia, a pesar de que prometió en marzo poner fin a la detención de niños migrantes.

En enero, el Comité Europeo de Derechos Sociales expresó su preocupación por el acceso a la atención sanitaria de migrantes indocumentados en varios países de la UE, entre ellos España, Bélgica, Bulgaria y Francia. En marzo, la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) expresó su preocupación por la criminalización de la inmigración irregular, y recomendó mejorar el acceso a la justicia para los migrantes indocumentados.

Una propuesta de junio de la Comisión Europea para aclarar la responsabilidad de tramitar las solicitudes de asilo de menores no acompañados se encuentra pendiente de aprobación por parte del Parlamento Europeo y el Consejo en el momento de redactarse este informe.

Discriminación e intolerancia

Los romaníes siguen padeciendo discriminación, exclusión social y carencias en toda la UE, y una encuesta de octubre de la FRA de la UE afirmó que las mujeres romaníes se ven afectadas desproporcionadamente. En diciembre de 2013, el Consejo de la UE hizo recomendaciones para orientar la implementación de estrategias nacionales de integración de los romaníes. En septiembre, la Comisión Europea anunció una acción legal contra la República Checa por no haber eliminado después de muchos años la segregación de los niños romaníes en la escuela.

En enero, el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa (CdE), Nils Muiznieks, advirtió del creciente antisemitismo en Europa. Hubo repetidos incidentes durante el año que justificaron su advertencia, incluyendo un ataque armado en un museo judío en Bruselas que dejó cuatro muertos, así como un aumento en las denuncias de violencia antisemita e incidentes en Francia, Alemania y el Reino Unido. En general, las autoridades respondieron enérgicamente. El presunto atacante del museo estaba siendo juzgado en el momento de escribirse este informe.

El Consejo de la UE adoptó unas conclusiones en diciembre de 2013 que hacían un llamamiento a la creación de un registro, una investigación y el enjuiciamiento adecuado de los crímenes de odio, así como asistencia, apoyo y protección para las víctimas.

El Convenio del Consejo de Europa sobre la prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica (conocido como el Convenio de Estambul) entró en vigor en agosto. En el momento de redactarse este informe, ocho países de la UE lo habían ratificado. En marzo, la FRA publicó los resultados de la primera encuesta en toda la UE sobre la violencia contra las mujeres, en la que una de cada tres mujeres confesaron haber experimentado violencia física y/o sexual desde los 15 años.

Un informe de la FRA de marzo reveló que el miedo a la deportación disuade a los migrantes irregulares de denunciar los delitos ante la policía, ya sea como víctimas o como testigos.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) aprobó en julio la ley francesa de 2010 que prohíbe el velo integral, a pesar de su impacto negativo sobre el derecho de las mujeres a la autonomía personal y la libertad religiosa. En Bélgica y varias ciudades de España existen leyes similares.

La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE) instó en junio a los gobiernos europeos para que abordaran el racismo en la policía, incluso prohibiendo la discriminación racial y ofreciendo formación sobre los controles de identidad. Un informe de diciembre de la FRA hacía recomendaciones similares.

En octubre, los resultados de una encuesta de la FRA sobre la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y transgénero (LGBT) en toda la UE encontraron altos índices de acoso escolar en los colegios y acoso y discriminación contra las personas transgénero y las lesbianas. Los encuestados dijeron que rara vez denuncian estos incidentes a las autoridades.

Una encuesta de mayo de la FRA concluyó que las personas con discapacidad se enfrentan a importantes obstáculos para la participación política, mientras que, en 15 países de la UE, a las personas con discapacidad intelectual o psicosocial bajo tutela legal se les impide ejercer su derecho al voto.

Antiterrorismo

En una resolución de marzo sobre la vigilancia de las comunicaciones, el Parlamento Europeo instó a los Estados miembros de la UE, en particular al Reino Unido, Francia, Alemania, Suecia, Países Bajos y Polonia, a que revisaran las leyes que rigen sus agencias de inteligencia para asegurarse de que están en línea con el CEDH y sujetas a una supervisión eficaz.

En un informe sobre el derecho a la privacidad en la era digital, publicado en julio, el Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos instó a los Estados a llevar a cabo la vigilancia solo si era necesaria y proporcionada.

El TJUE anuló la Directiva de la UE sobre la conservación de datos en abril, al considerar que pedir a los proveedores de telecomunicaciones que retengan datos en masa violaba los derechos a la privacidad.

El TEDH dictaminó en julio que Polonia había sido cómplice de la entrega, detención secreta y tortura de dos sospechosos de terrorismo por parte de la CIA en 2002 y 2003, y no había hecho ningún progreso real en la investigación de los abusos. A pesar de la evidencia creíble de que muchos otros países de la UE, incluyendo Dinamarca, Alemania, Lituania, Macedonia, Rumania, España, Suecia y el Reino Unido, participaron en el programa de entregas de la CIA, solo Italia ha procesado a alguien.

Alemania

En febrero, la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) alertó sobre la elaboración de perfiles étnicos por parte de la policía en Alemania, una respuesta inadecuada del Estado a los delitos con motivos racistas y la discriminación contra las personas LGBT.

Las manifestaciones contra el conflicto en Gaza en julio fueron eclipsadas por las agresiones antisemitas en varias ciudades alemanas. En agosto, el gobierno federal presentó una nueva ley contra los crímenes de odio que incluye los motivos racistas como circunstancia agravante en un proceso penal, en el momento de redactarse este informe la norma estaba pendiente de ser aprobado por el Parlamento.

Los solicitantes de asilo y refugiados protestaron por las condiciones en los centros de acogida y las restricciones a la libertad de circulación durante el año 2014, incluso con huelgas de hambre. En septiembre, la policía inició una investigación por las denuncias de que guardias de seguridad privada abusaban repetidamente de los solicitantes de asilo en un centro de acogida en el estado de Renania del Norte-Westfalia. En el momento de la redacción de este informe, había 34 investigaciones penales abiertas que implicaban acusaciones similares contra guardias de seguridad en 7 de las 20 instalaciones del estado, desde enero de 2013.

El Instituto Alemán de Derechos Humanos expresó su preocupación por un proyecto de ley sobre política de asilo adoptado en septiembre que señala a Bosnia y Herzegovina, Serbia y Macedonia como países de origen seguro, sujetos a procedimientos de asilo acelerados. Al menos tres estados federales siguieron devolviendo a romaníes, ashkalíes y egipcios a Kosovo a pesar de las preocupaciones sobre la discriminación y las medidas inadecuadas de integración a su regreso.

En 2014, continuó el juicio de un presunto miembro de una célula neonazi y cuatro presuntos cómplices acusados de asesinar a nueve inmigrantes y a una mujer policía entre 2000 y 2007.

Varios medios de comunicación indicaron que hubo cooperación entre los gobiernos de Alemania y Estados Unidos en las actividades de vigilancia masiva. Una comisión de investigación formada en marzo está investigando la vigilancia masiva en Alemania.

Croacia

A pesar de introducir limitadas reformas en junio, el sistema de protección sigue negando a aproximadamente 18.000 personas con discapacidad el derecho a tomar decisiones sobre sus vidas. La implementación en 2011 de un plan de desinstitucionalización avanzó lentamente: 554 personas habían hecho la transición a una vida en comunidad, pero hasta septiembre, unas 8.200 seguían institucionalizadas.

La Constitución de Croacia se modificó en diciembre de 2013 tras un referéndum para prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo. En julio, el Parlamento de Croacia aprobó una ley que permitía la unión civil entre parejas del mismo sexo.

En junio, el Tribunal de Derechos Humanos falló que Croacia no había investigado adecuadamente la muerte de un civil serbio muerto a manos de la policía croata durante la guerra de 1991-1995. Los tribunales nacionales todavía tienen que abordar más de 200 casos de crímenes de guerra.

Los serbios continuaron siendo objeto de discriminación: aquellos que fueron despojados de sus derechos de posesión durante la guerra afrontan continuas dificultades para beneficiarse del programa gubernamental de 2010 que permite la compra de propiedades por debajo de los precios del mercado.

El acoso y la discriminación contra los romaníes continúa, los vagabundos romaníes experimentando grandes dificultades para acceder a los servicios públicos básicos, tales como el cuidado de la salud, la asistencia social o la educación.

El sistema de asilo y la migración sigue siendo deficiente. En el primer semestre de 2014 hubo 271 nuevas solicitudes, y 19 personas obtuvieron protección. Los solicitantes de asilo siguen detenidos. Los niños no acompañados son colocados en un hogar residencial para niños con problemas de conducta en Zagreb, sin la tutela adecuada.

España

El gobierno respondió al aumento de intentos de los migrantes y solicitantes de asilo de entrar en los enclaves españoles en Marruecos, Ceuta y Melilla (en este último, un alza de 234 por ciento en comparación con 2013) con un mayor control de las fronteras. Quince personas murieron en febrero cuando intentaban llegar a Ceuta por mar; la Guardia Civil española lanzó pelotas de goma y gases lacrimógenos en su dirección. La investigación judicial sobre las muertes seguía en curso.

En septiembre, un juez en Melilla acusó al jefe de la Guardia Civil local de devoluciones sumarias a Marruecos. Las ONG documentaron expulsiones y el uso excesivo de la fuerza. Varias investigaciones y juicios estaban en curso en España contra varios funcionarios por violencia contra los detenidos en los centros de detención de inmigrantes.

La Comisión Europea, el Consejo de Europa y la ONU expresaron su preocupación por los cambios legales propuestos para formalizar las devoluciones sumarias desde los enclaves a Marruecos. El gobierno anunció en noviembre que crearía puestos fronterizos donde los solicitantes de asilo podrían registrarse.

Una oposición generalizada obligó al gobierno a abandonar, en septiembre, un proyecto de ley que habría restringido el acceso al aborto seguro y legal. El gobierno indicó que buscaría cambios para pedir el consentimiento de los padres para jóvenes de 16 y 17 años.

Los proyectos de ley para modificar el Código Penal y crear una nueva ley de seguridad pública, bajo examen en el Parlamento en el momento de redactarse este informe, causaron preocupación por la interferencia con los derechos a un juicio justo y los derechos de reunión pacífica y libertad de expresión. En octubre, el TEDH falló dos veces contra España por no investigar eficazmente las denuncias de malos tratos durante la detención incomunicada y respaldó las recomendaciones del CPT a España para permitir el acceso a un abogado desde el momento de la detención y el examen médico realizado por un médico de su elección.

En septiembre los datos mostraron que los desalojos hipotecarios siguen siendo un grave problema, exponiendo a las personas vulnerables a una vivienda insegura y una importante deuda, y el gobierno anunció una extensión de la moratoria sobre los desalojos sin ampliar criterios específicos. El TJUE dictaminó en julio, por segunda vez en dos años, que las inadecuadas salvaguardas de España contra las injustas cláusulas hipotecarias violan el derecho de la UE.

En informes separados en julio, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU y el relator especial sobre la promoción de la verdad y la justicia de la ONU criticaron las reformas de marzo que limitaban la capacidad de los tribunales para enjuiciar a los sospechosos de crímenes internacionales graves cometidos fuera de España. Ambos hicieron recomendaciones para garantizar la rendición de cuentas por los crímenes de la época de Franco, incluso haciendo de la desaparición forzada un crimen nacional. En octubre, un tribunal militar procesó a cinco militares por la tortura de dos presos iraquíes en Irak en 2004.

España ratificó el Convenio de Estambul en abril; al momento de escribirse este informe continuaba revisando la legislación nacional existente sobre violencia doméstica. A finales de agosto, 28 mujeres habían sido asesinadas por su pareja desde el inicio del año.

De acuerdo con el Consejo General del Poder Judicial español, el número de personas con discapacidad despojadas de su capacidad jurídica aumentó un 172 por ciento entre 2005 y 2013.

Francia

El gobierno no promulgó reformas de peso para hacer frente a los controles abusivos por parte de la policía, incluyendo los perfiles étnicos. En enero entró en vigor un nuevo código de ética de la policía que requería el uso de fórmulas de cortesía, pero que apenas proporcionaba directrices sobre el uso de cacheos.

Los desalojos de romaníes que vivían en asentamientos informales continuaron: los grupos de derechos informaron que 10.355 personas habían sido desalojadas entre enero y septiembre de 2014, la mayoría de los cuales no tenían una vivienda alter-

nativa adecuada. En septiembre, el comisario de derechos humanos del Consejo de Europa instó a Francia a poner fin a este tipo de desalojos forzosos. Un plan interno de la policía para desalojar sistemáticamente a los romaníes que vivían en las calles del sexto distrito de París se filtró a la prensa en abril. Posteriormente, el gobierno anunció que había sido rectificado.

En junio, un niño romaní de 16 años de edad fue gravemente golpeado y abandonado inconsciente en un carrito de compras en un suburbio de París. Una investigación penal sobre el intento de homicidio, secuestro y detención por parte de un grupo organizado estaba en curso en el momento de redactarse este informe, pero todavía no se había llevado a cabo ningún arresto.

Cientos de migrantes y solicitantes de asilo fueron desalojados de campamentos informales alrededor de zona de Calais en mayo y julio. En la mayoría de los casos, las autoridades no proporcionaron ningún tipo de alojamiento alternativo adecuado.

El Parlamento aprobó una nueva ley de igualdad de género en julio con medidas para fomentar el permiso de paternidad, proteger a las víctimas de la violencia doméstica y garantizar la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres. La nueva ley también elimina el requisito de que las mujeres que opten por abortar estén “en peligro”.

En julio, el gobierno prohibió varias manifestaciones pro-palestinas y una manifestación pro-israelí por motivos de orden público, vulnerando el derecho a la libertad de expresión y de reunión. En julio, un restaurante kosher en París fue atacado. En la cercana Sarcelles, una tienda kosher y una farmacia de propiedad judía fueron incendiadas, en medio de los disturbios que estallaron tras la prohibición de una manifestación pro-palestina. Una decena de personas habían sido condenadas o estaban bajo investigación por la violencia en Sarcelles en el momento de la redacción de este informe, incluido un hombre condenado a cuatro años de cárcel en octubre por el incendio de la tienda kosher, saqueos y el ataque a agentes de policía. También en julio, la policía detuvo a un hombre por un intento de ataque incendiario contra un centro cultural judío en Toulouse.

En julio, el gobierno propuso un nuevo proyecto de ley de asilo para aumentar los servicios de alojamiento para los solicitantes de asilo, dar un efecto suspensivo a todas las apelaciones contra las denegaciones de asilo y acelerar el proceso de asilo. También propuso una nueva ley de inmigración que permite a las autoridades francesas prohibir a los ciudadanos de otros países de la UE viajar dentro de Francia por un máximo de tres años si son considerados una amenaza para un “interés fundamental de la sociedad” o un “abuso de la ley”, una iniciativa que parece apuntar a los romaníes. Ambos proyectos de ley estaban ante el Parlamento en el momento de escribirse este informe.

En noviembre, el Parlamento aprobó una ley antiterrorista que prohíbe a la gente viajar al extranjero si existe la sospecha de que vaya a participar en actividades terroristas, o suponen una amenaza para la seguridad pública a su regreso; crea un delito de “empresa terrorista individual”, y permite a las autoridades requerir a los proveedores de servicios de Internet que bloqueen sitios web que inciten o promuevan el terrorismo.

En octubre, un hombre murió durante una manifestación contra la construcción de una presa en la zona de Tarn. Su muerte parecía haber sido causada por una granada de aturdimiento lanzada por los gendarmes. Una investigación estaba en curso en el momento de redactarse este informe.

En su informe anual publicado en abril, la Comisión Nacional Consultiva sobre Derechos Humanos encontró un generalizado y creciente prejuicio contra los romaníes y, por tercer año consecutivo, un aumento de ataques y amenazas contra los musulmanes.

Una ley de diciembre de 2013 que permite una vigilancia gubernamental a las comunicaciones de largo alcance, vulnerando el derecho a la intimidad, generó poco debate público.

Grecia

En un informe publicado en marzo, el experto independiente de la ONU sobre deuda externa y derechos humanos advirtió que el impacto de las medidas de austeridad en Grecia había sido particularmente grave entre los más vulnerables. Amanecer Dorado se estableció como el tercer partido más popular del país, con un 9,4 por ciento de los votos en las elecciones al Parlamento Europeo del mes de mayo.

Los ataques a inmigrantes y solicitantes de asilo y personas LGBT continuaron; una red de organizaciones no gubernamentales (ONG) denunciaron más de 400 incidentes en los últimos tres años.

Un decreto ministerial aprobado en junio introdujo el permiso de residencia por razones humanitarias a víctimas indocumentadas y testigos de crímenes de odio. En septiembre, un inmigrante egipcio gravemente herido en un atentado en 2012 se convirtió en la primera persona en recibir este permiso.

En septiembre, una ley anti-racismo de mejora de la respuesta del Estado a los crímenes de odio y de eliminación de obstáculos a la justicia para las víctimas de ataques racistas entró en vigor, pero las medidas que criminalizan los discursos de incitación plantearon preocupaciones de libertad de expresión.

En abril, dos hombres fueron condenados a cadena perpetua por el asesinato en Atenas en enero de 2013 de un trabajador paquistaní. El tribunal no clasificó el crimen como un acto motivado por cuestiones raciales.

Se espera que el juicio sobre el asesinato en septiembre de 2013 del rapero antifascista Pavlos Fyssas por parte de un presunto miembro de Amanecer Dorado comience antes de fin de año.

En el momento de escribirse este informe, se habían presentado cargos penales contra 70 sospechosos, incluidos todos los miembros parlamentarios de Amanecer Dorado y varios funcionarios de alto rango del partido, por la creación y participación en una organización criminal.

En julio, dos de los cuatro hombres acusados del tiroteo en 2013 contra 28 migrantes recolectores de fresas fueron absueltos, entre ellos el dueño de la finca. En octubre, la Corte Suprema decidió que el caso no debería ser juzgado de nuevo. Los abogados de las víctimas dijeron que apelarían ante el TEDH.

El aumento de la seguridad a lo largo de la frontera terrestre con Turquía coincidió con un incremento del número de migrantes y solicitantes de asilo, muchos de ellos sirios, en busca de acceso a través de las islas del mar Egeo. En octubre, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) advirtió que la situación en las islas se estaba convirtiendo en una crisis. Las travesías marítimas fueron la causa de al menos 40 muertes. Hubo continuas denuncias de que los guardias fronterizos griegos llevaron a cabo expulsiones colectivas y devoluciones de migrantes y solicitantes de asilo en las fronteras con Turquía.

En agosto, el Comisario de derechos humanos del Consejo de Europa expresó su preocupación por el archivo de un incidente en enero de 2013 en el que 12 mujeres y niños murieron en la isla griega de Farmakonisi, en lo que los supervivientes describieron como una operación de devolución en malas condiciones meteorológicas.

El Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria, en junio, y la FRA en diciembre de 2013, criticaron los controles abusivos durante la operación policial Xenios Zeus contra migrantes irregulares. En julio, el gobierno puso en marcha la operación policial Theseus contra drogodependientes, trabajadores sexuales y migrantes irregulares en el centro de Atenas.

El TEDH encontró a Grecia responsable de tratos inhumanos y degradantes en la detención de inmigrantes en ocho casos diferentes desde diciembre de 2013. En mayo, un tribunal de Atenas dictaminó que la decisión del gobierno en febrero de permitir la detención de migrantes más allá de los 18 meses permitidos por la legislación de la UE violaba el derecho nacional e internacional.

En un informe de octubre, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT) calificó como “totalmente inaceptables” las condiciones en las que son detenidos los inmigrantes irregulares en las instalaciones policiales por periodos prolongados.

A pesar de las mejoras en el sistema de asilo y el aumento significativo de las tasas de protección en Grecia, los solicitantes de asilo bajo el marco del antiguo sistema todavía se enfrentan a un retraso estimado de 45.000 casos. El acceso al asilo fuera de Atenas y en situación de detención siguió siendo difícil.

En enero, un hombre fue condenado a 10 meses de prisión, suspendido durante tres años, por gestionar un perfil de Facebook satírico que se burlaba de un monje ortodoxo griego fallecido.

Hungría

El estado de derecho y los derechos humanos siguieron deteriorándose aún más en 2014. El partido gobernante renovó su mandato en abril con una mayoría de dos tercios en el Parlamento unicameral de Hungría. En un discurso a la etnia húngara de Ru-

manía a finales de julio, el primer ministro, Viktor Orban, declaró su deseo de acabar con la democracia liberal en Hungría. Hubo nuevas presiones sobre los medios de comunicación y la sociedad civil.

El Tribunal Constitucional dictaminó en mayo que los operadores de sitios web eran responsables de los comentarios en las publicaciones de los blogs o comentarios de noticias que violan la ley de medios, obstaculizan la libertad de expresión, el debate público, o la libertad en Internet.

En una sentencia de junio, la Corte Suprema sostuvo que ATV, un canal de televisión crítico con el gobierno, había violado las restricciones sobre comentarios de la ley de medios describiendo el partido Jobbik como de “extrema derecha” en un noticiero. Ese mismo mes, el editor en jefe de Origo, un sitio web independiente de noticias, fue despedido después de publicar un artículo sobre la presunta malversación de fondos públicos del jefe de gabinete del primer ministro.

Neelie Kroes, entonces vicepresidenta de la Comisión Europea, afirmó en julio que un impuesto a la publicidad, adoptado en junio, muestra que los medios de comunicación libres y plurales están amenazados en Hungría. El impuesto afecta principalmente a RTL Klub, uno de los pocos canales de televisión independientes que quedan en el país.

La sociedad civil estuvo bajo presión en junio, cuando el Tribunal de Cuentas llevó a cabo inspecciones sorpresa de tres organizaciones no gubernamentales que administran dinero de donantes extranjeros, y el gobierno publicó una lista desprestigiando a otras 13 ONG receptoras, incluidos destacados grupos defensores de derechos, calificándoles como “de izquierdas” y “problemáticos”.

En septiembre, la policía realizó una redada en dos ONG que repartían subvenciones, incautando portátiles, documentos y servidores. En octubre, el Tribunal de Cuentas publicó un informe de su auditoría de las cuatro ONG que administraban subvenciones y otras 55 que las recibían, alegando fraude, malversación de activos y otras irregularidades financieras. En el momento de escribirse este informe, estaban abiertas al menos dos investigaciones penales sobre las presuntas irregularidades financieras.

El presidente estadounidense, Barack Obama, nombró a Hungría en un discurso en septiembre en referencia a la presión sobre la sociedad civil. Por el contrario, las instituciones de la UE se mostraron reacias a hablar sobre el tema.

Hasta noviembre de 2014, 234 personas sin hogar habían sido acusadas de delitos menores bajo un decreto local que prohíbe a las personas sin hogar residir de manera habitual en los espacios públicos. En el momento de redactarse este informe, no había informes de que personas sin hogar fueran encarceladas.

Los romaníes siguen sufriendo discriminación y acoso. En mayo, una casa de romaníes en el noreste de Hungría fue atacada con dos bombas de gasolina. Nadie resultó herido, y la policía seguía investigando el suceso en el momento de redactarse este informe. Dos familias romaníes fueron desalojadas en una campaña de desalojo más amplia por el gobierno local de la ciudad de Miskolc que afectó a unos 923 romaníes.

Hungría firmó el Convenio de Estambul en mayo, pero aún tenía que ratificarlo en el momento de escribirse este informe. En septiembre, el Tribunal de Derechos Humanos mantuvo su fallo de abril al considerar que Hungría violaba la libertad de religión y de asociación al arrebatarles a los grupos religiosos su condición de iglesias en 2010.

Italia

Entre enero y noviembre, más de 155.000 personas llegaron a Italia por mar, y muchas de ellas fueron rescatadas en el Mediterráneo por la marina italiana. Mientras que muchos continuaron su viaje a otros países de la UE, hasta octubre más de 44.000 personas habían solicitado asilo en Italia, en medio de preocupaciones sobre las malas condiciones de acogida, en aproximadamente unos 200 refugios de emergencia.

El gobierno aumentó a 13.000 las plazas en centros de acogida especializados. Las tensiones estallaron en algunas comunidades que albergaban estos centros de acogida, como en Roma en noviembre, cuando las autoridades retiraron a 45 niños migrantes de un centro después de que los vecinos del barrio protestaran violentamente. El TEDH dictaminó en noviembre que Suiza no podía devolver un familia afgana solicitante de asilo a Italia debido al riesgo de arreglos inadecuados de acogida, sobre todo para los niños.

En octubre, el Parlamento redujo el tiempo máximo de detención de inmigrantes de 18 a 3 meses. A lo largo del año, los detenidos en esos centros habían protestado por las condiciones y la duración de la estancia.

La entrada y la estancia en el país sin documentos fueron despenalizadas en abril, aunque sigue constituyendo una infracción administrativa.

En octubre, el TEDH falló contra Italia por su práctica de devolver sumariamente a migrantes a Grecia sin hacer una evaluación individual de las necesidades de protección y a pesar del riesgo de convertirse en víctimas de tratos inhumanos y degradantes a su regreso.

Se produjeron varios episodios de violencia xenófoba a lo largo del año. En marzo, la policía intervino pero sin arrestar a nadie durante los ataques de más de dos días contra un asentamiento informal romaní en Nápoles, que motivó su evacuación. Ocho hombres fueron a juicio en septiembre por el ataque con bombas incendiarias por motivos raciales contra un campamento de romaníes en Turín, en diciembre de 2011. Un joven de 17 años que golpeó a una persona sin hogar paquistaní hasta causarle la muerte en Roma en septiembre fue acusado de homicidio, pero la policía descartó una motivación racista.

La Comisión Europea inició una acción legal contra Italia en 2014 por su segregación discriminatoria de los romaníes en campamentos oficiales deficientes. Los romaníes que viven en asentamientos informales fueron objeto de desalojos en serie.

En julio, el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU instó a que se tomaran medidas con urgencia para poner fin a la encarcelación excesiva y el uso desproporcionado de la prisión preventiva contra los extranjeros y romaníes. El

hacinamiento en las cárceles siguió siendo un problema a pesar de las medidas, incluidas las reformas adoptadas en junio, para reducir las sentencias y recurrir con más frecuencia a alternativas a la detención.

La muerte a tiros en Nápoles de un joven de 17 años de edad, Davide Bifulco, a manos de un soldado en septiembre reavivó las preocupaciones sobre el uso excesivo de la fuerza. En octubre, un tribunal de apelaciones absolvió a seis médicos, tres enfermeras y tres funcionarios penitenciarios por la muerte de Stefano Cucchi en 2009. Los fiscales alegaron que el personal médico no trató las lesiones que sufrió tras haber sido golpeado bajo custodia. Un tribunal inferior había condenado a cinco de los doctores por homicidio involuntario en 2013 y absuelto a los otros.

Países Bajos

Tras las críticas de los partidos políticos y las organizaciones de derechos, el gobierno holandés abandonó en abril sus planes para tipificar como delito la estancia irregular.

Decenas de solicitantes de asilo cuya solicitud había sido rechazada continuaron viviendo en condiciones degradantes ocupando edificios abandonados en Ámsterdam. Muchos procedían de países a los que no podían ser devueltos en condiciones de seguridad, como Somalia y Eritrea. El gobierno no les proporcionó ningún tipo de apoyo.

En julio, el Comité Europeo de Derechos Sociales concluyó que la Carta Social Europea exigía el gobierno holandés proporcionar refugio, ropa y alimento a los migrantes irregulares en riesgo de indigencia. En el momento de redactarse este informe, el gobierno aún no había puesto en práctica la decisión.

En abril, el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU instó al gobierno holandés a garantizar que el procedimiento de apelación de solicitudes de asilo rechazadas incluya un examen sustantivo, que evalúe incluso cualquier riesgo de desaparición forzada a su regreso.

Una ley que permite a las personas transexuales cambiar su sexo en sus documentos de identidad desde los 16 años sin tener que someterse a una cirugía de reasignación de sexo entró en vigor en julio. Los solicitantes deben presentar una declaración de un experto médico afirmando su convicción permanente de pertenecer a otro sexo.

En un informe publicado en octubre, el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa criticó el uso extensivo de la detención de migrantes y solicitantes de asilo.

En noviembre, el Consejo de Estado, el más alto tribunal administrativo, dictaminó que los somalíes no podían ser deportados a Somalia bajo el argumento de que tales deportaciones no podían llevarse a cabo en un plazo razonable de tiempo.

En julio, el Grupo de Trabajo de Expertos sobre las Personas de Descendencia Africana de la ONU expresó su preocupación por la discriminación racial por parte de la policía holandesa. Los expertos acogieron con satisfacción el debate sobre el “Piet Negro” (Zwarte Piet), una figura tradicional de la celebración de Sinterklaas y pidieron que los medios de comunicación adoptasen un tono respetuoso durante las discusiones.

En agosto y septiembre el gobierno propuso revocar la ciudadanía holandesa de las personas con doble nacionalidad enrolados en un grupo terrorista, pero no condenados por un delito penal, y de aquellos condenados por diversos delitos relacionados con el terrorismo. Ninguna de las propuestas habían sido adoptadas en el momento de escribirse este informe.

Polonia

La investigación de seis años sobre el centro de detención secreto de la CIA en Polonia continuó en medio de las críticas y la falta de transparencia. En septiembre, la Fiscalía de Cracovia solicitó una prórroga de cuatro meses. En octubre, el gobierno presentó un recurso contra la sentencia del TEDH sobre este tema. En marzo, los fiscales polacos se negaron a reconocer a un ciudadano de nacionalidad saudí detenido en Guantánamo como una víctima en la investigación pendiente.

En un informe de junio, el CPT advirtió sobre un significativo número de denuncias de malos tratos bajo custodia policial, y exhortó al gobierno a reforzar las salvaguardas contra estos abusos.

En marzo, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU expresó su preocupación por el escaso número de casos de crímenes de odio llevados ante los tribunales, a pesar de registrarse un alza en los incidentes.

Un cambio en enero al código penal permitió a los directores de prisiones solicitar órdenes de detención para presos de larga duración que se consideran una amenaza a la vida, la salud o la libertad sexual de los demás. Existe la preocupación entre la sociedad civil de que la ley cree una forma de detención preventiva y permita la detención a largo plazo de personas después de que hayan cumplido sus condenas.

Hubo presión en mayo para acotar la ya de por sí restrictiva ley del aborto de Polonia, cuando más de 3.000 personas, en su mayoría profesionales de la medicina, firmaron una “declaración de fe” contra el aborto y otros servicios de salud reproductiva.

Una llamada cláusula de conciencia en Polonia permite que los profesionales médicos se nieguen a llevar a cabo un aborto si entra en conflicto con su fe. En junio, el entonces primer ministro, Donald Tusk, dijo que el personal médico debe poner la obligaciones legales con respecto al paciente por encima de sus creencias personales.

Tras su revisión de Polonia en octubre, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer recomendó el establecimiento de condiciones menos restrictivas y normas claras para el aborto legal y recursos efectivos para impugnar la denegación de aborto.

Reino Unido

El gobierno no cumplió su promesa de una nueva investigación independiente dirigida por un juez sobre la participación del Reino Unido en ejecuciones y su complicidad en torturas cometidas en el extranjero. En diciembre de 2013 el gobierno anunció que la investigación se llevaría a cabo por el Comité de Inteligencia y Seguridad (ISC), un órgano parlamentario que carece de plena independencia del gobierno pero ha fracasado repetidamente a la hora de ejercer una supervisión eficaz de los servicios de seguridad.

La ley que permite el matrimonio del mismo sexo en Inglaterra y Gales entró en vigor en marzo. En Escocia, la ley fue aprobada en marzo y se espera que entre en vigor en diciembre.

Un proyecto de ley promovido por el gobierno para combatir la esclavitud moderna, que en el momento de escribirse este informe se encontraba ante el Parlamento, incluye salvaguardas inadecuadas contra el abuso de los trabajadores domésticos migrantes por parte de sus empleadores. En abril, un comité parlamentario instó al gobierno a restablecer la capacidad de los trabajadores domésticos migrantes en el Reino Unido de cambiar de empleador, tras haber constatado que un visado que les ata a un empleador “institucionaliza su abuso”.

Durante una visita en abril, a la relatora especial de la ONU sobre la violencia contra la mujer, Rashida Manjoo, se le prohibió entrar en el centro de expulsión de inmigrantes de Yarl’s Wood, donde están detenidos migrantes y solicitantes de asilo, en su mayoría mujeres. En su informe inicial, Manjoo destacó el impacto de los recortes sobre el acceso a la justicia y la asistencia legal para las mujeres víctimas de violencia.

La Corte Penal Internacional (CPI) anunció en mayo un examen preliminar de las denuncias de abusos sistemáticos de los detenidos por las fuerzas armadas británicas en Irak entre 2003 y 2008.

En julio, el Tribunal Supremo dictaminó que el procedimiento acelerado de “detención por la vía rápida” niega a los solicitantes de asilo la representación legal necesaria para preparar sus casos con eficacia. Grupos de derechos acusaron al sistema de poner a las personas en riesgo de ser expulsadas a países donde corren peligro de persecución, tortura u otros malos tratos.

En julio, el Parlamento aprobó una legislación de emergencia que renovaba los poderes del gobierno para recopilar datos sobre las comunicaciones de millones de personas, lo que contradice la sentencia de abril del TJUE sobre la retención masiva de datos. La ley también amplió los poderes de vigilancia del Reino Unido extraterritorialmente. En noviembre, el gobierno reveló la existencia de políticas que permiten

a las agencias de inteligencia del Reino Unido interceptar las comunicaciones confidenciales entre abogado y cliente por razones de seguridad nacional.

Una ley aprobada en julio permite al gobierno revocar la ciudadanía de ciudadanos naturalizados del Reino Unido si se involucran en terrorismo u otras acciones “gravemente perjudiciales para los intereses vitales” del Reino Unido, incluso si eso les convierte en apátridas. En noviembre, el gobierno publicó un proyecto de ley para prohibir a las personas sospechosas de haber participado en actos de terrorismo en el extranjero regresar al Reino Unido durante dos años y permitir que la policía confisque los pasaportes de aquellos sospechosos de viajar al extranjero para unirse a grupos armados.

Una ONG registró un aumento de incidentes antisemitas de enero a junio, en comparación con el mismo periodo de 2013, incluidas agresiones violentas, daños, profanación de la propiedad y amenazas. En Londres, la Policía Metropolitana registró un aumento del 92,8 por ciento en los delitos antisemitas en los 12 meses previos a octubre de 2014.

Según estadísticas oficiales, hubo 88 suicidios en las prisiones entre abril de 2013 y marzo de 2014, un aumento del 69 por ciento en comparación con los 12 meses anteriores, y la cifra más alta en una década.

Política exterior

La UE siguió siendo uno de los mayores donantes de ayuda humanitaria a la crisis siria. En marzo, los ministros de Exteriores de la UE expresaron finalmente un claro apoyo de la UE para remitir la situación de Siria a la Corte Penal Internacional. Sin embargo, la Alta Representante de la UE perdió la oportunidad de involucrar a todo el marco de la UE con una estrategia sobre la mejor manera de conseguir un apoyo global fuerte para una remisión al Consejo de Seguridad de la ONU.

En marzo, Xi Jinping hizo su primera visita a Bruselas como presidente de China. Durante esta visita, los líderes de la UE, entre ellos el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, eludieron su obligación de plantear públicamente su preocupación por la reducción del espacio para los defensores de los derechos en China.

En mayo, los ministros de Exteriores de la UE adoptaron la directrices de la UE sobre libertad de expresión en línea y fuera de línea, sumadas a las Directrices sobre Derechos Humanos de la UE. Las recomendaciones, que incluyen compromisos y objetivos específicos, se han diseñado para permitir que la UE promueva y proteja mejor la libertad de expresión en todo el mundo.

Los 28 estados miembros de la UE se solidarizaron con una declaración conjunta liderada por Suiza sobre la situación de los derechos humanos en Bahréin, pronunciada en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en junio. La declaración pedía a las autoridades de Bahréin que liberara a todos los individuos “encarcelados únicamente por el ejercicio de los derechos humanos” en el país. En respuesta al apoyo de la UE a la declaración, el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) canceló la reunión ministerial UE-CCG que estaba programada para que tuviera lugar a finales de junio.

Coincidiendo con el décimo aniversario de la adopción de las directrices de la UE sobre Defensores de Derechos Humanos, los ministros de Exteriores de la UE adoptaron unas conclusiones que reiteran su firme apoyo a los defensores de los derechos humanos. Sin embargo, a lo largo de 2014, la respuesta de la UE a la ofensiva contra los defensores de los derechos humanos y activistas de todo el mundo fue inconsistente. Respuestas fuertes, como la condena por parte de la UE a la pena de cadena perpetua dictada al erudito Uighur, Ilham Tohti, en China, fueron la excepción y no la norma.

Se emitieron numerosas declaraciones débiles en respuesta a la detención de defensores de los derechos principales en países como Azerbaiyán y Burundi. Mientras que la UE apoyó la declaración conjunta sobre Bahréin mencionada antes, la Alta Representante de la UE y los Estados miembros de la UE no lograron alcanzar ninguna estrategia significativa, como pedía el Parlamento Europeo, para asegurar la liberación de los activistas bahreiníes detenidos, dos de ellos con ciudadanía de la UE.

La UE siguió siendo uno de los actores internacionales más vocales a la hora de criticar a Israel por sus actividades ilegales de asentamiento. Las directrices de la UE que excluyen a los asentamientos judíos en Cisjordania de los proyectos financiados por la UE entraron en vigor el 1 de enero. Bajo estas directrices, la UE solo dará “subvenciones, premios y otros instrumentos financieros [préstamos]” a las entidades israelíes que no operen en los territorios palestinos ocupados y prometan no gastar allí el dinero.

A pesar de que la UE es un firme defensor de la CPI y de la rendición de cuentas por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, algunos Estados miembros siguieron presionando a Palestina para que no solicitara el acceso a la CPI. El 22 de julio, los ministros de Exteriores de la UE aparentemente advirtieron a los palestinos contra la CPI, solicitando al liderazgo palestino que usen “constructivamente su estatus en Naciones Unidas y que no emprendan pasos que le alejasen de una solución negociada”. La misma declaración reconoció que la continua expansión de asentamientos de Israel, la violencia de los colonos, los desalojos, el traslado forzoso de los palestinos y las demoliciones (incluyendo las de proyectos financiados por la UE) ponían en riesgo la irreversible “pérdida de la solución de los dos Estados”. Una casi total impunidad por los graves crímenes internacionales en el conflicto palestino-israelí siguió alimentando los abusos por todas las partes implicadas.

La UE impuso medidas restrictivas contra Rusia en respuesta a su ocupación de Crimea en marzo, el apoyo a los separatistas violentos y la interferencia en el este de Ucrania. Las sanciones se dirigen a personas y los sectores estatales de las finanzas, la energía y las armas de Rusia. En septiembre, el Parlamento Europeo dio su consentimiento a un Acuerdo de Asociación entre la UE y Ucrania.

La UE siguió desempeñando un papel de liderazgo en ciertas resoluciones de países en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y la Asamblea General de la ONU, incluyendo aquellas sobre Belarús, Corea del Norte y Birmania, garantizando la continuidad de importantes mecanismos de información de Naciones Unidas para los tres países. Pero la UE no asumió un papel de liderazgo en colocar en la agenda

de los foros multilaterales las nuevas crisis de derechos humanos, como la reciente represión en Egipto o la situación en Uzbekistán.

El Parlamento Europeo concedió el Premio Sajarov a la Libertad de Conciencia de 2014 al doctor Denis Mukwege de la República Democrática del Congo por su lucha a favor de las supervivientes de la violencia sexual.

En agosto, la ministra de Relaciones Exteriores de Italia, Federica Mogherini, fue nombrada como la próxima Alta Representante de la UE para la Seguridad y la Política Exterior, en una reunión de líderes de la UE en Bruselas. Mogherini, que es también vicepresidenta de la Comisión Europea, tomó posesión de su cargo en noviembre.

Venezuela

En 2014, miembros de las fuerzas de seguridad emplearon fuerza excesiva contra manifestantes mayormente pacíficos, muchos de los cuales fueron detenidos arbitrariamente, sufrieron violentas golpizas y otros abusos durante su detención, y fueron privados de garantías básicas del debido proceso. Estas violaciones de derechos humanos, que se produjeron a lo largo de varias semanas en distintos lugares, fueron perpetradas de manera sistemática por miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas.

Durante el liderazgo del Presidente Chávez y del actual Presidente Nicolás Maduro, la acumulación de poder en el ejecutivo y el deterioro de las garantías de derechos humanos han permitido que el gobierno intimide, censure y enjuicie a sus críticos. Si bien algunos venezolanos todavía expresan críticas al gobierno, las perspectivas de sufrir represalias —a través de acciones estatales arbitrarias o abusivas— han socavado la independencia judicial y obligado a periodistas y defensores de derechos humanos a medir las consecuencias de publicar información u opiniones críticas sobre el gobierno.

Los abusos policiales, las condiciones deficientes en centros penitenciarios y la impunidad de los abusos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad continúan siendo problemas graves.

Uso excesivo de la fuerza contra manifestantes que no estaban armados

Desde febrero de 2014, miembros de fuerzas de seguridad venezolanas —incluida la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana y fuerzas policiales de los estados— han empleado rutinariamente un uso ilegítimo de la fuerza contra manifestantes que no estaban armados y contra transeúntes. Los abusos incluyeron severas golpizas; disparos con armas de fuego, perdigones y gases lacrimógenos, de manera indiscriminada, contra multitudes y, en algunos casos, disparos deliberados de perdigones a quemarropa contra personas que no estaban armadas y ya se encontraban detenidas. Integrantes de las fuerzas de seguridad también toleraron que pandillas armadas partidarias del gobierno atacaran impunemente a manifestantes, y a veces incluso colaboraron de manera directa con estas. Según el Ministerio Público, 3.306 personas fueron detenidas durante las manifestaciones, incluidos 400 adolescentes.

En muchos casos las personas detenidas permanecieron incomunicadas en bases militares durante 48 horas o períodos mayores antes de ser llevadas ante un juez. Durante la detención, sufrieron una variedad de abusos que incluyeron violentas golpizas, descargas eléctricas o quemaduras, y ser obligados a mantenerse en cuclillas o arrodillados, sin moverse, durante varias horas. En algunos casos, los maltratos constituyeron tortura.

Independencia judicial

Desde que el ex Presidente Chávez y sus partidarios en la Asamblea Nacional llevaron a cabo en 2004 un copamiento político del Tribunal Supremo de Justicia, el poder judicial en gran medida ha dejado de actuar como un poder independiente del gobierno. Miembros del Tribunal Supremo de Justicia han rechazado abiertamente el principio de separación de poderes, han expresado públicamente su compromiso con promover la agenda política del gobierno y reiteradamente emitieron sentencias a favor de este, avalando así la indiferencia del gobierno por los derechos humanos.

La Jueza María Lourdes Afiuni continúa siendo investigada penalmente como consecuencia de una decisión dictada en 2009, en la cual concedió la libertad condicional a un crítico del gobierno. Si bien la decisión de Afiuni daba cumplimiento a una recomendación emitida por organismos internacionales de derechos humanos —y era consistente con el derecho venezolano— un juez provisorio que había declarado públicamente su lealtad al Presidente Chávez dispuso que se llevara a cabo un juicio penal en su contra, acusándola de haber cometido los delitos de corrupción, abuso de autoridad y “favorecimiento para la evasión”. Hasta hoy, se le prohíbe realizar cualquier tipo de declaración pública sobre su causa.

Durante las manifestaciones que se desarrollaron en 2014, algunos funcionarios judiciales incumplieron su rol de garantes frente a abusos de poder y, en lugar de ello, participaron en graves violaciones del debido proceso. A decenas de víctimas se les negó el acceso a abogados hasta minutos antes de las audiencias judiciales, que a menudo se programaron a altas horas de la noche. Jueces y fiscales en reiteradas ocasiones hicieron caso omiso a evidencias que sugerían que los detenidos habían sufrido abusos físicos, o que miembros de las fuerzas de seguridad les habían colocado pruebas para incriminarlos.

Algunos funcionarios judiciales también adoptaron medidas sobre la base de señalamientos infundados del gobierno de que sus adversarios políticos eran responsables de la violencia que surgió durante las manifestaciones. El gobierno acusó Leopoldo López, un líder de la oposición, de ser el “autor intelectual” de las muertes relacionadas con las protestas y los ataques contra oficinas y vehículos públicos ocurridos el 12 de febrero. El Ministerio Público actuó rápidamente para conseguir su arresto por varios presuntos delitos. López permanece detenido en una prisión militar desde que se entregó voluntariamente el 18 de febrero. Durante el juicio, que comenzó en julio, la jueza a cargo no ha permitido que sus abogados presenten pruebas para su defensa.

En abril, el Tribunal Supremo de Justicia juzgó en forma sumaria y condenó a dos alcaldes opositores a 10 y 12 meses de prisión, respectivamente, en procesos judiciales que no respetaron garantías básicas de debido proceso, incluido el derecho a apelar toda condena penal.

Libertad de expresión

Durante la última década, el gobierno ha ampliado y ejercido en forma abusiva sus potestades de regular los medios de comunicación. Si bien algunos periódicos y

estaciones de radio expresan críticas al gobierno, la autocensura por temor a represalias es un problema grave.

En 2010, la Asamblea Nacional reformó la Ley Orgánica de Telecomunicaciones para concederle al gobierno la facultad de suspender o revocar concesiones de transmisión de medios privados cuando “lo juzgue conveniente a los intereses de la Nación”. La Asamblea Nacional también amplió a Internet el alcance de una ley de medios de contenido restrictivo, permitiendo la suspensión arbitraria de sitios web en el supuesto de “incitación”, una infracción definida de manera imprecisa. Diversas reformas anteriores del Código Penal habían ampliado el alcance y la severidad de las leyes de difamación que penalizan las expresiones que se consideren ofensivas para funcionarios gubernamentales de alto rango.

El gobierno ha adoptado medidas enérgicas para reducir la disponibilidad de medios de comunicación que ofrezcan una programación crítica. El canal de televisión privado más antiguo de Venezuela, RCTV, que fue arbitrariamente retirado de la señal de aire pública en 2007, fue obligado en 2010 a dejar de emitir televisión por cable. En 2013, Globovisión, que durante años fue el único canal importante que mantuvo una línea crítica contra Chávez, fue vendido a sectores afines al gobierno debido a que, según su propietario, se había tornado política, económica y jurídicamente inviable. Desde entonces, Globovisión ha reducido considerablemente su programación crítica.

En enero, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, presentó una acción penal por difamación contra un ciudadano que había publicado una nota de opinión en el periódico Tal Cual, y contra cuatro directivos de la empresa propietaria de este medio, incluido su editor. El artículo incluía información de fuentes extraoficiales sobre la cantidad de personas que habían sido asesinadas en Venezuela durante 2013, e indicaba que Cabello había señalado: “Si no les gusta la inseguridad, váyanse”. Cabello sostuvo que en ningún momento hizo esas declaraciones, y que el artículo dañaba su reputación. En febrero, un tribunal penal admitió el caso, dispuso que los cinco acusados comparecieran ante el tribunal una vez por semana y les prohibió salir del país sin autorización judicial.

Durante las protestas de 2014, el gobierno interrumpió la señal de NTN 24, un canal de noticias de la televisión por cable, y amenazó con perseguir penalmente a medios de comunicación por su cobertura de los sucesos violentos. En muchos casos, las víctimas de abusos de las fuerzas de seguridad fueron periodistas profesionales y personas comunes que habían estado tomando fotografías o filmando enfrentamientos entre integrantes de las fuerzas de seguridad y los manifestantes.

Defensores de derechos humanos

El gobierno venezolano ha intentado marginar a los defensores de derechos humanos del país, a través de reiteradas acusaciones infundadas de que estos buscan atentar contra la democracia venezolana con el apoyo del gobierno de Estados Unidos. En marzo, el Presidente Maduro señaló que Rocío San Miguel, directora de una organización no gubernamental (ONG) que promueve la rendición de cuentas de las fuerzas de seguridad, estaba “plenamente involucrada en [un] intento de golpe de

estado” en Venezuela. En mayo, el ministro de justicia indicó que Humberto Prado, director de una ONG que vigila las condiciones penitenciarias en Venezuela, formaba parte de una conspiración para debilitar al gobierno venezolano. En noviembre, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, citando información aportada por “patriotas cooperantes”, señaló que 12 ONG que presentaron informes sobre tortura durante el examen de Venezuela ante el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas tenían “intereses ocultos”.

En 2010, el Tribunal Supremo de Justicia determinó que las personas u organizaciones que reciban financiamiento del exterior podrían ser juzgadas por traición a la patria. A su vez, la Asamblea Nacional promulgó una ley que impide a organizaciones dedicadas a la “defensa de derechos políticos” o a “ejercer el control sobre los poderes públicos” recibir financiamiento internacional.

Impunidad de abusos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad

Hasta noviembre, las fiscalías habían recibido 242 denuncias de presuntas violaciones de derechos humanos cometidas durante las protestas de 2014, incluidos solamente dos casos de tortura. Según el Ministerio Público, los fiscales habían dictado 125 actos conclusivos, y formulado acusaciones contra 15 funcionarios de seguridad del estado. Fuentes oficiales indicaron que dos policías fueron condenados por “sucesos ocurridos en Anzoátegui”, pero no aportaron información adicional sobre el caso o las condenas.

Los asesinatos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad son un problema crónico en Venezuela. En octubre, miembros del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas asesinaron a cinco civiles durante un allanamiento en la sede de una organización oficialista en Caracas. El Ministerio Público libró órdenes de aprehensión contra siete funcionarios que, según la prensa oficial, permanecían prófugos a la fecha de redacción de este documento.

Según las estadísticas oficiales más recientes, 7.998 personas habrían muerto a manos de miembros de las fuerzas de seguridad pública entre enero de 2000 y marzo de 2009. La impunidad por estos delitos continúa siendo la regla.

Condiciones en centros de detención

Las cárceles venezolanas se ubican entre las más violentas de América Latina. La deficiente seguridad, el deterioro de la infraestructura, la sobrepoblación, y la falta de personal suficiente y correctamente capacitado permiten que pandillas armadas tengan control efectivo sobre las cárceles. Es habitual que menores privados de la libertad sean detenidos con presos adultos, especialmente durante el período de prisión preventiva. Según el Observatorio Venezolano de Prisiones, en agosto había aproximadamente 55.000 reclusos —la mayoría en prisión preventiva— en cárceles con una capacidad para 19.000 personas. Desde la creación del Ministerio para el

Servicio Penitenciario en junio de 2011, al menos 1.463 personas han muerto en cárceles, incluidas al menos 150 durante 2014, según fuentes extraoficiales.

Derechos laborales

La legislación laboral adoptada en abril de 2012 contiene disposiciones que limitan la libertad de los sindicatos para redactar sus propios estatutos y elegir a sus representantes. En la práctica, el Consejo Nacional Electoral (CNE), un organismo público, continúa interviniendo en las elecciones sindicales, lo cual viola estándares internacionales.

En julio, el Presidente Maduro denunció que los trabajadores en huelga de la siderúrgica estatal Sidor eran “mafias” que tenían “secuestrada” a la empresa. Los enfrentamientos entre trabajadores y miembros de la Guardia Nacional que dispersaron las protestas dejaron un saldo de algunos manifestantes heridos, según la prensa. En agosto, la ministra de comunicación indicó en un tuit que el gobierno había alcanzado un acuerdo con los “verdaderos trabajadores” de Sidor. Durante ese mes continuaron las manifestaciones y huelgas de trabajadores, quienes reclamaban que el acuerdo no había sido suscrito por los representantes sindicales competentes.

Actores internacionales clave

Varios organismos internacionales de derechos humanos han manifestado su preocupación por los abusos perpetrados durante las protestas de 2014. En febrero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llamó a Venezuela a investigar las conductas ilegales y a garantizar la seguridad de la población. En marzo, seis relatores de la ONU instaron al gobierno venezolano a asegurar “el pronto esclarecimiento de las denuncias de detenciones arbitrarias y de uso excesivo de la fuerza y violencia contra manifestantes, periodistas y trabajadores de los medios durante la reciente ola de protestas en el país”.

En septiembre, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria señaló que Leopoldo López y uno de los alcaldes condenados en abril habían sido detenidos arbitrariamente. En octubre, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos exhortó a Venezuela a liberar a los manifestantes y políticos que habían sido detenidos de manera arbitraria. Durante años, el gobierno de Venezuela se ha negado a autorizar que estos expertos en derechos humanos realicen visitas de investigación al país.

A comienzos de 2014, la organización regional Unasur trabajó con el gobierno de Venezuela y los líderes de la oposición para promover el diálogo. Sin embargo, los representantes de Unasur no llamaron a Venezuela a abordar los abusos, a pesar de que el tratado constitutivo de Unasur estipula que “la plena vigencia de las instituciones democráticas y el respeto irrestricto de los derechos humanos son condiciones esenciales para la construcción de un futuro común de paz y prosperidad económica y social y el desarrollo de los procesos de integración entre los Estados Miembros”. A la fecha de redacción de este informe, el diálogo se encontraba estancado.

En julio, el Departamento de Estado de los Estados Unidos revocó las visas de 24 funcionarios venezolanos en respuesta a denuncias de uso excesivo de la fuerza y detenciones arbitrarias contra manifestantes.

Desde 2013, como consecuencia de la decisión del gobierno de denunciar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los ciudadanos venezolanos y residentes en el país no pueden solicitar la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para la reparación de abusos cometidos luego de esa fecha, cuando los recursos locales no estén disponibles o no sean efectivos. La Comisión Interamericana ha continuado supervisando la situación en Venezuela, aplicando la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

El gobierno venezolano continuó apoyando una campaña de Ecuador para socavar la independencia de la comisión y limitar el financiamiento y la efectividad de su Relatoría Especial para la libertad de expresión.

A la luz de denuncias de organizaciones locales de derechos humanos, que señalan que pacientes con cáncer, VIH/SIDA y hemofilia, entre otras enfermedades, tenían acceso limitado a medicamentos e insumos médicos esenciales, en abril de 2014 el relator especial de la ONU sobre el derecho a la salud exhortó al gobierno venezolano a que “adopte todas las medidas necesarias para garantizar la protección y el pleno disfrute del derecho al más alto nivel posible para toda la población”.

Como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Venezuela ha votado regularmente en contra de medidas para permitir el seguimiento de graves situaciones de derechos humanos ocurridas alrededor del mundo. Venezuela votó en contra de resoluciones que alertaban sobre abusos en Corea del Norte, Siria, Irán, Sri Lanka, Bielorrusia y Ucrania. En octubre, Venezuela fue elegida para integrar durante dos años el Consejo de Seguridad de la ONU.



HUMAN
RIGHTS
WATCH

HUMAN RIGHTS WATCH

350 Fifth Avenue
New York, NY 10118-3299
www.hrw.org

Portada: **La República Centroafricana** — Musulmanes huyen de Bangui, capital de la República Centroafricana, con la ayuda de las fuerzas especiales del Chad.
© 2014 Marcus Bleasdale / VII de Human Rights Watch

Contraportada: **Estados Unidos** — Alina Díaz, defensora de los trabajadores del campo, con Lidia Franco, Gisela Castillo y Marilu Nava-Cervantes, miembros de la Alianza Nacional de Campesinas. Alianza es una organización nacional que trabaja para movilizar a las mujeres trabajadoras del campo en todo el país a que participen con legisladores nacionales en favor de temas relacionados con el abusos en el lugar de trabajo, entre ellos, el impago de salarios, la exposición a pesticidas y el acoso sexual.
© 2013 Platon para Human Rights Watch

Diseño de la portada por Rafael Jiménez

INFORME MUNDIAL | 2015

EVENTOS DE 2014

Este 24° Informe Mundial anual resume las condiciones de derechos humanos en más de 90 países y territorios en todo el mundo en 2014. Refleja el amplio trabajo de investigación que el equipo de Human Rights Watch ha llevado a cabo a lo largo del año, a menudo en estrecha colaboración con activistas de derechos humanos locales.